

Presidencia de los señores diputados Federico F. Monjardín y Enrique Mario Zanni

Secretario: doctor Eduardo T. Oliver. — Prosecretario: doctor Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ABAROA, Rufino Vicente
ALDERETE, Elio
ALZABÉ, Pedro Bernabé
AQUINO, Porfirio Antonio
ARAMBURU, Julio P.
ARITO, Juan
ARMENDARIZ, Alejandro
AYBAR, José Antonio
BAIGORRIA, Nélida Rosa T.
BAUDUCCO, Enrique
BECERRA, Carlos Alberto
BECERRA, Olegario Antonio
BEIRÓ, Angel Francisco
BELNICOFF, Manuel
BENEVENTANO, Domingo
BERNASCONI, Mario
BERTONE, Marcos R.
BLANCO, Rubén Victor M.
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BONET CONVALIA, Salvador
BONIFACIO, Juan José
BREYTER, Isaac
CAGGIANO, Angel R.
CALABRESE, Pablo
CAMET, Carlos Ernesto
CANEPA, Sebastián Oreste
CARRERA, Rodolfo Ricardo
CARRETONI, Jorge C.
CASAS, José B.
CASELLA PINERO, Juan M.
CASTILLO, Hugo Enrique
CIALZETA, Domingo
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTTE (h.), Adolfo
CONTIN, Carlos R.
CORREA, Carlos María
CORTÉS, Ezequiel
CUARETTA, César Ramón
CUEVAZ, Agustín
CHAVERO, Luciano
DAMIANI, Salvador
DECAVI, Jorge Raúl
DE LA VEGA, Juan Carlos
DÍAZ, Rosario Domingo
DOMINGOBENA, Horacio Osvaldo
DOURS, Roberto José
ESCALADA, Alfredo H.
FASCE, Antonio
FAYA, Luis
FEIGUÍN de FERRARI, Berta
FERNANDEZ, José Manuel

FERRARIS, Jorge Domingo
FERREIRA, Jorge W.
FOSSATI, Evers Nelson
FREGA, José
FUERTES, A. Ricardo
GALEANO, Roberto A.
GALLO, Luis M.
GARCIA, Ernesto
GARCIA FLORES, José I.
GARCIA VEIGA, Ignacio
GARONA, Alberto Agustín
GIANSEIRA, Marino Alejandro
GILL, Miguel
GIORDANO ECHEGOYEN, Mario
GOLDSTRAJ, Zenón
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZÁLEZ, Ricardo A.
GOROSPE, Valentín
GRANDI de MARTÍN, Palmira A.
GUTIÉRREZ, José María
GUTIÉRREZ, Victorino H. B.
GYSELS, Néstor Juan
HEREDIA, Gilberto L.
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Rafael
JARA MELAGRANI, Ubaldo H.
JUÁREZ PENALVA, Miguel Angel
JUNIN, Simón
JURI, Jorge
KRONHAUS, Arnoldo
LAFUENTE, Augusto Antonio
LAGOS, César M.
LEÓN, Luis Agustín
LICEAGA, María Teresa M. de
LISCHETTI, Carlos A. M.
LÓPEZ, Juan Carlos Godofredo
LÓPEZ, Juan Raúl
LÓPEZ AGUIRRE, Juan J.
LÓPEZ BALLESTEROS, Horacio María
LÓPEZ SANSON, Ernesto
LÓPEZ SERROT, Oscar
LUELMO, Horacio Flavio
LLUGDAR, Elías N.
MALUF, Emilio
MANES, Juan Carlos
MANTECÓN, Esteban
MANUBENS CALVET, Reginaldo
MARCONATO, Pedro Luis
MARCHINI, Attilio Enrique O.
MARINI, Anselmo A.
MARTIRANI, Luis
MAS, Juan Antonio
MERCADO, Valentín A.
MIGLIARO, Victorio M.

MONJARDÍN, Federico F.
MONTE, Ricardo Alvaro
MORENO, Eufemio Teódo
MOSCA, Gabriel Carlos J.
MUSACCHIO, Vicente M.
NASSIF NEME, Carim
OREJA, Pablo Fermín
PAEZ, Nieves Humberto
PANELO, Ricardo E.
PARENTE, Miguel A.
PARRY, Enrique
PAVIOLO, Ricardo J.
PENNACCHI, Alfredo Arquimedes D.
PERALTA, Domingo Orlando A.
PERETTE, Carlos H.
PERKINS, Jorge Walter
PITTALUGA, José Saturnino
PITTO, Luis María
POITEVIN, E. Emilio
POLOGNA, Aurelio José
PONCE DE LEÓN, Martín A.
POSSE, Melchor S.
POZZIO, Antulio F.
PRECE, Angel Oscar
PURICELLI, Valdemar
RAVETTI, Francisco Antonio
RECIO, José A.
RODRIGUEZ ARAYA, Agustín
RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRIGUEZ DÍAZ, Rogelio S.
ROSENKRANTZ, Eduardo S.
RUIZ, Luelo Carlos
SAGO, Fayiz
SALIM, Abraham
SALOMONE, Humberto
SANTAGADA, Nírido E.
SANTONI, Nabucodonosor
SCHWEIZER, Bernardo
SEGOVIA, Carlos A.
SILVEIRA MARQUEZ, Carlos
SIRENA, Antonio C. P.
SOLARI, Juan Alberto
SPANGENBERG, Enrique
STORANI, Conrado Hugo
SUAREZ, Faundo Roberto
SUJEROS, Pedro Ignacio P.
TECCO, Luis Alberto
TELLO ROSAS, Cándido
TESSIO, Aldo E.
TONELLI, Haroldo Juan
TORTONESE, Dante Oscar
TORTORA, Antonio

TROILO, Eleogardo B.
URCELAY, Rafael Cándido
UZAL, Francisco Hipólito
VALLE, Salvador
VECCHIETTI, Augusto Néstor
VERDAGUER, Armando Miguel
VILLAR, Alfredo
VINCIGUERRA, Rómulo
ZANNI, Enrique Mario
ZARRIELLO, Raúl Jorge
ZUBIAURRE, Alberto

AUSENTES, CON LICENCIA:

BARRIO, Luis
BULIT GONI, Enrique A.
BURDEOS, José Antonio
BUSTOS, Jerónimo L.
CARDENAS, Juan Carlos
DESPOUY, Pablo Pedro
ERREA, Daniel
LAFUENTE, Ambrosio César
LICEAGA, José V.

PARODI GRIMAU, Misael J.
RIVERO, Jorge I.
SAYAGO VALDEZ, Miguel Angel
SOLANAS, Juan Carlos
TARULLI, Pascual

AUSENTES, CON AVISO:

BRUZZO IRAOLA, Juan P.
HEREDIA, Bernardo M.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría. (Página 5453.)
- 2.—Versiones taquigráficas. (Página 5453.)
- 3.—Asuntos entrados:
 - I.—Mensaje del Poder Ejecutivo: inclusión del régimen legal de locaciones urbanas entre los asuntos de las sesiones extraordinarias. (Página 5454.)
 - II.—Mensaje del Poder Ejecutivo: inclusión, en el presupuesto de gastos, de los créditos necesarios para atender el pago de sentencias judiciales. (Página 5454.)
 - III.—Mensaje del Poder Ejecutivo, por el que comunica que ha vetado el artículo 1º del proyecto de ley 14.503, en lo referente a trabajadores marítimos. (Página 5454.)
 - IV.—Mensaje del Poder Ejecutivo: promulgación de la ley 14.555, sobre remuneraciones del intendente municipal, secretarios del Departamento Ejecutivo, y miembros y secretarios del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. (Página 5455.)
 - V.—Mensaje del Poder Ejecutivo, por el que comunica que ha vetado el proyecto de ley 14.508, sobre creación del cuerpo de electricistas de la Marina Mercante. (Página 5455.)
 - VI.—Mensaje del Poder Ejecutivo: informes sobre trabajos de ensanche del puente Pueyrredón, entre la Capital Federal y Avellaneda, Buenos Aires. (Página 5456.)
 - VII.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: otorgamiento de títulos de «precursor» y de «propulsor» de la aeronáutica argentina. (Página 5457.)
 - VIII.—Despachos de comisión. (Página 5462.)
 - IX.—Comunicaciones oficiales. (Página 5462.)
 - X.—Peticiónes particulares. (Página 5462.)
 - XI.—Proyecto de ley del señor diputado Becerra (O. A.); pensión a la señora Irma Ruth Satas. (Página 5463.)
 - XII.—Proyecto de ley del señor diputado Verdaguier: creación de una institución autárquica denominada Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. (Página 5463.)
 - XIII.—Proyecto de ley de los señores diputados Correa y Lafuente (A. A.): edificio para

la escuela primaria de El Peñón, Catamarca. (Página 5468.)

- XIV.—Proyecto de ley del señor diputado Belnicoff: modificación del decreto ley 6.301/58, sobre régimen del personal militar. (Página 5468.)
- XV.—Proyecto de ley del señor diputado Marconato: otorgamiento de pasajes gratuitos a conscriptos. (Página 5469.)
- XVI.—Proyecto de ley del señor diputado Marconato, por el que se designa con el nombre de estación San Antonio de Arco a la estación San Antonio, del Ferrocarril General Bartolomé Mitre. (Página 5469.)
- XVII.—Proyecto de ley de los señores diputados Perette y otros: nulidad de convenios con empresas petrolíferas. (Página 5470.)
- XVIII.—Proyecto de declaración de los señores diputados Perette y Contín, relativo a la eliminación de jueces y camaristas de la justicia federal en la provincia de Entre Ríos. (Página 5470.)
- XIX.—Proyecto de resolución del señor diputado Belnicoff: pedido de informes sobre reestructuración en las categorías del personal del frigorífico «Doctor Lisandro de la Torre». (Página 5470.)
- XX.—Proyecto de resolución del señor diputado Despouy: inclusión en las sesiones extraordinarias del proyecto de dique nivelador en el río Conlara, San Luis. (Página 5470.)
- XXI.—Proyecto de declaración de los señores diputados Tortonese y Rodríguez Araya: auspicio del campeonato sudamericano de fútbol. (Página 5470.)
- XXII.—Proyecto de resolución del señor diputado Perette y otros, por el que se requiere del Poder Ejecutivo el envío de antecedentes y contratos sobre explotación petrolífera. (Página 5470.)
- XXIII.—Proyecto de resolución del señor diputado Rodríguez Araya: pedido de informes sobre introducción de mercaderías por personal de las fuerzas armadas. (Página 5471.)
- XXIV.—Proyecto de declaración del señor diputado Giordano Echegoyen y otros, por el que se propicia la solución integral del problema que afecta al magisterio de la provincia de Buenos Aires. (Página 5471.)

XXV.—Proyecto de resolución de los señores diputados **Perette y Becerra (C. A.)**: clases y conferencias en institutos militares sobre **problemas energéticos**. (Página 5472.)

XXVI.—Proyecto de resolución del señor diputado **Gianserra** y otros: pedido de informes sobre estado de la liquidación del **Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias**. (Página 5472.)

XXVII.—Proyecto de declaración del señor diputado **Silveira Márquez**: inclusión en las sesiones extraordinarias de las **convocatorias** a elección de autoridades en **Misiones** y de convencionales en **La Pampa**. (Página 5472.)

XXVIII.—Proyecto de resolución del señor diputado **Rodríguez Araya**: pedido de informes sobre agresiones a la compañía argentina de revistas teatrales, en **Asunción del Paraguay**. (Página 5473.)

4.—Indicación del señor diputado **Marini** con respecto a tramitaciones vinculadas con antecedentes del proyecto de ley por el que se declaran de jurisdicción nacional servicios públicos de electricidad. (Página 5473.)

5.—Licencias para faltar a sesiones. (Página 5476.)

6.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado **Rodríguez Araya** con motivo de publicaciones periódicas. (Página 5478.)

7.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado **Cánepa** a propósito de hechos vinculados a las actitudes asumidas durante la labor legislativa. (Página 5480.)

8.—Homenaje a la memoria de don **Miguel Sajaroff**. (Página 5481.)

9.—Moción del señor diputado **Giordano Echegoyen** de que se trate sobre tablas el proyecto de declaración que propicia la solución del problema que afecta a los maestros de la provincia de Buenos Aires. (Página 5482.)

10.—Fijación del **orden de la labor** de la Honorable Cámara. (Página 5488.)

11.—Consideración del despacho de las comisiones de **Industria y de Presupuesto y Hacienda** en el proyecto de ley, en revisión, por el que se crea un ente autárquico para la explotación de los **yacimientos minerales de Farallón Negro**. (Página 5488.)

12.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado **Cortés** a propósito de expresiones vertidas en los debates de la Honorable Cámara. (Página 5523.)

13.—Continúa la consideración del despacho de las comisiones de **Industria y de Presupuesto y Hacienda** a que se refiere el número 11 de este sumario. (Página 5523.) Se sanciona.

14.—Indicación del señor diputado **Gómez Machado** de pronto despacho de la cuestión de privilegio a que se refiere el número 12 de este sumario. (Página 5536.)

15.—Apéndice:

I.—Sanciones de la Honorable Cámara. (Página 5539.)

II.—Inserciones. (Página 5542.)

—En Buenos Aires, a los quince días del mes de octubre de 1958, a la hora 17:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ponce de León. — Hago indicación de que se continúe llamando hasta conseguir quórum.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rodríguez Araya. — Solicito que se invite a los señores diputados que se encuentran en la casa a concurrir al recinto. Fundo este pedido en razones de consideración y de respeto para con los diputados que desde hace dos horas estamos sentados en las bancas. Y para lo sucesivo, solicito que no se prorrogue más el término para iniciar la sesión, porque el diputado que habla va a pedir que se difiera la sesión cuando no haya número en el recinto una vez vencida una tolerancia razonable de espera: la demora en iniciar las sesiones configura una falta de respeto para los legisladores que se hacen presentes a la hora de citación.

Sr. Presidente (Monjardín). — La Presidencia ha realizado gestiones tendientes a conseguir quórum, pero algunos señores diputados han demorado su concurrencia al recinto por estar ocupados en las comisiones.

Sr. Perette. — ¿Por cuánto tiempo se va a seguir llamando?

Sr. Presidente (Monjardín). — Por muy pocos minutos, porque en la casa hay 120 señores diputados y en el recinto hay 90 presentes.

Si hay asentimiento, de conformidad con la indicación formulada por el señor diputado por la Capital, se seguirá llamando.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se continuará llamando.

—A la hora 17 y 5:

2

VERSIONES TAQUIGRAFICAS

Sr. Presidente (Monjardín). — Queda abierta la sesión con la presencia de 100 señores diputados.

Si no se formulan observaciones a la versión taquigráfica correspondiente a la sesión del 17 de septiembre último, se dará por aprobada y, previa autenticación, se archivará.

—Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del 17 de septiembre de 1958.

Sr. Domingorena. — El proyecto de ley es iniciativa del actual gobierno.

Sr. Giordano Echegoyen. — Para marcar la diferencia entre un gobierno y otros, debemos dar jerarquía y libertad al maestro.

Existe ya una diferencia: la Cámara de Diputados de la provincia ha sancionado por unanimidad el proyecto de ley que concede a los maestros la equiparación. Por eso, no veo inconvenientes para que esta Cámara exprese el anhelo de que el diferendo desaparezca.

Sr. González. — El problema está resuelto: si el magisterio no levanta la huelga, no habrá equiparación. Ese es el pensamiento del gobierno de Buenos Aires, y nosotros no queremos intervenir.

Sr. Casella Piñero. — Criterio distinto hubo con los carteros.

Sr. Marini. — ¿Por qué no lo hicieron así con los ferroviarios y otros gremios?

Sr. González. — Era distinta la situación.

Sr. Marini. — Con los maestros es fácil la carrera.

Sr. González. — Los maestros tienen la equiparación ya votada.

Sr. Sago. — Pido la palabra para una brevísima aclaración.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sago. — Entendemos que una huelga debe hacerse cuando todos los caminos están cerrados.

El señor diputado Casella Piñero expresó con respecto al proyecto, que sólo hay equiparación en cuanto al haber básico. Si una vez aprobada la equiparación por una Cámara, no respondía a lo peticionado, tiempo había para declarar luego la huelga, antes de que la iniciativa fuera convertida en ley. Por otra parte, el señor diputado Giordano Echegoyen expresó que el proyecto había contado con despacho unánime de los tres sectores.

En cuanto al subsidio, que es sólo por este año, es sabido que el presupuesto tiene carácter anual y que no puede preverse para años subsiguientes. Además, en los últimos años no se han producido rebajas y es prácticamente imposible hoy pensar que el próximo año percibirán menos.

Sr. González. — Tampoco tiene presupuesto garantizado el resto del personal, ni tienen los señores diputados la dieta garantizada.

Sr. Gómez Machado. — Nuestro bloque va a votar por la negativa la moción de consideración sobre tablas.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar si se considera sobre tablas el proyecto de declaración del señor diputado por Buenos Aires.

—Resulta negativa de 68 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — El proyecto de declaración pasa a la Comisión de Educación.

10

ORDEN DE LA LABOR

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Gómez Machado. — Hago moción de que en la sesión de hoy se considere el despacho de comisión referente a las minas de Farallón Negro y que se destine la sesión de mañana a considerar, como único asunto, los convenios con CADE y CEP.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar la moción del señor diputado por Santa Fe.

—Resulta afirmativa de 88 votos; votan 100 señores diputados.

11

YACIMIENTOS MINERALES DE FARALLON NEGRO

(Orden del día número 495)

Despacho de comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado referente a la creación de un ente autárquico denominado Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que ha de tomar a su cargo el estudio, cateo, explotación y comercialización de los minerales existentes en Farallón Negro o Agua de Dionisio, ubicado en el distrito de Hualfin, departamento de Belén, provincia de Catamarca; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción.

Sala de las comisiones, 27 de septiembre de 1958.

Angel Oscar Prece. — Simón Junín.
— Juan Arito. — José B. Casás.
Hugo Enrique Castillo. — Jorge Raúl Decavi. — Luis M. Gallo.
Ricardo A. González. — Gilberto L. Heredia. — Miguel Angel Juárez Peñalva. — Horacio María López Ballesteros. — Valentín A. Mercado. — Agustín Rodríguez Araya. — Abraham Salim. — Nabucodonosor Santoni. — Enrique Spangenberg. — Rómulo Vinciguerra.

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1958.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado el

siguiente proyecto de ley, que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Créase Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley; y la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objeto principal.

Art. 2º — El domicilio de YMAD estará en la provincia de Catamarca, con la ubicación precisa, dentro de la jurisdicción provincial, que determine el directorio de la empresa, sin perjuicio de las delegaciones o filiales que podrán establecerse en la provincia de Tucumán u otros lugares del país.

Art. 3º—YMAD tiene la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado para la realización de su objeto, y, en consecuencia, podrá adquirir toda clase de derechos, inclusive derechos mineros; contraer toda clase de obligaciones y ejecutar y celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos reglados por los códigos de la Nación y leyes generales y especiales pertinentes.

Art. 4º—La provincia de Catamarca queda autorizada para conceder a YMAD, con prescindencia de las condiciones que establece el Código de Minería en cuanto al número y medida de las pertenencias, el yacimiento minero de Agua de Dionisio, ubicado en el distrito de Hualfín, departamento de Belén, provincia de Catamarca, con una superficie de trescientos cuarenta y tres kilómetros cuadrados noventa y ocho hectáreas (343,98 km²), definida por un rectángulo cuyo lado mayor de veintitrés kilómetros cuatrocientos metros (23,4 km.) tiene su punto de partida en el paralelo 27° 20' y el meridiano 66° 48' 30" y con dirección Sur 62°. Este pasa por el puesto de Ovejería; desde el extremo de esta línea, una perpendicular de catorce kilómetros setecientos metros (14,7 km.) que pasa por los puestos de Vizcachas y Escaleras; desde el extremo de esta línea, una perpendicular que pasa por el puesto de Aguada y desde el extremo de esta última línea, otra perpendicular que cierra el polígono hasta el punto de partida.

Art. 5º — YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorgan ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.

Art. 6º — YMAD estará dirigido y administrado por un directorio integrado por cuatro vocales y un presidente. Dos vocales serán designados por la provincia de Catamarca, dos por la Universidad Nacional de Tucumán, y el presidente por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y serán reelegibles e inamovibles, sin perjuicio de remoción por haber caído en algunas de las inhabilidades establecidas en el artículo 9º, o por inconducta, negligencia en el desempeño de su cargo o mala administración. Estas causales serán establecidas previo sumario, y la resolución del directorio, a su respecto, será obligatoria para la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, las que tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Los vocales del directorio se renovarán por mitades cada dos años, debiéndose determinar por sorteo el vocal designado por la provincia de Catamarca y el designado por la Universidad Nacional de Tucumán que deben cesar en sus funciones en la primera renovación.

El directorio designará cada año un vicepresidente para reemplazar al presidente en caso de impedimento o ausencia.

Cuando se produzca una vacante durante el período para el cual haya sido designado un miembro del directorio, el nombramiento del reemplazante se hará sólo por el tiempo que falte para cumplir el período. Los miembros del directorio que hayan terminado su período continuarán en el desempeño de sus cargos, con plenas facultades, hasta tanto se designe su reemplazante.

Las resoluciones del directorio se tomarán por simple mayoría de votos. El presidente tendrá doble voto en caso de empate. El quórum para deliberar válidamente será de tres miembros. En ningún caso los miembros del directorio podrán negarse a emitir su voto, sin perjuicio de las reservas que estimasen del caso formular y de las excusaciones que correspondan por ley, de las que se dejará constancia en el libro de actas.

Art. 7º — Si se denunciara a tres o más de los miembros del directorio como incursos en algunas de las causales previstas en el artículo 6º, el Poder Ejecutivo de la Nación podrá disponer la intervención del directorio. Previa la confirmación de la denuncia, observando todas las garantías de ley, el interventor declarará la caducidad en sus funciones de los afectados, pero en ningún caso podrá asumir él mismo tales funciones. El Poder Ejecutivo de la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Art. 8º — Para ser miembro del directorio se requiere ser ciudadano argentino mayor de

treinta años de edad, o, en caso de ser naturalizado, con quince años de ciudadanía en ejercicio.

Art. 9º — No podrán ser miembros del directorio:

- a) Los que ejerzan cualquier otra función o empleo en el orden nacional, provincial o municipal, con excepción de las de la docencia;
- b) Los que se hallen en estado de quiebra o concurso civil y los que hayan sido condenados por delitos comunes;
- c) Los que tengan o hayan tenido, dentro de los últimos cinco años anteriores a su designación, relaciones de dependencia o de intereses con la exploración, explotación, industrialización y comercialización privada de minerales, excepto en sociedades cooperativas o de economía mixta integradas exclusivamente por el Estado y usuarios.

Los miembros del directorio que con posterioridad a su nombramiento cayeren en algunos de estos impedimentos, cesarán en sus funciones y serán reemplazados de inmediato.

Art. 10. — El directorio tendrá todas las facultades y atribuciones requeridas para el cumplimiento integral de la función que se le confiere, correspondiéndole en especial:

- a) Realizar en los términos del artículo 1º el estudio, exploración, cateo, explotación y comercialización de todos los minerales existentes en la zona delimitada por el artículo 4º, a cuyo fin podrá ejecutar y ejercer los actos y funciones establecidos en el artículo 3º;
- b) Conferir poderes generales y especiales y revocarlos;
- c) Disponer la organización interna de la empresa y reglamentar y aprobar las normas complementarias del régimen de contratación de obras y servicios, adquisiciones, etcétera;
- d) Dictar el reglamento interno de la empresa, con sujeción a las disposiciones de esta ley y del estatuto orgánico que, a propuesta del directorio, apruebe el Poder Ejecutivo. Mientras tanto regirá el estatuto orgánico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en todo cuanto resulte aplicable;
- e) Nombrar, contratar, promover, suspender, aceptar renunciaciones y remover al personal superior, administrativo y técnico.

En cuanto al personal inferior, esas mismas facultades competirán al superintendente o gerente general de la empresa;

- f) Preparar anualmente el plan de acción a cumplir durante el o los ejercicios económicos siguientes, acompañando una memoria descriptiva de las actividades

a desarrollar por la empresa y un presupuesto de explotación que contemple en forma integral y en grandes rubros, los recursos y erogaciones que han de realizarse durante el ejercicio económico siguiente, así como la estimación de los probables resultados a obtener. El plan de acción y el presupuesto de explotación deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo nacional, dando cuenta de ello al Congreso. Si por cualquier circunstancia no lo fuere antes de iniciarse el ejercicio económico a que se refiere, continuará aplicándose el presupuesto anterior;

- g) Introducir, cuando las necesidades de la empresa así lo exijan, las modificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios en el presupuesto, sin alterar su monto y dando cuenta de ello al Poder Ejecutivo nacional. Los reajustes que impliquen o permitan un aumento en el rubro sueldos y jornales, requerirán el voto afirmativo de la totalidad de sus miembros;
- h) Elevar al Tribunal de Cuentas de la Nación una rendición de cuentas consistente en un balance mensual de fondos, y al finalizar cada ejercicio, un balance del activo y del pasivo y un estado general de ganancias y pérdidas;
- i) Elevar anualmente a los poderes ejecutivos de la Nación y de la provincia de Catamarca y al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán una memoria descriptiva y comparativa de la gestión realizada en relación con lo previsto en el plan de acción;
- j) Fijar a propuesta del presidente la retribución extraordinaria que deba darse a los funcionarios, empleados y obreros en razón de su eficacia en el trabajo, de acuerdo con la reglamentación que al efecto se dicte y dentro de un cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas;
- k) Crear las reservas necesarias para ampliar la exploración y explotación de los yacimientos;
- l) Crear en la provincia de Catamarca un instituto de investigaciones mineras y una escuela de minería a fin de promover investigaciones mineras y metalúrgicas y la formación de personal especializado.

Art. 11. — Corresponde al presidente del directorio:

- a) Tener la representación legal y administrativa de la empresa;
- b) Girar sobre los fondos de la empresa, debiendo su firma ser acompañada por

la del contador y tesorero o por la del funcionario autorizado para ello por el directorio;

- c) Convocar y presidir las reuniones del directorio y cumplir y hacer cumplir sus resoluciones;
- d) Resolver por sí todos aquellos asuntos para los cuales esté autorizado por el reglamento interno que dicte el directorio, así como también aquellos otros que están reservados a este último, cuando razones de extrema urgencia así lo exijan, con cargo de dar cuenta a dicho cuerpo, a cuyo efecto deberá citarlo de inmediato.

Art. 12. — La provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán podrán designar uno o más delegados, cuyas atribuciones serán las siguientes:

- a) Examinar los libros y documentos de la empresa y verificar el estado de caja y la existencia de títulos y valores de toda especie;
- b) Fiscalizar la ejecución y el cumplimiento del plan de acción a que se refiere el inciso f) del artículo 10.

Estos delegados serán retribuidos por la parte a la que representen y ejercerán sus funciones de modo que no entorpezcan la marcha regular de la explotación. Las autoridades de YMAD dispondrán, a pedido de los delegados, las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Art. 13. — En sus relaciones con terceros YMAD se regirá por el derecho privado. A los efectos de este artículo se considerarán terceros todas las personas de existencia visibles o jurídica, constituídas éstas por capitales privados o mixtos, y las dependencias o empresas del Estado nacional, provincial o municipal. En sus relaciones con la provincia de Catamarca será aplicable la presente ley y supletoriamente el Código de Minería y demás leyes y reglamentos vigentes. En todo lo que atañe a sus relaciones con el Poder Ejecutivo nacional, actuará por intermedio de la Secretaría de Industria y Minería del Ministerio de Economía, siéndole, en ese aspecto, aplicables las normas de derecho público.

Art. 14. — YMAD efectuará sus compras y contrataciones conforme a los principios básicos de publicidad y competencia de precios, mediante licitación pública, licitación privada, concurso privado de precios o contratación directa, según las normas que se establezcan en su reglamento interno. Mientras tanto, regirán las previstas a este respecto para Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Art. 15. — Al constituirse YMAD, el Estado nacional le aportará de rentas generales, como capital del mismo, la suma de \$ 20.000.000

(veinte millones de pesos moneda nacional). Además, le otorgará en préstamo, sin interés, reembolsable en diez cuotas anuales iguales a contar del cuarto año de su constitución, hasta la suma de \$ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos moneda nacional), importe que también el Poder Ejecutivo tomará de rentas generales con imputación a la presente ley.

Art. 16. — Independientemente de los recursos ordinarios provenientes de sus actividades, YMAD podrá hacer uso del crédito, hasta el monto que lo autorice su presupuesto, para completar o facilitar la financiación de las mismas, a cuyo efecto podrá:

- a) Solicitar préstamos bancarios a entidades oficiales, mixtas o privadas, y recurrir a cualquiera otra forma de crédito o financiación;
- b) Recibir contribuciones del Estado nacional, reintegrables a no. En este último caso el importe de la contribución importará aumento del capital de la empresa.

Art. 17. — A los efectos de la fiscalización del manejo de los fondos y ejecución del presupuesto, el Tribunal de Cuentas de la Nación podrá destacar periódicamente uno o más auditores al solo efecto de:

- a) Verificar la correcta aplicación del plan de cuentas, la veracidad, exactitud y simultaneidad de las registraciones y la oportuna presentación de los estados periódicos;
- b) Analizar los actos acordados por el directorio para comprobar si se ajustan a las disposiciones legales o reglamentarias que correspondan y si encuadran dentro de los planes de acción y presupuestos de explotación autorizados. Los auditores propiciarán, ante el Tribunal de Cuentas y a efectos de que el mismo resuelva conforme con las atribuciones que la acuerda el artículo 85 de la ley de contabilidad, las observaciones que consideren procedentes respecto de todo acto o procedimiento que se oponga a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, sin que en ningún caso las observaciones formuladas tengan efecto suspensivo.

Art. 18. — Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma:

- a) El sesenta por ciento (60 %) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la Ciudad Universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50 % del total general, destinándose el 10 % restante a la referida construc-

ción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán;

- b) El cuarenta por ciento (40 %) restante será destinado para la terminación de la Ciudad Universitaria, conforme a los planos ya aprobados;
- c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40 %) se destinará el cincuenta por ciento (50 %) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50 %) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado.

Art. 19. — YMAD deberá:

- a) Instalar y poner en funcionamiento la planta de concentración y beneficio cuya capacidad mínima será de doscientas cincuenta toneladas por día, en un plazo máximo de siete (7) años a partir de su constitución, y realizar el desarrollo de una exploración adecuada;
- b) Mantener una producción relacionada con la capacidad de la planta.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la aplicación de lo establecido por el artículo 281 del Código de Minería.

Art. 20. — YMAD no podrá ser declarada en quiebra. El Poder Ejecutivo nacional podrá resolver la disolución y liquidación de la empresa por haberse declarado la caducidad de la concesión. En tal caso, el Poder Ejecutivo nacional determinará el destino y procedimiento a seguir respecto de los bienes que constituyen el patrimonio. Quedan comprendidos en esta disposición los útiles, maquinarias y demás objetos destinados a la exploración y explotación, que puedan separarse de la mina sin perjuicio para ella, la cual volverá al dominio de la provincia de Catamarca en las condiciones que señala el artículo 22 de esta ley.

El producido neto de las operaciones de transferencia o enajenación de bienes de la empresa, que realice el Poder Ejecutivo nacional en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, será ingresado en el Tesoro nacional.

El Estado nacional responderá por el pago del pasivo no cubierto que resulte.

Art. 21. — Los bienes y las actividades de YMAD quedan exentos de toda clase de gravámenes, impuestos y tasas de carácter nacional, provincial y municipal, con excepción del canon y de las contribuciones que determina el Código de Minería y de las tasas retributivas de servicios públicos efectivamente prestados.

Art. 22. — En cualquier caso de caducidad de la concesión, los yacimientos quedarán reservados para el Estado por el término de un año.

Art. 23. — En tanto no se verifique la definitiva concesión de los yacimientos a favor de

YMAD, el plazo de la reserva a que se refiere el decreto ley 17.346/57, deberá considerarse prorrogado.

Art. 24. — Derógase el decreto ley 270/58.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dios guarde al señor presidente.

JOSÉ MARÍA GUIDO.
Luis Abel Viscay.

ANTECEDENTES

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1958.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia con el objeto de someter a la decisión del Congreso Nacional el adjunto proyecto de ley mediante el cual se persigue la creación del ente autárquico que ha de emprender la explotación integral de los yacimientos de oro, plata y manganeso situados en Farallón Negro o Agua de Dionisio, lugar de la provincia de Catamarca.

Dicho proyecto subroga al decreto ley 270/58, cuya modificación se acordó por la cláusula séptima de la convención y declaración suscritas el 7 de junio último por el excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, su excelencia el señor gobernador de Catamarca, el señor rector de la Universidad Nacional de Tucumán, legisladores y funcionarios, nacionales y provinciales.

De acuerdo con la cláusula octava de dicho documento, aprobado por ley 1.695 de la Honorable Legislatura de Catamarca, el proyecto adjunto fue redactado íntegramente por representantes de la provincia de Catamarca, que fueron los doctores Ricardo G. A. Herrera y Ramón Bonaterra, y de la Universidad Nacional de Tucumán, los doctores Celedonio Gutiérrez y Horace W. Bliss, todos ellos especialmente designados al efecto, habiéndose introducido algunas variantes que se estima no alteran lo substancial del instrumento.

El carácter público y notorio alcanzado por todo lo relativo a las minas de Agua de Dionisio eximen al Poder Ejecutivo de relatar los antecedentes de la cuestión, suficientemente conocidos, y de fundar la necesidad y urgencia en constituir el ente explotador.

No obstante ello, cumplo en señalar a vuestra honorabilidad una circunstancia que torna angustiosa la necesidad y urgencia invocadas; el próximo vencimiento de la reserva de la zona, establecido para el día 31 de diciembre próximo por el decreto ley 17.346-57. Si antes de esa fecha no se ha promulgado y publicado la ley propiciada, en virtud de cuyo artículo 23 deberá considerarse prorrogado el plazo de la reserva, los yacimientos podrán desde entonces ser válidamente solicitados en concesión por cualquier particular, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código de Minería. El Poder Ejecutivo confía en que ello no ha de ocurrir, fundándose en la responsabilidad evidenciada por los señores miembros del Congreso Nacional y en la importancia de orden económico, cultural, social y político que el asunto reviste.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO FRONZIZI.

Emilio Donato del Carril. — Ricardo Lumí.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación y superficie se determinan en esta misma ley, y la comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad o explotación vinculada a su objeto principal.

Art. 2º — El domicilio de YMAD estará en la provincia de Catamarca, con la ubicación precisa, dentro de la jurisdicción provincial que determine el directorio de la empresa, sin perjuicio de las delegaciones o filiales que podrán establecerse en la provincia de Tucumán u otros lugares del país.

Art. 3º — YMAD tiene la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado para la realización de su objeto y, en consecuencia, podrá adquirir toda clase de derechos, inclusive derechos mineros; contraer toda clase de obligaciones y ejecutar y celebrar toda clase de actos jurídicos y contratos reglados por los códigos de la Nación y leyes generales y especiales pertinentes.

Art. 4º — La provincia de Catamarca queda autorizada para conceder a YMAD, con prescindencia de las condiciones que establece el Código de Minería, en cuanto al número y medida de las pertenencias, el yacimiento minero de Agua de Dionisio, ubicado en el distrito de Hualfin, departamento de Belén, provincia de Catamarca, con una superficie de trescientos cuarenta y tres kilómetros cuadrados noventa y ocho hectáreas (343,98 km.²), definida por un rectángulo, cuyo lado mayor, de veintitrés kilómetros cuatrocientos metros (23,4 km.), tiene su punto de partida en el paralelo 27º20' y el meridiano 66º48'30" y con dirección Sur 62º Este pasa por el puesto de Ovejera; desde el extremo de esta línea, una perpendicular de catorce kilómetros setecientos metros (14,7 km.), que pasa por los puestos de Vizcachas y Escaleras; desde el extremo de esta línea, una perpendicular que pasa por el puesto de Aguada, y desde el extremo de esta última línea otra perpendicular que cierra el polígono hasta el punto de partida.

Art. 5º — YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorga ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales.

Art. 6º — YMAD estará dirigido y administrado por un directorio integrado por cuatro vocales y un presidente. Dos vocales serán designados por la provincia de Catamarca, dos por la Universidad Nacional de Tucumán y el presidente por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y serán reelegibles e inamovibles, sin perjuicio de remoción por haber caído en alguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 9º o por inconducta, negligencia en el desempeño de su cargo o mala administración. Estas causales serán establecidas previo sumario y la resolución del directorio a su respecto será obligatoria para la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tu-

cumán, las que tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Los vocales del directorio se renovarán por mitades cada dos años, debiéndose determinar por sorteo el vocal designado por la provincia de Catamarca y el designado por la Universidad Nacional de Tucumán, que deben cesar en sus funciones en la primera renovación.

El directorio designará cada año un vicepresidente para reemplazar al presidente en caso de impedimento o ausencia.

Cuando se produzca una vacante durante el período para el cual haya sido designado un miembro del directorio, el nombramiento del reemplazante se hará sólo por el tiempo que falte para cumplir el período. Los miembros del directorio que hayan terminado su período continuarán en el desempeño de sus cargos, con plenas facultades, hasta tanto se designe su reemplazante.

Las resoluciones del directorio se tomarán por simple mayoría de votos. El presidente tendrá doble voto en caso de empate. El quórum para deliberar válidamente será de tres miembros. En ningún caso los miembros del directorio podrán negarse a emitir su voto, sin perjuicio de las reservas que estimasen del caso formular y de las excusaciones que correspondan por ley, de las que se dejará constancia en el libro de actas.

Art. 7º — Si se denunciara a tres o más de los miembros del directorio como incursos en algunas de las causales previstas en el artículo 6º, el Poder Ejecutivo de la Nación podrá disponer la intervención del directorio. Previa la confirmación de la denuncia, observando todas las garantías de ley, el interventor declarará la caducidad en sus funciones de los afectados, pero en ningún caso podrá asumir él mismo tales funciones. El Poder Ejecutivo de la Nación, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán tomarán los recaudos necesarios para reemplazar de inmediato a los directores cesantes.

Art. 8º — Para ser miembro del directorio se requiere ser ciudadano argentino mayor de treinta años de edad, o, en caso de ser naturalizado, con quince años de ciudadanía en ejercicio.

Art. 9º — No podrán ser miembros del directorio:

- a) Los que ejerzan cualquier otra función o empleo en el orden nacional, provincial o municipal, con excepción de las de la docencia;
- b) Los que se hallen en estado de quiebra o concurso civil y los que hayan sido condenados por delitos comunes;
- c) Los que tengan o hayan tenido, dentro de los últimos cinco años anteriores a su designación, relaciones de dependencia o de intereses con la explotación, exploración, industria y comercio privado del oro, la plata y el manganeso, excepto en sociedades cooperativas o de economía mixta integradas exclusivamente por el Estado y usuarios.

Los miembros del directorio que con posterioridad a su nombramiento cayeren en algunos de estos impedimentos, cesarán en sus funciones y serán reemplazados de inmediato.

Art. 10. — El directorio tendrá todas las facultades y atribuciones requeridas para el cumplimiento integral de la función que se le confiere, correspondiéndole en especial:

- a) Realizar en los términos del artículo 1º, el estudio, exploración, cateo, explotación y comercialización de todos los minerales existentes en la zona delimitada por el artículo 4º, a cuyo fin podrá ejecutar y ejercer los actos y funciones establecidas en el artículo 3º;
- b) Conferir poderes generales y especiales y revocarlos;
- c) Disponer la organización interna de la empresa y reglamentar y aprobar las normas complementarias del régimen de contratación de obras y servicios, adquisiciones, etcétera;
- d) Dictar el reglamento interno de la empresa, con sujeción a las disposiciones de esta ley y del estatuto orgánico que, a propuesta del directorio, apruebe el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, regirá el estatuto orgánico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en todo cuanto resulte aplicable;
- e) Nombrar, contratar, promover, suspender, aceptar renunciaciones y remover al personal superior, administrativo y técnico.

En cuanto al personal inferior, esas mismas facultades competirán al superintendente o gerente general de la empresa;

- f) Preparar anualmente el plan de acción a cumplir durante el o los ejercicios económicos siguientes, acompañando una memoria descriptiva de las actividades a desarrollar por la empresa y un presupuesto de explotación que contemple en forma integral y en grandes rubros, los recursos y erogaciones que han de realizarse durante el ejercicio económico siguiente, así como la estimación de los probables resultados a obtener.
- El plan de acción y el presupuesto de explotación deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo nacional, dando cuenta de ello al Congreso. Si por cualquier circunstancia no lo fuere antes de iniciarse el ejercicio económico a que se refiere, continuará aplicándose el presupuesto anterior;
- g) Introducir, cuando las necesidades de la empresa así lo exijan, las modificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios, de los créditos parciales que constituyen los rubros principales, sin alterar el monto de éstos, dando cuenta al Poder Ejecutivo nacional. Los reajustes que impliquen o permitan un aumento en el rubro sueldos y jornales, requerirán el voto afirmativo de la totalidad de sus miembros;
 - h) Elevar al Tribunal de Cuentas de la Nación una rendición de cuentas consistente en un balance mensual de fondos y al finalizar cada ejercicio un balance del activo y del pasivo y un estado general de ganancias y pérdidas;
 - i) Elevar anualmente a los poderes ejecutivos de la Nación y de la provincia de Catamarca y al consejo superior de la Universidad Nacional de Tucumán, una memoria descriptiva y comparativa de la gestión realizada en relación con lo previsto en el plan de acción;
 - j) Fijar a propuesta del presidente la retribución extraordinaria que deba darse a los funcionarios, empleados y obreros en razón de su eficacia en el trabajo, de acuerdo con la reglamentación que al efecto se dicte, y den-

tro de un cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas;

- k) Crear las reservas necesarias para ampliar la exploración y explotación de los yacimientos;
- l) Crear en la provincia de Catamarca un instituto de investigaciones mineras y una escuela de minería, a fin de promover investigaciones mineras y metalúrgicas y la formación de personal especializado.

Art. 11. — Corresponde al presidente del directorio:

- a) Tener la representación legal y administrativa de la empresa;
- b) Girar sobre los fondos de la empresa, debiendo su firma ser acompañada por la del contador y tesorero, o por la del funcionario autorizado para ello por el directorio;
- c) Convocar y presidir las reuniones del directorio y cumplir y hacer cumplir sus resoluciones;
- d) Resolver por sí todos aquellos asuntos para los cuales esté autorizado por el reglamento interno que dicte el directorio, como así también aquellos otros que están reservados a este último cuando razones de extrema urgencia así lo exijan, con cargo de dar cuenta a dicho cuerpo, a cuyo efecto deberá citarlo de inmediato.

Art. 12. — La provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, podrán designar uno o más delegados cuyas atribuciones serán las siguientes:

- a) Examinar los libros y documentos de la empresa y verificar el estado de caja y la existencia de títulos y valores de toda especie;
- b) Fiscalizar la ejecución y el cumplimiento del plan de acción a que se refiere el inciso f) del artículo 10.

Estos delegados serán retribuidos por la parte a la que representen y ejercerán sus funciones de modo que no entorpezcan la marcha regular de la explotación. Las autoridades de YMAD dispondrán, a pedido de los delegados, las medidas necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Art. 13. — En sus relaciones con terceros YMAD se regirá por el derecho privado. A los efectos de este artículo se considerarán terceros todas las personas de existencia visible o jurídica, constituidas éstas por capitales privados o mixtos y las dependencias o empresas del Estado nacional, provincial o municipal. En sus relaciones con la provincia de Catamarca será aplicable la presente ley y supletoriamente el Código de Minería y demás leyes y reglamentaciones vigentes. En todo lo que atañe a sus relaciones con el Poder Ejecutivo nacional actuará por intermedio de la Secretaría de Industria y Minería y del Ministerio de Economía, siéndole, en ese aspecto, aplicables las normas de derecho público.

Art. 14. — YMAD efectuará sus compras y contrataciones conforme a los principios básicos de publicidad y competencia de precios, mediante la licitación pública, licitación privada, concurso privado de precios, y contratación directa, según las normas que se establezcan en su reglamento interno. Mientras tanto, regirán las previstas a este respecto para Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Art. 15. — Al constituirse YMAD, el Estado nacional le aportará de rentas generales, como capital del mismo, la suma de \$ 20.000.000 (veinte millones de pesos moneda nacional). Además, le otorgará en préstamo, sin interés, reembolsable en diez cuotas anuales iguales a contar del cuarto año de su constitución hasta la suma de \$ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos moneda nacional).

Art. 16. — Independientemente de los recursos ordinarios provenientes de sus actividades, YMAD podrá hacer uso del crédito, hasta el monto que lo autorice su presupuesto, para completar o facilitar la financiación de las mismas, a cuyo efecto podrá:

- a) Solicitar préstamos bancarios a entidades oficiales, mixtas o privadas, y recurrir a cualquiera otra forma de crédito financiación;
- b) Recibir contribuciones del Estado nacional reintegrables o no. En este último caso el importe de la contribución importará aumento del capital de la empresa.

Art. 17. — A los efectos de la fiscalización del manejo de los fondos y ejecución del presupuesto, el Tribunal de Cuentas de la Nación podrá destacar periódicamente uno o más auditores al solo efecto de:

- a) Verificar la correcta aplicación del plan de cuentas, la veracidad, exactitud y simultaneidad de las registraciones y la oportuna presentación de los estados periódicos;
- b) Analizar los actos acordados por el directorio para comprobar si se ajustan a las disposiciones legales o reglamentarias que correspondan y si encuadran dentro de los planes de acción y presupuestos de explotación autorizados. Los auditorios propiciarán, ante el Tribunal de Cuentas y a efectos de que el mismo resuelva conforme con las atribuciones que le acuerda el artículo 85 de la ley de contabilidad, las observaciones que consideren procedentes respecto de todo acto o procedimiento que se oponga a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Art. 18. — Las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma:

- a) El sesenta por ciento (60 %) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50 % del total general, destinándose el 10 % restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán;
- b) El cuarenta por ciento restante (40 %) será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados;
- c) Una vez cumplido los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40 %) se destinará el cincuenta por ciento (50 %) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50 %) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado.

Art. 19. — YMAD deberá:

- a) Instalar y poner en funcionamiento la planta de concentración y beneficio, cuya capacidad

mínima será de doscientos cincuenta toneladas por día, en un plazo máximo de siete años (7) a partir de su constitución y realizar el desarrollo de una exploración adecuada;

- b) Mantener una producción relacionada con la capacidad de la planta.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la aplicación de lo establecido por el artículo 281 del Código de Minería.

Art. 20. — YMAD no podrá ser declarada en quiebra. El Poder Ejecutivo podrá resolver la disolución y liquidación de la empresa, sea por haberse declarado la caducidad de la concesión o por no estar integrada la mayoría del directorio a los dos meses de caducados los mandatos de los miembros respectivos o por alguna otra razón de similar importancia que demuestre fehacientemente la imposibilidad de continuar con el giro de aquélla. En tales casos el Poder Ejecutivo nacional determinará el destino y procedimiento a seguir, respecto a los bienes que constituyen el patrimonio. Quedan comprendidos en esta disposición los útiles, maquinarias y demás objetos destinados a la exploración y explotación, que puedan separarse de la mina sin perjuicio para ella, la cual volverá al dominio de la provincia de Catamarca en las condiciones que señala el artículo 22 de esta ley.

El producido neto de las operaciones de transferencia o enajenación de bienes de la empresa, que realice el Poder Ejecutivo nacional en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, será ingresado al Tesoro nacional.

El Estado nacional responderá por el pago del pasivo no cubierto que resulte.

Art. 21. — Los bienes y las actividades de YMAD quedan exentos de toda clase de gravámenes, impuesto y tasas de carácter nacional, provincial y municipal, con excepción del canon y de las contribuciones que determina el Código de Minería.

Art. 22. — En cualquier caso de caducidad de la concesión los yacimientos quedarán reservados para el Estado, por el término de un año.

Art. 23. — En tanto no se verifique la definitiva concesión de los yacimientos a favor de YMAD, el plazo de la reserva a que se refiere el decreto ley 17.346/57, deberá considerarse prorrogado.

Art. 24. — Derógase el decreto ley 270/58.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Emilio Donato del Carril. — Alberto V. Tedín. — Ricardo Lumí.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — Señor presidente: en la sesión del 30 de septiembre informé a esta Cámara del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que cuenta con sanción del honorable cuerpo, por el cual se crea el ente autárquico denominado Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, el que tendrá a su cargo el estudio, cateo, exploración, explotación, industrialización y comercialización de todos los minerales de cualquier categoría existentes en la provincia de Catamarca, en la zona denominada Agua de Dionisio.

En aquella oportunidad, al referirme a este proyecto, que cuenta con despacho favorable de las comisiones de Industria, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, hice referencia a consideraciones de orden técnico, económico y jurídico que ponen de manifiesto la conveniencia de que este proyecto sea aprobado en la forma en que lo envió el Honorable Senado.

Para no incurrir en repetición de conceptos, voy a hacer una síntesis de los fundamentos dados en aquel entonces; pero antes debo decir que esta iniciativa del Poder Ejecutivo es importante, por cuanto el gobierno orienta sus pasos hacia el campo minero, y adquiere aún mayor valor porque, como pocas veces lo hizo, está reconociendo por primera vez a una provincia, la de Catamarca, verdadera personería frente a su propia riqueza natural.

Sabemos bien que las minas son bienes privados de la Nación o de las provincias, según el territorio donde ellas se encuentren, porque así expresamente lo dice el Código de Minería; pero ello, trasladado a la realidad, es muy distinto. La imposibilidad económica de los Estados provinciales para encarar trabajos serios en esta materia, unida a la prohibición inexplicable contenida en el código, por la cual el Estado no puede explotar y disponer de las minas, hace que yacimientos de importancia, no obstante encontrarse en jurisdicción provincial, sean usufructuados por particulares o por compañías extranjeras.

Como regla general, podemos decir que las provincias se han limitado, pura y exclusivamente, a cobrar su canon, no para solucionar una situación económica, sino como expresión del derecho originario que tienen sobre sus yacimientos. Pero quiero advertir que en este caso particular de la iniciativa que tratamos, la Nación sigue una política distinta, dado que frente a un hecho real como es la existencia de un yacimiento de oro, plata y manganeso de importancia, el Estado nacional concurre para habilitar económicamente a la provincia, dueña originaria de la riqueza, sin exigir para sí absolutamente nada. Procede de esa manera porque sabe que en la medida en que los Estados provinciales se realicen en una base económica sólida, la Nación sabrá afirmarse y perfeccionarse cada vez más en sus instituciones para vivir en un auténtico régimen federal y democrático.

Estos importantes yacimientos de oro, plata y manganeso denominados Farallón Negro fueron conocidos hace mucho tiempo. Los filones que existen son muchos y variados, y en ellos se han encontrados trabajos de distintas épocas, laboreos de forma e inclinación diversas, que hacen suponer que algunos fueron hechos hace más de un siglo. Estos trabajos nunca dieron resultado en el sentido minero, porque los

métodos entonces conocidos no permitían extraer económicamente el oro y la plata, y porque, además, en esa época el manganeso sólo se usaba en pequeñas cantidades. Pero un nuevo método de extracción de estos metales hizo su aparición en la industria metalúrgica y permitió la separación económica de ellos. Por el sistema de cianuración, tratando al mineral —previamente reducido a polvo finísimo— con cianuros metálicos —especialmente el cianuro de sodio, por su bajo precio— se solubiliza el oro y la plata, formando cianuros dobles, los que, tratados luego con polvo de cinc, se precipita en forma de polvo negro finísimo y se obtiene la separación de estos metales tan importantes.

La importancia adquirida en la actualidad por el manganeso, y en el caso particular, la necesidad de él en la planta siderúrgica de San Nicolás, han llevado a los hombres de gobierno a prestar preferente atención a esta riqueza que duerme en las entrañas de los cerros catamarqueños.

En 1938, el geólogo Abel Peyrano, de la Universidad de Tucumán, practicó un reconocimiento geológico y mineralógico de la zona, dando a conocer las conclusiones de ese trabajo preliminar en un artículo publicado en los «Cuadernos de Mineralogía y Geología» de la Universidad y que fueron continuados en 1944 con el estudio de la zona de Farallón Negro, lo que permitió establecer la verdadera importancia de los yacimientos. También hicieron estudios, técnicos de la Dirección General de Industria y Minería, de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares y el doctor Ramón Bonaterra, de Catamarca, y todos concordaron en el valor de las minas, por su alta ley de recuperación.

En 1950 la Universidad de Tucumán, a título de investigación, construyó un pequeño campamento central en Agua Tapada y otro en Farallón Negro, e instaló la planta experimental de concentración y un laboratorio químico. Se ejecutó la construcción de dos piques, uno de 24 metros y otro de 150 metros.

En 1951 el Poder Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta la importancia de esta riqueza minera, dictó un decreto por el que se declaró zona de reserva fiscal; a este decreto siguieron otros, siendo el último el 17.356, del año 1957, por el cual se prorrogó la reserva hasta el 31 de diciembre de este año.

En 1956 la Universidad de Tucumán, basándose en los trabajos realizados, solicitó al Poder Ejecutivo nacional la creación de un ente autárquico dependiente de esa casa de estudios para explotar los yacimientos de Aguas de Dionisio. Se dictó el decreto 270...

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Me permite el señor diputado?

La Presidencia desea saber si el señor diputado habla en nombre de alguna de las comisiones.

Sr. Peralta. — Hablo en nombre del bloque, señor presidente.

Sr. Presidente (Monjardín). — La Presidencia le concedió la palabra creyendo que el señor diputado era miembro informante de la comisión, pero advierte que su nombre no figura entre los firmantes del despacho.

Sr. Pozzio. — Creo que el señor diputado en la sesión del 30 de septiembre informó en nombre de la comisión y hoy está reiterando sus argumentos: hablará en nombre de la Comisión de Industria; no lo hará en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque no forma parte de ella.

Sr. Presidente (Monjardín). — A la Presidencia no se le ha hecho saber quién es el miembro de la comisión informante del despacho.

Sr. Santoni. — El diputado que habla, miembro integrante de la Comisión de Industria, ha firmado también ese despacho. Pero entiendo que el diputado que estaba en el uso de la palabra es representante de la provincia de Catamarca y está hablando en nombre del bloque de la mayoría, no hice ningún hincapié al respecto.

Sr. Presidente (Monjardín). — La Presidencia desea no interrumpir la exposición del señor diputado por Catamarca; pero, en resguardo del orden de la sesión, recuerda que reglamentariamente corresponde que previamente hable el miembro informante de la comisión.

Producido el error involuntario por parte de todos, queda hecha la aclaración para lo sucesivo.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — Decía, señor presidente, que, por pedido de la Universidad Nacional de Tucumán, el gobierno provisional dictó en enero de este año el decreto 270, por el cual facultó a la universidad para realizar cateos, exploración y explotación de las minas, y también creaba un ente autárquico dependiente de esa casa de estudios para que realizase los trabajos, y a la provincia de Catamarca la facultaba expresamente para otorgar la concesión de tales minas con prescindencia del número de pertenencias establecidas en el Código de Minería vigente.

Me voy a referir someramente a este decreto que la provincia de Catamarca no aceptó por considerar que el mismo lesionaba derechos fundamentales encuadrados dentro de las facultades no delegadas por el Estado provincial, de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución Nacional. Me voy a referir a este hecho que motivó que en el lapso de diez días, en el mes de marzo del corriente año, se sucediesen tres interventores federales en Catamarca y finalmente el jefe de la guarnición militar debió hacerse cargo del gobierno, pues el pueblo salió a la calle a defender derechos que creía con justa razón que hacían a la esencia del patrimonio de un Estado autónomo.

Por el decreto 270 del 10 de enero de este año se creaba el ente denominado Yacimientos Mineros de la Universidad de Tucumán, que dependía de esa casa de estudios, dirigido y administrado por un directorio compuesto de un presidente y cuatro vocales que serían designados por el rector de la universidad con acuerdo del consejo superior.

A ese directorio se le confería una serie de atribuciones que no es del caso analizar aquí. Baste decir que Catamarca nunca desconfió ni hizo problema con la institución Universidad. Muy por el contrario, reconoce lo que hizo para poner de manifiesto esa riqueza y preservarla de algunas compañías extranjeras. Lo que Catamarca quería, y esto debe quedar perfectamente en claro, era participar activamente en el directorio, a fin de dirigir, controlar y, ¿por qué no decirlo?, impulsar los trabajos para que esa riqueza minera de la cual es dueña originaria y absoluta pudiera ser la base de la gran transformación económica social de la provincia y no quedase por ahí diluida por falta de aliento en la empresa, sembrando luego la desilusión en todo el pueblo, que puso su esperanza en esa obra por creer que así podrá construir su economía propia, que le permitiría consolidar su autonomía tantas veces mancillada por el gobierno nacional a través de las intervenciones federales.

La universidad quería asumir toda la responsabilidad en la realización de los trabajos. Catamarca, por el contrario, quería participar de esa responsabilidad. Y ahí se planteó la divergencia. Las dos partes concordaban en que estos yacimientos fueran sometidos a un régimen especial distinto al del Código de Minería.

Planteado así el problema, el decreto 270 del 10 de enero de 1958 no hizo más que satisfacer el criterio sustentado por la universidad. Entonces, las autoridades de Catamarca, en uso de derechos propios, se negaron a otorgar la concesión de la mina. La Nación no podía empujarlas ni menos obligarlas a ello, porque no contaba con resortes legales para hacerlo.

La concesión es, pues, un acto mediante el cual el Estado, dueño originario de la mina —en este caso el de Catamarca—, crea a favor del descubridor un derecho, subordinado al cumplimiento de requisitos y obligaciones fijados en la ley.

Las autoridades de Catamarca creían que no se daban las garantías suficientes para la explotación adecuada. Así lo manifestaron públicamente; pero la Nación, que tantas veces mancilló las autonomías provinciales, buscó la solución más fácil al problema, cambiando el interventor federal y ordenándole al nuevo ser más dócil y otorgar la concesión de los yacimientos.

Fue entonces cuando el pueblo apeló a la fuerza como último recurso, frente al atropello

de la Nación, e hizo el gran planteo de que el problema fuera resuelto por las autoridades constitucionales, es decir, por este Congreso de la Nación.

Yo quiero que se comprenda bien cuál ha sido el sentido que tuvieron los actos del 24 de marzo del corriente año, cuando la Confederación General del Trabajo, la Federación Económica y los estudiantes, acompañados por todo el pueblo, declararon la huelga general, que culminó con la renuncia del interventor federal enviado por el gobierno provisional para que otorgase la concesión de la mina a la universidad. Ese movimiento de fuerza, lejos de merecer la crítica, pone de manifiesto el celo con que se defienden derechos que hacen a la esencia de la autonomía provincial. Sin embargo, la prensa oficialista de ese momento infirió un agravio gratuito al pueblo de Catamarca, al decir que había salido a la calle en motín contra las autoridades, no para defender su riqueza sino para entregarla a las compañías extranjeras.

Catamarca, que tanto dio al país en todos los órdenes; que regó con la sangre de sus hijos el suelo patrio en las jornadas heroicas de la independencia; y que, no obstante, vive todavía postergada en sus realizaciones, no puede dejar pasar por alto —y ésa es la misión que me incumbe como representante de la provincia— una imputación de la naturaleza que señalo, cuando había razones poderosas que justificaban su actitud.

El derecho que Catamarca tiene sobre la mina es incuestionable. El artículo 79 del Código de Minería dice: «Las minas son bienes privados de la Nación o de las provincias, según el territorio en que se encuentren.» Las minas de Agua de Dionisio son bienes privados de la provincia de Catamarca, desde que se encuentran en su territorio. Habiendo realizado la universidad trabajos de investigación, y dado el interés puesto por las autoridades en participar en todas las tareas, se convino —sin que ello modifique en absoluto el derecho de mi provincia—, como un acto de justicia, compartir las ganancias líquidas. Participaban así la Universidad de Tucumán y las demás universidades del Estado.

Se firmó de esa manera, para poner punto final a las discrepancias, el acta de Farallón Negro, que fue ratificada por ley de la provincia 1.695 y por el consejo superior de la Universidad de Tucumán.

En dicha acta se estableció la creación de un organismo formado por cinco miembros: dos por Catamarca, dos por la Universidad de Tucumán, y la presidencia ejercida por la Nación. También se dispuso que las utilidades netas y líquidas que arrojen los balances se distribuirán a razón del 60 por ciento para Catamarca y el 40 por ciento para la Universidad de Tucumán; se ayudará, con un 10 por ciento

de lo que reciba Catamarca a la construcción de la Ciudad Universitaria de Tucumán y por el porcentaje que le corresponde a la universidad, o sea el 40 por ciento, la mitad pasará al fondo nacional que se distribuirá entre todas las universidades del Estado.

Además se estipuló por el acta del Farallón Negro, que la sede del organismo fuera Catamarca.

En cuanto a las apreciaciones jurídicas de esta institución que se crea, ya hice referencia a las mismas en la exposición anterior, del 30 de septiembre próximo pasado. También he dicho que el solo hecho de saber que las universidades del Estado, la provincia de Catamarca y la Nación en última instancia, son las destinatarias de esta riqueza, así como también las responsables del buen éxito de la empresa y que con esta ley todas las puertas quedan cerradas a una posible entrega a intereses extraños a la esencia de la nacionalidad argentina, pone de manifiesto que con el paso que estamos dando defendemos los intereses nacionales y colocamos la riqueza de nuestro suelo al servicio de la colectividad.

Lo que nos interesa en este caso es determinar si económicamente esta empresa conviene al Estado provincial y a la Nación, si no se lesionan derechos fundamentales y, en definitiva, quiénes son los beneficiarios.

Hay antecedentes que justifican desde el punto de vista económico la realización de este trabajo, y por ende la sanción de esta ley que tratamos.

El ingeniero Alberto Monchamblón, ingeniero civil recibido en la Universidad del Litoral e ingeniero de minas recibido en Chile, fue designado por el Poder Ejecutivo para que hiciera estudios técnicos en las minas de Farallón Negro. El informe que preparó dice lo siguiente: «Lo más importante de todo y que justifica la creación del ente que propicia esta ley, es el manganeso y el oro.»

La producción de manganeso, proveniente de Farallón Negro, según se calcula para la posible extracción que se haga, será íntegramente absorbida por la planta siderúrgica de San Nicolás, y esto asegura el mercado. En efecto, San Nicolás, en su primera etapa, empleará alrededor de 12.000 toneladas finas anuales, de las cuales Farallón Negro le proveerá del 65 al 70 por ciento, es decir, alrededor de las 7.500 toneladas finas de manganeso, aproximadamente. Esto significa también que no habrá problema de competencia, pues queda margen suficiente para la producción de otras minas.

Respecto al precio del manganeso, conforme a cálculos de costo de explotación, separación y manipuleo del mineral, flete, etcétera, el producto podrá entregarse en San Nicolás a un valor similar al cotizado sobre vapor en el

mismo punto, con la consiguiente economía de divisas.

También se han hecho estudios relativos al valor de los minerales a extraer. Según dichos estudios se llega a un producto auromanganesífero con las siguientes leyes: 10 gramos de oro por tonelada y un 11 por ciento de manganeso, o sea 110 kilogramos; calculando a precios normales de cincuenta pesos el gramo oro y de 5,30 pesos el kilogramo de manganeso, se llega a una recuperación de 1.083 pesos por tonelada extraída. Si reconocemos una capacidad de producción de 75.000 toneladas brutas, llegamos a un valor de producción anual del orden de los 81.225.000 pesos. Ahora bien, frente a ese valor pesos en producción —dice el ingeniero Monchamblón— tendremos que calcular las inversiones que habrán de hacerse para lograrla, y estimamos en 700.000 dólares los compresores, motocompresores, guinches, equipo básico de concentración, martillos neumáticos, etcétera, es decir, bienes que no pueden adquirirse en el país. Además, instalaciones, elementos para fuerza motriz, talleres, caminos, campamento, vehículos, instalaciones de agua y bombeo, capital evolutivo para tres meses, etcétera, en 75 millones de pesos. Vemos, así, que económicamente hay un rendimiento, teórico, es verdad, pero previsiblemente tan ajustado a la realidad que no deja lugar a dudas respecto de los resultados de la explotación. Queda con esto demostrado que, desde el punto de vista económico, se justifica la inversión que se hará.

También el doctor Ramón Bonaterra, quien representando al gobierno de la provincia de Catamarca hizo estudios en la mina, se refiere a los porcentajes de enriquecimiento que exhiben los yacimientos de Farallón Negro respecto de cada uno de los minerales, oro, plata y manganeso.

Las leyes medias establecidas mediante los estudios cumplidos en cuanto al oro, es de 11 gramos por tonelada, cifra que asciende hasta 18 gramos si se profundiza en la veta, pero que excepcionalmente puede arrojar un rendimiento de 200 gramos en el caso de las «bonanzas», o partes de la veta donde la concentración de dicho mineral se acentúa. En cuanto a la plata, la ley media es de 200 gramos por tonelada, y para el manganeso es del 24 por ciento, esto es, de 240 kilogramos por tonelada de mineral.

Sobre la base de ello, el doctor Bonaterra deduce un cálculo acerca del posible rendimiento del yacimiento. Si se toma como base una planta con capacidad de 500 toneladas diarias de laboreo de mineral, proyectada por la Universidad de Tucumán en su presentación de antecedentes al gobierno de nuestra provincia, Farallón Negro admite un rendimiento anual de

158 millones de pesos, que se discriminan en la siguiente forma: 60 millones para el oro, 23 millones para la plata y 75 millones para el manganeso. Si se estima que los gastos de explotación, incluyendo amortización del capital, ascenderían a 58 millones de pesos, quedaría una utilidad de 100 millones.

Estas apreciaciones de orden económico demuestran claramente la conveniencia de llevar a cabo esta empresa que beneficiará, en primer término, a la provincia de Catamarca, a la Universidad de Tucumán y a todas las universidades del Estado, e indirectamente a la Nación, porque serán partícipes de las ganancias como lo establece el artículo 18 del proyecto.

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha estudiado el proyecto y por mayoría aconseja su sanción. No podía ser de otra manera, por cuanto ningún derecho o facultad inherente a la provincia o a la Nación es afectado. Se establece, sí, un régimen de excepción al Código de Minería, especialmente en cuanto al número de pertenencias que pueden darse en concesión, que excede a lo estipulado en el artículo 27 del Código de Minas.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Enrique Mario Zanni.

Sr. Peralta. — En lo que respecta a Catamarca, dueña originaria de los minerales existentes dentro de la jurisdicción provincial según el artículo 7 del Código de Minería, en nada se afecta su derecho por cuanto entrega la mina a un ente del cual ella forma parte, y en caso de caducidad de la concesión, la provincia la recupera nuevamente.

Además, cualquier estudio jurídico que se haga debe tener muy en cuenta que, previamente a esta ley, la provincia firmó el acta de Farallón Negro, que fue ratificada por la ley provincial número 1.695 del año 1958, donde se establecieron las bases mínimas a las cuales debía ajustarse el ente a crearse por ley nacional, para explotar los yacimientos, y bajo esa condición, Catamarca otorgaría la concesión.

Para no distraer por más tiempo la atención de los señores diputados no me voy a referir en particular a cada uno de los artículos de la ley, porque en la sesión del 30 de septiembre ya hice una apreciación del punto de vista jurídico, y a ella me remito.

Eso sí, señor presidente, como representante de la provincia de Catamarca debo manifestar que el paso que da el gobierno de la Nación, al crear este ente minero, deja un magnífico precedente. Casi siempre la Nación, cuando tuvo conocimiento de que en el subsuelo de alguna provincia existía una riqueza de extraordinario valor, no pensó en reconocerle capacidad o personería, como dije, a la provincia para explotar tal riqueza y contribuir de ese

modo a su independencia económica que le permitiera ser realmente un Estado autónomo.

Hay muchas provincias que no pueden independizarse, diríamos, en el orden económico porque no tienen condiciones para dedicarse a las actividades agropecuarias, y viven esperanzadas en las riquezas encerradas en su seno.

Creo que de hoy en adelante, con este precedente que no podemos dejar pasar por alto, todas las provincias podrán merecer un trato igualitario. Creo sinceramente que nuestro país se fortalecerá y las instituciones se perfeccionarán en la medida en que las provincias sean realmente poderosas en lo económico y verdaderamente autónomas.

Por ello, solicito de los señores diputados que aprobemos este magnífico proyecto de ley que será quizás la salvación para la provincia de Catamarca y un gran ejemplo para todo el país, porque esa provincia que vive injustamente postergada, al explotar por primera vez una riqueza extraordinaria, lo primero que hace es compartir con todas las universidades estatales, en las cuales quizás la mayoría de los que estamos aquí sentados hemos concurrido a capacitarnos para ser auténticos representantes del pueblo argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Zanni).— Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Santoni.— Como miembro integrante de la Comisión de Industria de esta Honorable Cámara, que firma el despacho de la mayoría en este proyecto de ley, he de referirme al mismo.

El yacimiento de oro, plata y manganeso denominado Farallón Negro o Agua de Dionisio, que se encuentra ubicado, como es de general conocimiento, en el distrito de Hualfín, departamento de Belén, provincia de Catamarca, es conocido desde la época de la colonia.

Figura en el registro oficial de minas abandonadas, folio 18 y subsiguientes, correspondiente al año 1889, y es mencionado en la publicación efectuada por la Sociedad Argentina de Minería y Geología de esta Capital ya en 1929, según el trabajo presentado por el doctor Luciano R. Catalano.

En el año 1936, aproximadamente, el doctor Abel Peirano, del Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional de Tucumán, reanudó trabajos en la zona revelando con los mismos la potencial importancia del yacimiento.

Los trabajos financiados por el presupuesto universitario continuaron hasta el año 1951. Entre otras labores se realizaron trabajos preliminares y la instalación de una planta piloto de concentración de minerales, además de un campamento para el personal, etcétera.

El promotor de estos trabajos y sus compañeros donaron a la universidad los derechos obtenidos sobre la mina. En 1938, el doctor

Abel Peirano publicó los primeros cuadernos de mineralogía y geología de la Universidad Nacional de Tucumán, que hacen referencia a estos yacimientos. En 1941 inscribió en el registro de minas de Catamarca, los primeros pedidos de exploración y cateo en la zona Agua de Dionisio. En 1945, como consecuencia de ulteriores trabajos, publicó dos nuevos cuadernos relativos a este mismo asunto. En 1948 y 1949 efectuó planos de mensura y amojonamiento de unos 360 kilómetros cuadrados y el levantamiento topográfico geológico de la región.

A fines de 1950 se hizo cargo de los trabajos de exploración la Dirección Nacional de Minería, de conformidad al decreto 1934, del año 1951. Para ello convino con la Universidad Nacional de Tucumán la cesión en préstamo de los equipos y maquinarias de propiedad de ésta, que se encontraban en los yacimientos, con fecha 19 de diciembre de 1951.

Como ya ha hecho referencia el señor diputado representante de Catamarca, con fecha 13 de marzo de 1957 el señor interventor federal de Catamarca y el señor rector de la Universidad Nacional de Tucumán, convinieron ante los ministros del Interior y de Educación y Justicia las bases de un convenio entre la provincia y la universidad para la explotación de la mina.

No quiero abundar más al respecto, para no repetir algunos datos ya suministrados por el diputado que me precedió en el uso de la palabra.

Posteriormente, en forma sorpresiva se suscitó un conflicto entre el anterior interventor en la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, hecho al que también se ha referido el señor diputado que me antecedió.

En consecuencia, me voy a referir a la preocupación que ha tenido la Comisión de Industria en el estudio y conocimiento de los hechos relativos a ese importante yacimiento.

En el curso del actual período legislativo fue radicado en la Comisión de Industria el proyecto del señor diputado Verdaguer por el cual se designaba una comisión especial a fin de que se trasladara a las provincias de Catamarca y Tucumán para establecer una serie de hechos relacionados con el yacimiento minero que nos ocupa. Los miembros de la comisión nos hicimos eco de esa preocupación que en todo momento hemos considerado bien intencionada porque atañe a los legítimos intereses de la Nación. Inmediatamente se recabaron todos los datos e informaciones necesarios y se adoptaron las medidas conducentes al mejor conocimiento de los hechos relacionados con ese importante yacimiento. Cuando ya existía en poder de la comisión abundante material de juicio, se produjo el hecho muy auspicioso de que el Poder Ejecutivo de la Nación interviniera logrando

una magnífica solución que contempla, por una parte, los legítimos intereses de la provincia de Catamarca, en cuya jurisdicción está ubicado el yacimiento y, por otra, los de la Universidad Nacional de Tucumán, su descubridora.

La oportuna y valiosa intervención del primer magistrado de la Nación, doctor Frondizi, y del señor vicepresidente de la Nación, doctor Gómez, permitió, como es de conocimiento público, la inmediata adopción de normas que iban a colocar en vías de ejecución el urgente programa requerido para ir de lleno a la explotación del yacimiento.

Efectivamente, en la declaración suscrita el 7 de junio último por el señor vicepresidente de la Nación, por el señor gobernador de la provincia de Catamarca y por el señor rector de la Universidad Nacional de Tucumán, legisladores y funcionarios nacionales y provinciales, se acordó modificar el decreto ley 270/58.

Posteriormente, por ley 1.695 de la Honorable Legislatura de la provincia de Catamarca es aprobado el convenio. De acuerdo con aquel convenio a que hemos hecho referencia y al decidido apoyo comprometido por el Poder Ejecutivo de la Nación, es de esperar que dicha explotación redunde en beneficio de todo el país.

Los capitales comprometidos por el gobierno nacional habrán de permitir la adquisición de modernas maquinarias y elementos eficaces para el aprovechamiento integral de esta riqueza potencial.

El acta suscrita en aquella oportunidad por los representantes de la provincia de Catamarca y de la Universidad Nacional de Tucumán, con intervención del Poder Ejecutivo, documenta que se han consolidado definitivamente los respetables intereses de las partes. Ahora podemos considerar expedito el camino de la explotación dentro de la armonía necesaria y contando con todos los recursos que la misma exige.

El acta del Farallón Negro constituye la solución ideal del diferendo de pública notoriedad que se planteó con motivo del anterior convenio suscrito entre la provincia y la universidad, con fecha 13 de marzo del año pasado.

Considero que el nuevo instrumento que rige las relaciones para la nueva explotación debe ser ampliamente difundido, y en tal virtud solicito que se inserte en el Diario de Sesiones.

Frente a los resultados a que se llegó y que acabo de recordar sucintamente, pareció que el proyecto del señor diputado Verdaguer perdía actualidad al quedar superado, y ello es exacto en cuanto al futuro de Farallón Negro, desde que están tomados todos los recaudos ya mencionados. Pero la Comisión de Industria, muy atenta a los términos de ese proyecto y a las reiteradas mociones de su autor, entendió que algunos puntos del mismo podrán dejar algu-

nas dudas sobre su pasado inmediato, y justamente el propósito de confirmarlo o de disipar esos interrogantes que involucran sus denuncias, es el que nos movió en aquella oportunidad a proyectar un despacho, por el que la Cámara se dirige al Poder Ejecutivo solicitándole informes acerca de esos tres puntos.

Nosotros deseábamos que el instituto autárquico que va a tener a su cargo la dirección del yacimiento inicie su cometido con un ciclo despejado de incógnitas. De ahí surgió el despacho que la Honorable Cámara aún no consideró, seguramente debido a la intensa labor desarrollada. Uno de los puntos de ese despacho que he citado, se refiere a la posibilidad de que una empresa extranjera pudiera haber realizado gestiones que afectan los intereses de la Nación, e inclusive su soberanía.

El Poder Ejecutivo ha decidido que se trate en este período de sesiones extraordinarias, como primer asunto, este proyecto que llega a esta Cámara en revisión, por el que se crea el ente autárquico Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que asegura que manos argentinas serán las encargadas de promover esa inmensa riqueza potencial en beneficio del desarrollo económico nacional.

Ya se ha explicado el alcance y las atribuciones de ese organismo autárquico, pero quiero señalar que él será administrado por un directorio en el que estarán representadas la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, siendo presidido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo de la Nación.

El proyecto de ley —y esto es interesante destacarlo— ha sido redactado íntegramente, salvo pequeñas modificaciones insubstanciales, por los representantes de las partes interesadas. En él se ha previsto que los beneficios van a distribuirse entre la provincia de Catamarca y las demás universidades del país previamente, con la finalidad de concretar la hermosa iniciativa de ver realizada la ciudad universitaria de Tucumán.

Por estas consideraciones se estima que este proyecto contempla todos los aspectos del problema, al que se le da adecuada solución, a propuesta de las mismas partes interesadas.

A mi juicio, el proyecto es inobjetable. Es necesario señalar que en las reuniones de la Comisión de Industria no se ha hecho reparo alguno a su respecto.

Por ello, y por la impostergable necesidad de contar con la ley promulgada y publicada antes del 31 de diciembre próximo, fecha en que se extingue el plazo acordado por el decreto ley 17.356, de 1957, que fuera ampliado por el decreto provincial 2.671, de 1958, para la reserva minera —después de la cual cualquier particular podrá solicitar concesiones—, es que espero que la Cámara ha de sancionar el proyecto en discusión.

No quiero dejar pasar este momento en que se habla de Farallón Negro, sin asociar su nombre al del doctor Abel Peirano, para rendirle el homenaje a que es acreedor. Como director del Instituto de Geología y Minas de la Universidad de Tucumán, hizo en 1936 la trascendental revelación de las inconmensurables posibilidades del yacimiento y dispuso la realización de los trabajos de cateo. Como corolario cedió generosamente sus derechos a terceros, a efecto de que fueran adjudicados en definitiva a la Universidad de Tucumán.

Las calidades profesionales del doctor Peirano, junto a su patriótico desinterés, han determinado a quienes redactaron el acta del Farallón Negro, a pedir que se designe con su nombre el lugar donde se encuentra la mina, para que se perpetúe el agradecido homenaje de la República.

A él le ha tocado recorrer el velo que mantuvo oculto y en reserva a través de los siglos, para esta época crítica que vivimos, un valioso presente de la tierra madre, con el que podremos incrementar el patrimonio nacional.

Y es ahora a nosotros que nos toca el honor de actuar a la altura de ese gesto, ratificando el instrumento legal que hará viable ese patriótico legado, para beneficio del país, de sus universidades, y para honor de todos aquellos que en forma directa o indirecta han intervenido o intervienen en esta gran obra de interés nacional. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fuertes. — Señor presidente: la entrada de rondón al comenzar esta sesión, por parte del señor diputado por Catamarca, que informó transgrediendo un tanto el reglamento de la Cámara, me resulta en realidad favorable porque me ha ahorrado el trabajo de hacer un examen exhaustivo acerca del aspecto correspondiente a la Comisión de Industria.

Ha hecho una referencia amplia, muy precisa; casi podría decirse que, sobre los aspectos relacionados propiamente con la minería, ha agotado el tema.

Las razones expuestas por el miembro de la Comisión de Industria, diputado Storani, han complementado ese informe. Muy poco me queda pues para agregar: ubicar el asunto con respecto al proceso elaborativo dentro del Congreso.

El 19 de septiembre tuvo entrada en la Cámara de Senadores el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Esa Cámara lo trató en la sesión del día 24. Lo pasó en revisión a la Cámara de Diputados en la sesión del día 30, sesión que casi no es necesario recordar por lo reciente, en la que estuvimos abocados al conocimiento y consideración de infinidad de proyectos. El señor diputado por Catamarca, un

tanto impaciente y preocupado por la suerte del mismo, porque temía que de no ser considerado en las sesiones ordinarias del corriente año podría dar lugar a la caducidad de los permisos, concesiones y reservas que vencen el 31 de diciembre próximo, nos quiso poner un poco entre la espada y la pared para que lo resolviéramos a tambor batiente.

Nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que un proyecto de esta magnitud, que es fundamental para la economía nacional, no ya solamente para la economía de Catamarca y para el sostenimiento de la Universidad de Tucumán, debía ser estudiado con cierto detenimiento. Esa fue la razón y no otra por la cual solicitamos que se suspendiera su tratamiento en aquella sesión, ya que el fárrago de los asuntos hubiera impedido dedicarle reflexión y meditación suficientes.

Ahora está aquí, y diría que hay una línea de coincidencia en lo fundamental y general entre la mayoría y la minoría, y que las discrepancias por parte de algunos de los integrantes de nuestro sector tienden al mejoramiento de la técnica legislativa. De estos aspectos se han de ocupar el señor diputado Tessio, que ha firmado una disidencia parcial, el señor diputado Verdaguer, que tiene también que decir su palabra sobre el particular, y el señor diputado Pozzio, que tiene que formular algunas observaciones.

Yo me concretaré a decir que este proyecto tiene, en cuanto a la idea central, una conformidad total de la comisión.

En lo que hace propiamente a los aspectos de orden económico-financiero, entendemos que esta mina debe tener un resguardo legal adecuado, como es precisamente el ente especial que se propicia. Este instituto, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, tiene en muchos aspectos igual estructuración que la que pretendió darle el gobierno provisional, pero en aquella ocasión, la Universidad Nacional de Tucumán tenía mayores facultades que las que hoy se le acuerdan por este proyecto, tal vez a los fines de preservar la autonomía provincial y asegurar para la provincia una fuente de riqueza extraordinaria como la que puede significar el desarrollo y la explotación intensiva del yacimiento, dando así ocasión a que esa provincia de Catamarca pueda nivelar su situación económica, que en muchas oportunidades ha sido difícil cuando no angustiosa.

El yacimiento no ha sido descubierto en 1933. Viene desde muchísimos años atrás. Pero en la antigüedad la explotación que se quiso hacer resultó antieconómica por el escaso rendimiento, pues se había tomado en la exploración y en el cateo pura y exclusivamente la superficie del yacimiento y en profundidad menos de treinta metros. Por razón de las estructuras geológicas terciarias a que responde esta formación, indu-

dablemente no arrojaba los beneficios que eran de esperar.

Fue así como con los años, sobre todo a partir de 1936 y gracias a la presencia del director de la Escuela de Minas de la Universidad de Tucumán, el geólogo doctor Abel Peirano, esta mina comenzó a tener relevancia. El modificó el sistema en que se basaba la anterior explotación, que consistía en tratamientos por corrientes de agua que no daban resultados debido a la extrema finura de las partículas de oro y plata, y fue a un sistema moderno y a una técnica superior, enunciados ya por el señor diputado por Catamarca.

Estos trabajos dieron sus frutos, y así es como se ha podido, mediante perforaciones de pozos, mediante lo que técnicamente se denominan los piques, efectuados en profundidades de sesenta, cien, ciento cincuenta, ciento setenta e incluso doscientos metros, establecer que las vetas de los yacimientos de Farallón Negro representan extraordinaria riqueza. De esa manera se ha podido ubicar y determinar la ley en un pique donde existen 311 millones de toneladas, aproximadamente, por valor de 232 millones de pesos, y otro pique realmente fabuloso por unos 12.000 millones de pesos, referidos en conjunto a oro, manganeso y plata.

Toda esa riqueza representa sumas, casi diríamos siderales, que han de significar un aporte extraordinario a la economía del país para acelerar el desarrollo nacional. Incluso, con la transformación, venta y exportación de esos minerales se podrán obtener gran cantidad de divisas que, como manifesté anteriormente, significarían una notable contribución a nuestras maltrechas finanzas nacionales.

Los trabajos efectuados motivaron importantes inversiones por parte de la Universidad de Tucumán. Se ha instalado una planta piloto que hace la cianuración completa en un proceso moderno, además de tres montacargas, cinco grupos electrógenos, un taller para automotores, medios de transporte, rieles, vagones, camiones, camionetas, aserraderos, talleres de carpintería y herrería, y, lo que es más importante desde el punto de vista de la salud de los obreros, una enfermería.

Así las cosas, estamos ya en el planteo de orden legal y próximo a vencer —falta poco más de dos meses— el plazo que se acuerda al descubridor. Los derechos que correspondían al doctor Peirano han sido transferidos por este extraordinario hombre a favor de la universidad, en un gesto que demuestra toda su generosidad. A fin de asegurar que la transferencia a la universidad fuera aceptada definitivamente, hizo un traspaso provisional a nombre de un estudiante y tres funcionarios de dicha universidad, los cuales con posterioridad cumplieron lo que podría denominarse un mandato de la generosidad del descubridor.

Yo no quiero entrar en mayores detalles. He dicho que nuestras discrepancias son esencialmente formales y que en lo que atañe a las referencias generales del tema, éstas han sido informadas exhaustivamente por el señor diputado por Catamarca.

Dejo así fundamentada la posición favorable al lineamiento general de este despacho por parte de los integrantes de la minoría de la Comisión de Industrias. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Tessio. — En la última sesión del período ordinario y en oportunidad de tratarse, este asunto fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con plazo perentorio para expedirse.

En esa ocasión, frente a un proyecto, frente a una tremenda inquietud por los hechos sucedidos en Catamarca —y además porque se trata de un problema al que no es extraño algún interés de una compañía extranjera—, frente también a algunas disposiciones modificadas del decreto 270/58, me vi obligado a firmar en disidencia el despacho de la comisión.

Este asunto viene de muy lejos, y casi podría decirse que estas minas fabulosas del Norte y de todo el ámbito cordillerano argentino movieron en el tiempo de la conquista a estructurar algo así como una leyenda. «Trapalanda» se llamaba una ciudad que según los legendarios conquistadores existía cerca de los Andes; los techos de sus casas eran de oro y sus muros de plata. Esa era la leyenda, surgida de esta extraordinaria riqueza nuestra. En pos de ella mucha gente que se aventuraba por los caminos inciertos del país, fue dejando sus ilusiones, cuando no sus vidas. Es el hecho fabuloso de algo que en este momento va tomando realmente autenticidad.

Este proceso de las minas de Aguas de Dionisio y de Farallón Negro no es aparentemente tan simple. La Universidad Nacional de Tucumán, a través de un hombre ya mencionado por todos los señores diputados, obtuvo su inscripción en el registro de minas para la explotación de estos yacimientos. Esta mina, que parecía no iba a aportar para el país alguna solución, merced a un cambio de teoría, ya discutida entre muchos geólogos por un visionario, pudo posibilitar la auténtica riqueza de esa provincia.

¿Qué ocurrió? El mineral, que se escamotea a la vista de los hombres, aparecía muy brevemente en la superficie de la mina, y todos los geólogos entendían que éste era en realidad un proceso de erosión de la tierra, que esa tierra había sido lavada por corrientes de agua y sólo quedaba el vestigio de una riqueza fabulosa. Pero el hombre que fue mencionado aquí,

doctor Abel Peirano, pensó, estudiando la capa terciaria de Catamarca, que tal vez el auténtico filón estuviese más profundo, y que las escamas de oro, plata y manganeso, que aparecían imperceptibles a la vista, pero visibles al microscopio, eran en realidad las primeras muestras de un filón magnífico.

Invirtió entonces el proceso que había sido adoptado por todos los geólogos del país. Como había algunos pozos o piques que apenas llegaban a treinta metros, con autorización de la Universidad Nacional de Tucumán, que había puesto su empeño en realizar este prodigioso hecho, consiguió efectuar piques más profundos mediante aportes de la misma universidad. Entonces se produjo el hecho asombroso de que apenas en el curso de tres kilómetros, en un pozo excavado a 180 metros, podía calcularse que la riqueza de la mina llegaba a más de 12 mil millones de pesos, y en otro pozo a más de 232 millones.

Este hecho extraordinario hizo que la Universidad Nacional de Tucumán entregase todo su esfuerzo, como lo dijo mi colega de sector, realizando aportes en dinero, en máquinas, en instalaciones, etcétera, para llevar a cabo una auténtica obra de provecho nacional.

Pero empiezan las primeras divergencias entre Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Indudablemente ambas tenían derechos legítimos a la mina: Catamarca, porque la mina de Farallón Negro o Aguas de Dionisio está ubicada en su territorio; la Universidad Nacional de Tucumán, por el hecho de haberle sido concedido permiso minero, por tener a su nombre la inscripción en el Registro de Minas.

Así andaban las cosas, sucediéndose una serie de hechos extremadamente raros en el ambiente tranquilo catamarqueño, que ya veremos a qué obedecían. Lo cierto es que el aspecto legal, después de una serie de convenios, estaba en favor de la Universidad Nacional de Tucumán. Pero con posterioridad a 1949, y como consecuencia de la Constitución sancionada ese año, se declaran caducos todos los permisos, es decir, que fueron momentáneamente precarios. Se produce posteriormente el hecho de la Revolución Libertadora, y la derogación subsiguiente de la Constitución de 1949; nuevamente la Universidad Nacional de Tucumán, por esa circunstancia, recobra su derecho a la explotación minera.

Entre la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán se producen tremendas discusiones, se realizan convenios y a veces, cuando ya parecía solucionado el problema, de nuevo volvía a reabrirse por hechos inadvertidos, produciéndose divergencias en opiniones que aceptara ayer el interventor de Catamarca para levantarse hoy nuevamente en contra de lo que había sido convenido.

Y ocurre este hecho inusitado: en una oportunidad en que se había ya resuelto definitivamente el proceso, cuando la Universidad Nacional de Tucumán va de nuevo a la explotación, cuando envía al técnico, ingeniero Urioste, para que prosiga los trabajos mineros, se encuentra con que las autoridades catamarqueñas se oponen a que llegue a la mina. Y así sucesivamente los señores diputados expusieron aquí, cómo hubo momentos en que la posibilidad de la explotación la tenía la Universidad de Tucumán, y cómo en otros aparecía Catamarca afirmando sus derechos en contra de aquélla.

Ocurre que un día en Catamarca se produce un auténtico movimiento insurreccional en defensa de su autonomía y de su derecho a explotar su riqueza, porque creía que ésa era su gran solución económica. Pero aparecen algunos movimientos un poco raros, colaborando gente que no es del país.

Quiero destacar aquí, señor presidente, algunas diferencias que tengo con el proyecto, porque creo que es el momento de afirmar legítimamente para el país, en forma definitiva, la explotación de este grandioso promisorio argentino, pues no se trata ya de un problema de Catamarca sino de un gran problema nacional, cuya solución es en beneficio de todo el país.

Mientras se realizaban esas tratativas y mientras el pueblo de Catamarca salía a la calle en defensa de su patrimonio, ocurrió que una compañía extranjera había realizado ya su primera etapa para obtener un permiso sobre la misma. Me refiero a la National Lead Company.

¿Qué papel desempeñó esta empresa extranjera? Sería oportuno recordar en este momento lo que expresara aquel poeta español de la República y de la libertad: «un día nos robasteis el airón y ahora nos habéis escondido la espada».

Esa compañía extranjera está movida, como es lógico, por sus intereses, ajenos al país. Aunque muchos de los señores legisladores tal vez no conozcan algunos antecedentes, tengo sobre mi banca algunas de las pretensiones de esa compañía extranjera.

Existen graves elementos que permiten deducir que la National Lead Company tiene pretensiones sobre el yacimiento. Con fecha 18 de marzo de 1956, por expediente 347.161/56 de la Dirección Nacional de Minería y por nota firmada por un señor J. Worcester, la National Lead Company, con directorio central en Estados Unidos y directorio local en Buenos Aires, avenida Roque Sáenz Peña 567 de esta capital, solicitó por el expediente reservado y secreto arriba indicado, la concesión del Farallón Negro proponiendo las siguientes condiciones: Primero: regalía del siete por ciento en los primeros tiempos, que podía llegar más tarde al

veinte por ciento en los porcentajes de gastos fijados por la empresa. Segundo: explotación durante seis meses sin pago de ninguna regalía por parte de la National Lead Company. Tercero: veinte años de plazo de la concesión, con opción a favor de la empresa, por otros veinte años más. Cuarto: exención total de impuestos, inclusive del impuesto a los réditos para la firma y para el personal extranjero. Quinto: liberación de todo derecho de importación y derecho de importar cualquier elemento que la empresa disponga para la explotación. Sexto: libre exportación sin derecho impositivo alguno. Séptimo: exclusión de toda clase de control obrero; y octavo: exención de toda reglamentación sobre cambios.

Este permiso fue denunciado por la Universidad Nacional de Tucumán a la Junta Militar, que fue sorprendida en su ignorancia de este hecho.

En el expediente letra C número 3.689/56 de la provincia de Catamarca, página 24, se hallan pegados los recortes periodísticos de mayo de 1956, en los cuales se anuncia la llegada del gerente general de la National Lead Company y varios geólogos de los Estados Unidos, quienes viajaron expresamente para visitar y estudiar la mina.

En ese mismo expediente, en la página 25, consta que el señor Gaspar H. Guzmán, entonces funcionario de la intervención y actual vicegobernador electo, con fecha 23 de marzo de 1956 dijo esto que es interesante destacar en defensa del patrimonio nacional.

«Pero hay todavía dos argumentos poderosos que obligan a estar en contra de lo solicitado por la asociación recurrente (Centro Minero de Catamarca). El primero, de índole económica. Se trata de la defensa de la riqueza mineral nacional de los acaparamientos de los trusts internacionales, porque no puede haber derecho a la ingenuidad en materia tan importante, y ya se sabe lo que pueden hacer esos poderosos consorcios cuando les interesan las pertenencias de alguna región; y sabemos también lo que podrían hacer las provincias, sobre todo las provincias pobres como Catamarca, las que ante la posibilidad de contar con mucho dinero, cualquier gobierno es capaz de entregar riqueza a estas organizaciones internacionales. Conste que tenemos en cuenta —agregaba— el principio federalista, tan respetable, en la búsqueda del equilibrio de las instituciones argentinas, tan caro a los sentimientos de los catamarqueños; pero por más respetable que sea este principio nunca puede ser más fuerte que el sentido de la unidad nacional, que tan bien enunciara Avellaneda: «Nada hay en la Nación superior a la Nación misma.»

El hecho de singular importancia de la intromisión de esa compañía imperialista está también anotado en textos recientes que hablan

de nuestra soberanía. Así, el doctor Carlos Emérito González, profesor de la Facultad de Derecho de La Plata, en su libro *Energía y soberanía*, dice con referencia a Farallón Negro: «Otra forma contractual de concesiones, para cuyo logro se mueven ocultos intereses que actúan de la misma manera como acabo de explicar, es la novedosa cuestión del Yacimiento de Agua de Dionisio, en Catamarca, más conocido popularmente por Farallón Negro, de extraordinaria riqueza en oro, plata, manganeso y quizás uranio.

»Sin embargo, en los primeros meses de 1958 se agudiza una campaña que pretende dejar sin efecto la concesión dada a la Universidad Nacional de Tucumán. Renuncian interventores, los partidos políticos están a la expectativa; aparentemente parte de la población —so pretexto de la defensa de Catamarca— fustiga a la universidad, donde van, por cierto, los hijos de la tierra de Esquiú, a enseñar y aprender. Parece que hay intereses contrapuestos. Pero detrás de todo esto, bien escondido, por supuesto, hay algo grave y atentatorio que muchos hermanos catamarqueños no alcanzan a percibir, pero de lo que el ingeniero Eugenio Virla nos da la pauta: la National Lead Company tiene interés en Farallón Negro, y en 1956 presenta una propuesta fijando sus porcentajes de regalía y demostrando que puede «favorecer» más a Catamarca que la universidad donde se educan sus hijos. Aquí —agrega el doctor González— se dice «favorecer», y en el lenguaje petrolero se dice «autoabastecer». El mismo perro pero con distinto collar. Quizás haya también aquí quienes por treinta dineros den sus gritos sirviendo —queriendo o no— a la empresa extranjera que vio en Farallón Negro los doce mil millones de pesos de riqueza y no la cultura ni el interés de la colectividad.»

Yo sé que esto no puede ser dicho de ninguna manera para el pueblo catamarqueño, que se levantó legítimamente en defensa de sus intereses. Pero yo quisiera que con esta discusión cerremos un poco más la brecha; que no haya posibilidad alguna de que a través del ente que ya había sido creado por el decreto 270/58 en la forma que me parece más perfecta, fuera de la administración, aquella empresa imperialista se quede con el esfuerzo de los hijos de nuestro país.

Así, por ejemplo, no comprendo cómo en este proyecto no se expresa respecto a quién se va a destinar o vender el oro extraído de la mina, mientras que en el decreto 270/58 del gobierno provisional se establecía que el oro que se obtuviera de la mina sería exclusivamente vendido al Banco Central al precio del día de la entrega. Había el propósito de ir respaldando el peso, que en tan malas condiciones se encuentra. Se advierte que había el propósito de hacer que el dólar bajase y que no fuera cada día

más inalcanzable, hasta para las esperanzas de este pueblo.

Desearía que los señores diputados de la mayoría introdujeran una modificación en este proyecto, para que al ente autárquico que se crea se lo obligue a vender el oro que obtenga directamente al Banco Central.

Me preocupa, señor presidente, el artículo 59 del proyecto, según el cual YMAD no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorgan ni los que se deriven de la concesión minera a que se refiere el artículo 49, total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni empresas mixtas nacionales o provinciales. Me preocupa, digo, porque al discutirse este proyecto de ley en el Senado se dijo algo que puede posibilitar la entrega, en parte, de nuestra soberanía.

Es verdad que se habló en esa oportunidad sólo de locaciones de obras y de locaciones de servicios. Pero ya sabemos qué concepto tienen las compañías extranjeras respecto de las locaciones de obras y de servicios. Es la primera penetración, para después hacerse prácticamente propietarias, restando las posibilidades del esfuerzo de nuestro pueblo.

Creo que era más justo y más exacto el artículo pertinente del decreto 270/58, que establecía de modo categórico que no se entregaría ni en concesión ni en usufructo parte alguna de este yacimiento. En el momento oportuno de la discusión en particular voy a proponer la sustitución de este artículo.

Para abreviar la exposición, quiero señalar que ha sido provechosa la postergación de este asunto. En la tarea auténticamente argentina de impedir la penetración de los consorcios internacionales, que tanto daño han hecho a la economía nacional, ojalá nos encontremos siempre unidos para cerrar la brecha y hacer posible, en cambio, la realización de esperanzados anhelos para bien de la patria. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Muy bien se han expresado los señores diputados Fuertes y Tessio en cuanto señalaron que está en el ánimo de todos la imperiosa necesidad de crear un ente para el desarrollo de la industria minera en Agua de Dionisio.

El diputado que habla está absolutamente de acuerdo, y tanto es así que presentó un proyecto elaborado sobre la base de la sanción producida por el Senado, más elementos útiles que contenía el decreto 270 del gobierno de la revolución, y además iniciativas propias que vendrían a subsanar lo que a mi modo de ver son graves fallas en el proyecto en consideración.

Por ello, en la última sesión ordinaria solicité que este asunto pasara a comisión para que, si

fuera posible, elaboráramos un único proyecto. Mayor razón me asistiría en este instante, en que debatiremos el asunto en general y en particular, si no se aceptara un pedido que voy a formular. Rogaría a la benevolencia de la Honorable Cámara que admitiera que tanto la sanción del Senado como mi proyecto, que contiene aspectos nuevos fundamentales de control y de mejoramiento de aquella sanción, pasaran a cada una de las comisiones para que en un plazo de diez o doce días tuviéramos un despacho sin observaciones, pues debemos procurar por todos los medios que Aguas de Dionisio sea una realidad; que no sólo satisfaga a la provincia de Catamarca y a la Universidad de Tucumán, sino que sea un vínculo armónico de unión, para que el país pueda recibir los beneficios que esos yacimientos pueden darle.

Es decir, señor presidente, que sin renunciar a hacer la crítica profunda general a este proyecto y a las críticas parciales de sus artículos, haciendo uso del derecho que me acuerda el artículo 100, inciso 89 del reglamento, hago moción de que el asunto vuelva a comisión.

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — En nombre del bloque de la mayoría, me voy a oponer a lo solicitado por el señor diputado por la Capital.

El proyecto del Poder Ejecutivo, en cuya redacción participaron la Universidad de Tucumán y los delegados de la provincia de Catamarca, ha conseguido, en primer término, formar un ente que puede trabajar con agilidad en esta empresa, y además se han cerrado todas las puertas a una posible intromisión de intereses extranjeros en este caso.

En cuanto al proyecto del señor diputado por la Capital, no he tenido oportunidad de leerlo detenidamente, por cuanto creo ha sido presentado en el día de la fecha, pero por la información general que de él tengo, es susceptible de algunas críticas. Está muy lejos de ser lo que el señor diputado manifestó en el sentido de perfeccionar el proyecto en discusión enviado por el Poder Ejecutivo, en el cual ha participado, como dije, la Universidad de Tucumán en su total redacción, y Catamarca, provincia a la cual representé en esta tarea.

Por eso, en nombre de la comisión, me opongo a lo solicitado por el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiaurre. — Voy a apoyar el pedido formulado por mi compañero de sector el señor diputado Verdaguer, y a solicitar del bloque de la mayoría que, por la serie de razones que voy a dar en este momento, contemple la posibilidad de remitir nuevamente a comisión el proyecto que estamos tratando.

Sin entrar a calificar intenciones y sin dudar de ninguna manera del propósito patriótico que

halla en él una solución para resolver el diferendo entre la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán sobre Agua de Dionisio, debo decir que hay en este proyecto una serie de irregularidades —voy a llamarlas así, sin ánimo ofensivo— que esta Cámara, en defensa de su propio decoro, debe contemplar, pesar y medir antes de dar una sanción sin el estudio exhaustivo de las respectivas comisiones.

En primer lugar, las diferencias surgidas a raíz de los yacimientos de Agua de Dionisio entre la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán resultan en definitiva superadas por el convenio del 7 de junio de 1958, aprobado —y es éste uno de los primeros hechos que resalto— por la ley de la Legislatura catamarqueña en la cual se deroga el decreto 270/58, que es una ley de la Nación que únicamente puede ser derogada por el Congreso Nacional. No sé cómo puede ser calificado este hecho desde el punto de vista jurídico e institucional; pero, en mi modesto entender, avanza sobre las atribuciones privativas del Honorable Congreso.

Sr. Uzal. — No tiene ningún valor. Es un hecho inválido.

Sr. Zubiaurre. — Además, el proyecto que estamos tratando, como ha sido reconocido públicamente, es una consecuencia también de aquel convenio del 7 de junio de 1958 que redactan de común acuerdo los representantes de la provincia de Catamarca y los representantes de la Universidad Nacional de Tucumán, que luego es elevado al Congreso para seguir el trámite parlamentario por vía de un anteproyecto que remite el Poder Ejecutivo sin agregar ese antecedente valiosísimo del acta-convenio que acabo de mencionar.

Aparte de eso, y como una demostración de que en este proceso ha habido —sin mala intención, vuelvo a repetirlo— improvisación en el trámite, tengo sobre mi banca uno de los argumentos que pueden considerarse decisivos en esta materia. Es el texto ordenado de la ley 13.653, que determina, precisamente, las condiciones que deben reunir los entes autárquicos de la Nación y a las que debe ajustarse en todo momento esa estructuración.

El artículo 1º de esta ley dice: «Las actividades de carácter industrial, comercial o de explotación de servicios públicos de igual naturaleza que el Estado, por razones de interés público, considere necesario desarrollar, podrán llevarse a cabo por medio de entidades que se denominarán genéricamente empresas del Estado.»

Sr. Uzal. — No se trata de un ente autárquico nacional; existe intervención de la provincia. Es un ente sui generis.

Sr. Zubiaurre. — Es una empresa estatal de la Nación. Es un ente autárquico nacional.

Sr. Uzal. — Pero no está típicamente caracterizado como tal.

Sr. Zubiaurre. — Está creado por la ley.

Sr. Uzal. — Pero no encuadra dentro de ese aspecto legal...

Sr. Zubiaurre. — Si me permite el señor diputado, voy a continuar ordenadamente mi exposición.

Quiero, simplemente, dejar establecido que existe aquí una falla que nosotros estamos en condiciones de subsanar. Todos los entes autárquicos, todos los entes nacionales, deben estar reglamentados y determinadas sus estructuras básicas.

Sr. Heredia (G. L.). — Cuando son íntegramente nacionales; pero en este caso interviene la provincia de Catamarca, en una especie de acuerdo.

Sr. Zubiaurre. — Tengan paciencia los señores diputados, y verán cómo es un ente autárquico nacional.

Sr. Peralta. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Zubiaurre. — Sí, señor diputado.

Sr. Peralta. — Quiero manifestar que el ente que se crea por esta ley no es realmente un ente autárquico dependiente de la Nación. Los entes autárquicos dependen de la Nación, de una provincia o de un municipio, los que ejercen el contralor de los actos en cuanto a su legitimidad y oportunidad.

En este caso actúa por un lado la Nación y por otro la provincia, que no puede ser obligada a otorgar la concesión si ella no lo desea. Vale decir que no es un ente realmente estatal, que depende del Estado nacional, como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales. No se olvide el señor diputado que está de por medio una provincia que ejercerá también el control de los actos de ese ente de que ella forma parte.

Yo me inclinaría a manifestar que, dentro de las características sui generis que tiene el ente que se crea, más que un ente autárquico nacional, sería un ente «interestatal», en el que la Nación entrega los fondos para explotar las minas, y la provincia de Catamarca, dadas ciertas condiciones estipuladas en el acta de Farallón Negro, se compromete a otorgar la concesión.

La ley 13.653, mencionada por el señor diputado, se refiere pura y exclusivamente a los entes autárquicos nacionales, y si este ente que vamos a crear, llamado YMAD, ha sido sometido a las disposiciones de esa ley, fue exclusivamente por razones de mayores garantías.

Creo que mis palabras dejan perfectamente aclarado este punto.

Sr. Presidente (Zanni). — La Presidencia recuerda al señor diputado por Buenos Aires que las mociones de orden se discuten brevemente.

Sr. Zubiaurre. — Insisto, señor presidente, en que este proyecto crea un ente autárquico nacional.

Sr. Peralta. — En ninguna parte del proyecto se dice eso.

Sr. Zubiaurre. — ¿Quién crea el ente? Esta ley nacional.

Por el artículo 4º del proyecto se autoriza a la provincia de Catamarca a conceder a YMAD «con prescindencia de las condiciones que establece el Código de Minería en cuanto al número y medidas de las pertenencias, el yacimiento minero de Agua de Dionisio...».

Este proyecto está en colisión con una ley nacional en vigencia, que reglamenta todos los entes similares.

Sr. Peralta. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado por Buenos Aires?

Sr. Zubiaurre. — Sí, señor diputado.

Sr. Peralta. — Deseo aclarar que el artículo 4º del proyecto, al decir que «la provincia de Catamarca queda autorizada para conceder a YMAD, con prescindencia de las condiciones que establece el Código de Minería en cuanto al número y medida de las pertenencias, el yacimiento minero de Agua de Dionisio...», en manera alguna obliga a la provincia de Catamarca a otorgar la concesión...

Sr. Zubiaurre. — Faculta a la provincia a conceder a YMAD el yacimiento minero.

Sr. Peralta. — Este hecho viene a significar que se trata de un ente con características sui generis, pues si bien el Congreso de la Nación por este proyecto crea un régimen de excepción al Código de Minería, en manera alguna puede invadir jurisdicción provincial. A Catamarca se la libera de una obligación establecida en el Código de Minería en el artículo 27, y nada más.

Sr. Zubiaurre. — A los efectos de no entorpecer esta discusión, sugeriría que los hombres de derecho de esta Cámara confrontaran inmediatamente, en un breve cuarto intermedio, el texto de la ley 13.653 con este proyecto y que luego se resuelva rápidamente esta cuestión.

Sr. Presidente (Zanni). — ¿El señor diputado formula moción de orden de pasar a cuarto intermedio?

Sr. Zubiaurre. — Si no se decide girar nuevamente a comisión este proyecto, yo voy a proponer que se pase a un breve cuarto intermedio.

Sr. Presidente (Zanni). — La verdad es que se está entrando a la discusión en particular.

Sr. Pozzio. — Pero es beneficioso.

Sr. Zubiaurre. — Para después de que hiciera su exposición el señor diputado Verdaguer, tenía anotada una serie de diferencias que determinan que los artículos 6º, 12, 15, 18 y 21, para no mencionar más que algunos, están en conexión con disposiciones de la otra ley, que es de orden general.

No sé, planteándose la cuestión en el momento oportuno, cuál es la ley que ha de prevalecer; ni sé si una entidad nacional, provincial o de tipo especial —dado el carácter de la Universidad Nacional de Tucumán— puede designar directores de ese ente.

Sr. Uzal. — Precisamente, yo iba a solicitar la lectura del primer párrafo del artículo 6º para demostrar que se trata de una entidad específica sui generis, que no es un ente autárquico nacional.

Sr. Zubiaurre. — Lo cierto es que no estamos de acuerdo en un asunto que es fundamental.

Sr. Silveira Márquez. — ¿Me permite una interrupción, el señor diputado?

Sr. Zubiaurre. — Con mucho gusto.

Sr. Silveira Márquez. — He escuchado las argumentaciones expuestas por los señores diputados que sostienen que estamos ante un ente de carácter sui generis. Pareciera que ese tipo de ente sui generis surgiera del articulado de la ley; pero es evidente que el señor diputado Zubiaurre, al hablar de autarquía quiere demostrar que la norma está dada por el artículo 10. Si es cierto que allí no se habla de autarquía, no es menos cierto que el ente tiene la fisonomía de un ente autárquico, porque reúne todas las características esenciales que debe tener para que pueda gobernar su propia vida.

Si no fuera así, el concepto de autarquía que dan los autores de derecho administrativo, no sería exacto.

Quiero llamar la atención con respecto al artículo 10 del proyecto que, a mi modo de ver, expresa el sentido de verdadero ente autárquico que tiene la entidad que se está creando por esta ley.

Sr. Presidente (Zanni). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiaurre. — Luego de escuchar las opiniones vertidas, de estudiar concienzudamente el proyecto que discutimos, de estudiar la ley 13.653 y los proyectos relativos a creación de entidades de este tipo, como por ejemplo, el Mercado Nacional del Té o la Dirección Nacional de Vialidad, encuentro que hay apresuramiento evidente en la redacción de esta ley y que es perfectamente posible, después de un estudio meditado, que no llevará mucho tiempo, dar la redacción sobre la base del mismo proyecto sancionado por el Senado en forma que permita resolver esta cuestión desde el punto de vista jurídico e institucional, sin afectar en lo más mínimo los derechos de Catamarca, las posibilidades de la Universidad Nacional de Tucumán, ni ninguno de los aspectos que hacen al ordenamiento institucional de la Nación. En ese sentido adhiero a la moción formulada por el señor diputado Verdaguer de que el asunto vuelva a comisión.

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pozzio. — Ruego a la Honorable Cámara me disculpe si me excedo un poco en el plazo concedido por el reglamento, pero el debate que se ha producido en torno al carácter que

tendrá la institución me obliga a hacer algunas manifestaciones.

Recuerdo a la Honorable Cámara que fue el diputado que habla quien en el último día del período ordinario de sesiones propuso que este asunto pasara a comisión, pues entendía que podía haber aspectos de derecho constitucional que la comisión respectiva debería estudiar.

Este debate me viene a dar la razón. Estaba en mi ánimo no proponer que pasase de nuevo a comisión, porque entendía que con las explicaciones que pudieran dar los señores miembros informantes de las respectivas comisiones, quedarían aclarados muchos aspectos de la ley a efectos de su interpretación y su vigencia futura.

En tal sentido, no voy a entrar a una disquisición de los conceptos sobre las entidades de derecho público, en relación a la soberanía, a la autonomía y a la autarquía, que muchas veces se confunden con la autarcía, que es una cosa distinta en lo económico y en lo funcional. Pero lo cierto es que comparto íntegramente el criterio de los que sostienen que ésta es una institución sui generis, una institución de tipo característico que no encuadra perfectamente en ninguna de las instituciones de las leyes actualmente en vigencia en la Nación.

Lo cierto y lo real es que yo creo que a veces cuando se pide a los abogados que aclaren ciertas disposiciones, a lo mejor las obscurecen, pero en este aspecto podemos ponernos de acuerdo.

No olvidemos, señores diputados, que se trata de un proyecto que viene en revisión del Honorable Senado. El señor miembro informante de la Comisión de Industria del Senado mencionó la existencia de un ente autárquico, pero evidentemente, el ente autárquico no sale de la denominación legal; se puede presumir de la estructuración, pero no está.

Lo cierto y lo real es también que las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria de esta Cámara, que fueron las que hicieron el despacho en mayoría, también hacen referencia a la existencia y al proyecto de un ente autárquico; pero no aparece dentro de la denominación que debe hacerse en la propia ley, para que esa autarquía pueda operarse.

Por otro lado, me afirmo en mi convicción de que se trata de una ley evidentemente típica, puesto que las relaciones existentes en los entes autárquicos tienen características propias que no están en la ley que estamos considerando, puesto que las partes que se relacionan son tres: una provincia, una universidad y el gobierno nacional. ¿Cómo se compagina su articulado? Evidentemente, existe una serie de deficiencias que era necesario que se aclararan por los miembros informantes.

No hago más que referirme al artículo 1º, que no hace ninguna mención al carácter que

invierte el ente que se va a crear por ley. Lo cierto y real es que hay una disposición en el proyecto —no recuerdo en este momento el artículo— que da facultades al gobierno nacional para intervenir ese ente. De modo que se trata de una facultad extraordinaria en cuanto a su vida.

Por otro lado, el artículo 13 hace referencia a todas esas relaciones existentes entre el gobierno nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán.

Además, hay que advertir que, sean cuales fueren las relaciones de esas tres instituciones que integran el ente que se va a crear, son las disposiciones que se le van a aplicar subsidiariamente, sin que en modo alguno, dentro de su articulado, se puedan hacer las aclaraciones necesarias para apreciar cuál es el verdadero concepto que existe en la ley.

No hago más que mencionar y referirme a la ley que creó las sociedades mixtas, donde se hace referencia a los conceptos de relaciones de tipo público, pero sólo en el orden jerárquico, no así respecto a orden funcional, que es una cosa distinta.

Por otra parte, adviértese que el gobierno nacional contribuye con un capital originario de \$ 20.000.000, con la obligación de aportar 150.000.000 más a base de un crédito, para luego en definitiva el gobierno nacional no tener ninguna participación en las ganancias que quedan exclusivamente para la provincia de Catamarca y para la Universidad de Tucumán.

Por otro lado, la situación especialísima del gobierno nacional, que forma parte integrante del ente, hace que, en el caso de que se produzca la disolución, el gobierno nacional va a asumir la responsabilidad de hacerse cargo de los déficit o de los gastos que existieran, es decir, que las disposiciones del derecho común que impiden que en una sociedad una parte pueda cargar con toda la deuda u obtener todas las ganancias, en desmedro de otra, no está jugando y no se aclara en esta disposición.

Cuando se trata del caso de disolución, se aparta del principio, puesto que se han tomado disposiciones de otras leyes, pero desvirtuadas en su esencia. Se trata de un ente que es, evidentemente, de derecho privado. Hay disposiciones del derecho común que dicen otra cosa con respecto al destino de los bienes, y que tampoco se aclaran en la ley.

Finalmente, se deroga el decreto ley 270/58 y no se hace ninguna referencia a la derogación de todas aquellas disposiciones que pudieran oponerse al ente que se crea por la ley en consideración.

Es necesario y conveniente, si no vuelve el despacho a comisión por decisión de la mayoría, que se entienda que a este sector no lo lleva el propósito de sabotear la ley, sino el de que se hagan las aclaraciones pertinentes para una verdadera estructuración legal.

Por eso, a título personal pensaba que podíamos, en realidad, con las aclaraciones pertinentes, buscar la forma de que el proyecto de ley tuviera sanción definitiva.

Sr. Presidente (Zanni). — ¿Mantiene su proposición el señor diputado Verdaguer?

Sr. Verdaguer. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Correa. — Indudablemente, las manifestaciones del señor diputado Pozzio me van a ahorrar algunas palabras.

En nombre del bloque expreso nuestra oposición a la moción del señor diputado Verdaguer y a la del señor diputado Zubiaurre, por cuanto el análisis exhaustivo de los problemas constitucionales que el proyecto plantea, ya tuvo su instancia. Efectivamente, en la última sesión ordinaria celebrada por la Honorable Cámara, ése fue el argumento decisivo. Se solicita el pase a comisión por falta de tiempo en el análisis por parte de la minoría. No se puede insistir hoy en la vuelta a comisión o en un cuarto intermedio, cuando ha existido tiempo más que suficiente para el análisis de toda la cuestión.

Por otra parte, las cuestiones planteadas por los señores diputados Verdaguer y Zubiaurre son tan imprecisas como el fantasma que los asusta: la «National Lead».

Sr. Verdaguer. — Después las vamos a precisar mejor.

Sr. Correa. — Nos oponemos, pues, a la moción del señor diputado Verdaguer.

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Suárez. — A fin de fijar mi posición personal, y ante la auténtica necesidad de aclarar algunos puntos, como muy bien lo han planteado los señores diputados Verdaguer y Zubiaurre, deseo hacer una pregunta concreta a la comisión.

Deseo saber cómo juega el proyecto de ley con el artículo 105 de la Constitución de Catamarca, que, para mí, plantea un serio problema institucional.

Sr. Peralta. — Si tiene a mano la Constitución de Catamarca, podría leer el artículo.

Sr. Suárez. — Sí, señor diputado.

El artículo 105 de la Constitución de Catamarca establece expresamente, en el apartado 16, que el Poder Legislativo autorizará las cesiones de parte del territorio para objeto de utilidad pública nacional o provincial. Se establece, precisamente, que el Poder Legislativo de Catamarca es el único que puede disponer del territorio de la provincia.

Además, el inciso 22 autoriza al Poder Legislativo para aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrase con otras provincias.

Por ello, estimo que esta ley estaría en contra de las prescripciones de la Constitución de

Catamarca, lo cual me sugiere la necesidad de adherirme al planteo formulado por los señores diputados de nuestro bloque.

Sr. Correa. — Desearía que la Presidencia hiciera dar lectura del texto del artículo que invoca el señor diputado por Mendoza, porque él se ha limitado a dar su interpretación. Nosotros entendemos que es distinto.

Sr. Suárez. — Comparto el criterio del señor diputado Peralta según el cual corresponde a la provincia dar la palabra definitiva sobre este problema. Creo que en la ley habría un ataque al federalismo de Catamarca. Incluso, este concepto lo he extraído de las palabras del señor diputado por Catamarca, que me parecen correctas, en defensa de los intereses de su provincia.

Sr. Presidente (Zanni). — Por Secretaría se va a dar lectura de las partes pertinentes del artículo 105 de la Constitución de la provincia de Catamarca.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 105 de la Constitución de Catamarca se refiere a las atribuciones del Poder Legislativo. Dice en su primera parte: «Corresponde al Poder Legislativo», y enumera en diversos incisos las facultades. El inciso 16, dice: «Autorizar la cesión de parte del territorio para objeto de utilidad pública nacional o provincial.» Y el inciso 22, dice: «Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrase con otras provincias.»

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Mercado. — Señor presidente: indudablemente la estructura del proyecto de ley en discusión se presta para una doble interpretación.

Si nos atenemos a su naturaleza y contenido, podemos ver que se trata, en realidad, de un ente autárquico. Para ello he de referirme a los aspectos financiero, administrativo y de contralor de la entidad que se proyecta.

En el orden financiero, el Estado nacional es exclusivamente el financista; ello surge de los artículos 15 y 20 del proyecto. Desde el punto de vista administrativo, las personas que integran el directorio son representantes del Estado nacional y del Estado provincial. En cuanto al contralor, lo ejerce el Tribunal de Cuentas de la Nación, y en el orden presupuestario es el Poder Ejecutivo el que aprobará el presupuesto, previo conocimiento del Congreso Nacional.

Estos rasgos característicos definen a mi juicio a este ente como un organismo autárquico de carácter nacional. De manera que necesariamente debe reconsiderarse este proyecto para armonizarlo con las otras leyes de la Nación, con las que estaría en pugna; tendría que establecerse expresamente que se derogan las disposiciones que se oponen a las proyectadas.

Por lo expuesto adhiero a la indicación del señor diputado Verdaguer de que este despacho vuelva a comisión.

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — En primer término me referiré a lo expresado por el señor diputado Suárez. El artículo 105, inciso 16, de la Constitución de la provincia de Catamarca, referente a las facultades del Poder Legislativo, no es nada más que una concordancia con lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 104, que dice: «Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación». Entonces, si la Legislatura puede aprobar convenios interprovinciales, es justamente porque la provincia de Catamarca se ha reservado esos poderes.

De todas las apreciaciones que se han hecho aquí, la más acertada es la del señor diputado Pozzio. Lo digo sinceramente, sin ánimo de ofender.

Como abogado, repito, me he preocupado muchísimo por desentrañar la naturaleza jurídica de la institución que creamos y he llegado al convencimiento de que no se trata de un ente autárquico nacional. No se dan los elementos característicos como en el caso de YPF. Me ha satisfecho muchísimo que un profesional de la categoría del doctor Pozzio haya concordado con mi criterio.

Una interpretación sana nos va a llevar al convencimiento de que se trata de un ente sui géneris que se va definiendo en cada caso.

Sr. Mercado. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Peralta. — Sí, señor diputado.

Sr. Mercado. — ¿Pero qué es lo que caracteriza a este ente sui géneris que el señor diputado pretende encontrar en esta figura jurídica?

Sr. Presidente (Zanni). — Los señores diputados están discutiendo la naturaleza jurídica de este ente; y lo que debe discutirse, brevemente, es la moción de orden. Oportunamente continuará la discusión en general.

Sr. Peralta. — Acepto, señor presidente.

Sr. Santoni. — Como miembro de la Comisión de Industrias y firmante del despacho de la mayoría, quiero dejar constancia de que me opongo a la modificación del texto e igualmente a la substitución del mismo, como se ha propuesto por los señores diputados de la minoría.

Sr. Presidente (Zanni). — Corresponde votar la moción de orden, formulada por el señor diputado por la Capital, de que vuelva a comisión el despacho que considera la Honorable Cámara.

Sr. Juárez Peñalva. — El bloque de la mayoría va a votar por la negativa.

Sr. Presidente (Zanni). — Se va a votar.

—Resulta negativa de 76 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Zanni). — ¿Mantiene su proposición de pasar a cuarto intermedio el señor diputado por Buenos Aires?

Sr. Zubiaurre. — La retiro, señor presidente.

Sr. Presidente (Zanni). — Continúa la consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Heredia (G. L.). — No haré uso de la palabra, señor presidente, porque sólo quería manifestar, en nombre de la mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nuestra oposición a la moción que se acaba de votar.

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Antes de entrar al análisis en general de la sanción del Honorable Senado, creo imprescindible recordar a la Honorable Cámara algunos datos relativos a la importancia de los yacimientos de Agua de Dionisio.

Según informaciones oficiales y periodísticas, el valor asignado a los yacimientos de Agua de Dionisio oscila entre los 10.000 millones y los 200.000 millones de pesos, en tanto que nuestra información acuerda aproximadamente los siguientes valores en forma estimativa. Cubicado con ley, 310.000 toneladas; valor, 230 millones de pesos. Cubicado sin asignación de título de ley, 610 millones de toneladas. Calculando su valor en base a la mitad de lo que vale, para no ser tan optimistas, el valor de lo cubicado con título de ley, es decir, las 310.000 toneladas, dándole un valor de 115 millones de pesos, en lugar de los 230 millones que en realidad deberíamos considerar, tendríamos el siguiente cálculo estimativo: si para 310.000 toneladas se asigna un valor de 115 millones de pesos, para los 610 millones de toneladas debe asignarse una cifra aproximada del orden de los \$ 200.000.000.000.

Además, existe como mineral simplemente calculado, 9 millones más de toneladas, que estimadas en valores similares nos darían una suma adicional aproximada de 3.000 millones de pesos. Todo este mineral sería el localizado simplemente en una extensión de 3.000 metros de largo por 200 de profundidad, en un solo filón denominado Farallón Negro, el cual tendría, según cateos, unos 15 kilómetros de largo por una profundidad de 200 metros. Por eso no es aventurado afirmar que si en sólo 3 de los 45 kilómetros que constituyen el yacimiento de Farallón Negro puede estimarse un valor de 200 millones de pesos, en su totalidad la cifra alcanzaría valores del orden de los millones de millones de pesos, es decir, el billón de pesos.

Pero no quedaría así limitada esta fabulosa riqueza, ya que ello sería el valor estimativo de las dos terceras partes del corte del yacimiento. Además, en Agua de Dionisio, en los 360 kilómetros cuadrados, existen yacimientos no mencionados, como Macho Muerto, Los Vis-

cos y otros, que permiten prever para esa zona riquezas fabulosas.

Estos datos pueden confirmarse por la simple lectura del parte de informe número 1.040, rotulado «estrictamente confidencial», de la Dirección Nacional de Minería, dirigida al Ministerio del Interior, cuya copia fotográfica pongo a disposición de la Presidencia. Oportunamente solicitaré su inserción en el Diario de Sesiones junto con otra información del mismo orden y también rotulada «estrictamente confidencial».

Al tratar esta ley debemos ubicarnos exactamente dentro de los valores que representa esta riqueza, para dar a todos y cada uno de los artículos del proyecto la trascendencia que merecen. No se trata de un simple yacimiento que puede admitir una organización sui generis; es algo que reviste demasiada importancia como para aceptar que todo eso se halle en manos de una institución sui generis. Debe ser una institución autárquica, como yo propicio en mi proyecto; y además, como entendemos que la autarquía de ese ente no nos permitirá una vigilancia estricta, yo agrego en mi proyecto la necesidad de controles extraordinarios que luego analizaremos.

Antes de considerar la ley, es necesario destacar hechos de gravedad. Habrá que hacer un poco de historia para ubicarnos en el asunto, a cuyo efecto debemos retrotraernos al año 1948, cuando en plena época del gobierno depuesto hubo fabulosos manejos de oro en el país. Algunos hechos demuestran que el movimiento era incluso de oro existente en el Banco Central, mientras que el presidente de la República preguntaba para qué servían el oro y las divisas.

En 1948 hubo una sostenida oferta de oro en el mercado interno y en el mercado negro del país, y es creencia de quienes se especializan en esta clase de asuntos, que parte considerable de ese oro provenía de nuestros yacimientos, de los que las arcas del Estado nunca recibieron un solo gramo. El oro era de procedencias que estaban fuera del control del Estado nacional, manejado por empresas privadas nacionales y extranjeras, preferentemente por estas últimas, y especialmente, como se dijo hace un rato, por la National Lead Company. Esta empresa no sólo pide —ya lo pidió, como bien se dijo, y ponemos la información al alcance de quien lo desee— derechos mineros, sino que tiene una cantidad de yacimientos en explotación que en su oportunidad nos permitirán preguntarle qué uso dio, cómo negoció y a quién vendió el oro que extrajo del territorio argentino.

Es así que el gobierno depuesto, que manejaba a su antojo el movimiento de oro, consideró necesario poner un freno a esa situación.

El 30 de octubre de 1948 se firma el decreto 33.920, cuyas partes esenciales me permito leer.

Dice así: «Visto lo aconsejado por el Consejo Económico Nacional, y considerando: Que es necesario poner término a las maniobras especulativas que ocurren en la compraventa del oro; Que la especulación a que se hace referencia interfiere en el desenvolvimiento económico y fomenta el alza artificiosa de los precios en general; Que las leyes 12.830 y 12.983 facultan al Poder Ejecutivo a incluir en el régimen de las mismas, los productos, materiales y artículos que afecten las condiciones de la vida y el trabajo nacionales. Por ello, en uso de las facultades que acuerdan las leyes 12.830 y 12.983, y atento a lo propuesto por la Secretaría de Industria y Comercio, el presidente de la Nación Argentina, decreta: Artículo 1º. — Inclúyese el oro en el régimen de las leyes 12.830 y 12.983.»

El artículo 4º expresa: «Las personas y entidades comprendidas en el artículo 2º del presente decreto, deberán enviar a la Secretaría de Industria y Comercio (Dirección de Abastecimiento), por pieza certificada que expedirán dentro de los cinco primeros días de cada mes, una declaración jurada extendida en formulario oficial, en la que se consignarán las existencias de oro al último día del mes anterior, y las operaciones que hubiesen efectuado en el mes último, detallando: nombre y domicilio del declarante o razón social; lugar donde se encuentra depositado el metal; existencia por calidad del metal el primero y último día del mes; cantidades recibidas, entregadas y consumidas en el mismo mes, detallando con respecto a cada operación nombre y domicilio de las personas de quien se hubiera recibido o a quien se hubiera entregado el metal.» Solicitaré oportunamente que el texto íntegro de este decreto sea también insertado en el Diario de Sesiones.

Cuatro meses después el Poder Ejecutivo ha biendo controlado aparentemente la situación, modifica ese decreto por el número 4070, del 18 de febrero de 1949.

El artículo 1º de dicho decreto dice: Substitúyese el artículo 4º del decreto 32.920 de fecha 30 de julio por el siguiente: Las personas y entidades comprendidas en el artículo 2º del presente decreto deberán contar con un libro especial en el que se consignará por orden cronológico todo el movimiento de entrada y salida de oro. Ese decreto anuló la exigencia del anterior, de determinar procedencia, lugar de estacionamiento o movimiento exacto, eliminando trabas. También fue eliminada la exigencia clave.

Por último, quedó totalmente controlada la situación por el gobierno depuesto, dado que no sólo manejó a su criterio los fondos de oro,

sino que llegó inclusive a mantener el control de muchas empresas mineras del país con testafierros, como bien es sabido por la opinión pública, y que llegó a colocar, para el uso particular del ex tirano depuesto y sus cómplices, el oro argentino en bancos europeos. Cuando ya tiene la situación dominada, dicta el decreto 9.432 que establece que visto lo informado por el Ministerio de Industria y Comercio de la Nación, considerando que en los momentos actuales el mercado de oro se desenvuelve en el país en condiciones tales que aconsejan dejar sin efecto las medidas dictadas para su comercialización, por ello, y atento lo aconsejado por el Consejo Económico Nacional, en uso de las facultades conferidas por las leyes 12.820, 12.983 y 13.492, el presidente de la Nación Argentina, decreta: Artículo 1º. — Deróganse los decretos números 33.920 de fecha 30 de octubre de 1948, y 4.070 del 18 de febrero de 1949.

Quiere decir que el Poder Ejecutivo, en aquel momento, pudo conjurar una situación de pánico, quitándolo de manos privadas, porque ya tenía resuelto su problema.

Hoy día tenemos nosotros Farallón Negro, que debe ser de la Nación, y vigilado permanentemente por este Congreso, porque puede ser una fuente de incalculables riquezas, que puede caer en manos indeseables. Desearía que los señores diputados no vieran en nuestra posición una suspicacia a la acción administrativa del Poder Ejecutivo actual o del directorio que puede crearse en este momento.

La ley debe ir más allá. Debe pensarse en la posibilidad de que más adelante puedan ocupar ese directorio quizá hombres políticos que pretendan realizar la misma acción que en su oportunidad efectuó el régimen depuesto y todos los controles, toda la vigilancia y todo el régimen que nosotros propusimos en ese sentido va encaminado a tal propósito: impedir que las manos de quienes no aman al país y están dispuestos a venderse por cualquier mendrugo al imperialismo extranjero, puedan valerse en el día de mañana de un instrumento, que por una pequeña falta de tiempo no perfeccionamos, para llevarse el oro que sería la base de la felicidad de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.

Por eso, es imprescindible preguntarse cuáles son las causas que movieron al Poder Ejecutivo en aquel entonces a tal política. Varias son las preguntas, pero las más valederas son las que se refieren a las relaciones comerciales que muchos jerarcas del gobierno depuesto mantuvieron con la industria minera y que incluyeron en su técnica la apropiación ilícita del oro, que realizaron como tarea normal. Además, las conversaciones y tratos con otras empresas y las conexiones que el régimen depuesto mantuvo con la California Argentina.

Muchos señores legisladores saben que las minas de Farallón Negro y otras de la zona mo-

tivaron conversaciones con la California Argentina, en una lucha entre dos sectores: los que apoyaban y siguen apoyando desde la sombra a la National Lead Company, y los que pretenden que el poderío minero de Catamarca y del Norte argentino pase a manos de la California Argentina y otras empresas poderosas.

Farallón Negro, Macho Muerto, Los Viscos, y otros yacimientos constituyen una riqueza fabulosa que, debido al anacrónico Código de Minería vigente, corre el riesgo extraordinario, a pesar de la previsión de una ley, de pasar a manos privadas. La menor trasgresión que se realice a la concesión, significaría pasarla automáticamente a la provincia de Catamarca; y la provincia de Catamarca, salvo la reserva establecida en la ley de un año más para el Estado, se vería obligada por el anacrónico Código de Minería a entregarla a las empresas privadas; y como muy bien lo señaló el diputado Tessio, la National Lead trató de obtener la reserva en determinadas condiciones.

Muchas fueron las intervenciones extrañas, pero no pararon ahí. Otra poderosa organización intentó formar un consorcio en combinación con ambas empresas para poder realizar extracciones de mayor valoración y organizar la empresa en una forma económica que diera satisfacción a los interesados.

Muy necesario sería poner en claro, antes de analizar la ley, las actividades de esas compañías en la zona de Belén, Catamarca. Muy útil hubiera sido poder contar con la amplia información que quise obtener mediante el proyecto de resolución presentado a comienzos del período. También hubiera sido interesante que en aquel entonces la Cámara hubiera aprobado mi proyecto de creación de una comisión investigadora. Pero esa ya es materia del pasado.

Como simple elemento de juicio, para luego pasar a debatir la ley en sí, habría sido oportuno traer al seno de la Honorable Cámara un auténtico panorama del escandaloso despojo que viene sufriendo el país en materia minera desde hace muchos años; pero ya que no es posible, conviene referir, al menos, un hecho que habla por sí solo de la voracidad de las empresas, que no es el único, sino típica expresión de una serie de empresas imperialistas que incluso han llegado a exportar impunemente nuestras riquezas.

Tengo en mi poder un informe confidencial, que ha sido leído en parte por el señor diputado Tessio, en el cual se señalan, además de las informaciones expresadas, una serie de hechos tendientes a impedir la constitución de una institución que hiciera factible la explotación de los yacimientos de Agua de Dionisio.

Estoy seguro de que el pueblo de la República se sentiría indignado frente a una propuesta como la que hizo la National Lead, pero

mucho más lo estaría al saber que existen muchas empresas que actualmente no sólo no entregan al Estado nacional del 7 al 20 por ciento de los productos de sus yacimientos, como propone la National Lead, sino que no le entregan ni un solo centavo, ni un solo gramo de oro, ni ninguna regalía.

Es más, señor presidente: quienes conocen esa zona minera informan —y por eso desearía que se constituyera, además, una comisión investigadora para probar o desechar, de una vez por todas, tales afirmaciones— que a lomo de mula, hasta hace poco, y en aviones actualmente, ha salido y sale una enorme riqueza en oro, plata, manganeso y uranio. Esta información la ha confirmado uno de los decanos de la construcción de diques en el país, el constructor del dique Potrero de los Funes, en San Luis. Este señor y su hijo han estado en nuestro bloque, informándonos que es *vox populi* en la zona la fabulosa cantidad de minerales que salen del país.

Señor presidente: ante el valor incalculable de nuestras riquezas mineras y frente a ese eterno conglomerado de empresas financieras contrarias a los intereses del pueblo argentino, me permito rogar a la Honorable Cámara el máximo de paciencia al considerar este proyecto de ley.

Insistimos y anhelamos el triunfo de la ley, pero anhelamos también que Farallón Negro satisfaga los intereses de Catamarca, de la misma manera como deseamos que la Universidad Nacional de Tucumán encuentre la solución de este problema y la Nación vea colmada sus esperanzas. De ahí que hagamos esta crítica en general con el solo y único propósito que inspira a este bloque: con el propósito patriótico de señalar lo que, en nuestro criterio, son errores que deben ser subsanados esta tarde por la Honorable Cámara, por lo cual en su momento pediré que ella se constituya en comisión.

Cuatro son los aspectos generales que vamos a criticar de la sanción del Honorable Senado. Ellos son: primero, una falta de control técnico, económico y administrativo de la empresa —en la sanción del Senado a esta institución se la denomina empresa; habría que agregar *sui generis*—; segundo, imperfecciones en su faz industrial; tercero, inconvenientes en su faz financiera, incluso veladas transgresiones a la Constitución Nacional; cuarto, gravísimas fallas de diverso orden en su aspecto comercial.

Analicemos el primero: control técnico, económico y administrativo. Debemos extremar las medidas en ese sentido.

Ante la serie de los grandes inconvenientes habidos para la vida de esa institución y para la creación de una jerarquía como es YMAD, frente a los innumerables intereses que se han movido y creado, y ante el valor excepcional de los productos que esa institución va a extraer de la entraña de la tierra argentina, todo control

que se cree, por excesivo que pueda parecer, será indudablemente de beneficio general. Nadie debe sentirse molesto ni menoscabado frente a una patriótica coordinación de vigilancia y de estímulo común a varios organismos de un mismo Estado, tendiente a lograr máximos rendimientos con la mínima o ninguna evasión.

Por ello, sin prevención contra nadie, haciendo abstracción de quien sea el que gobierne el país, pensando que hoy gobiernan unos y mañana gobernarán otros; sin confiar ciega y excesivamente en nadie y sin desconfiar totalmente de nadie, afirmamos que la institución que va a crearse carece en la letra legal de los controles apropiados para una institución de tal naturaleza.

En la sanción del Senado, la autoridad única, indiscutida, indiscutible e incontrolable es el directorio. Sólo se mencionan restringidas funciones de control, reservadas al tribunal de cuentas, como veremos luego; pero además de restringidas son incompletas e insuficientes. El directorio se compone de un presidente, designado por el Poder Ejecutivo, y de cuatro vocales: dos por la provincia de Catamarca, que indudablemente designará el Poder Ejecutivo de esa provincia, y dos por la Universidad de Tucumán.

Si tenemos en cuenta que el quórum legal que establece la sanción del Senado es de sólo tres miembros, fácil es advertir que, en ciertos casos, no existe absoluta seguridad de marcha armónica de las responsabilidades y altos intereses en juego. El presidente, designado por el Poder Ejecutivo nacional, y dos vocales de una sola provincia pueden producir resoluciones que, sin ser de mala fe, perjudiquen los intereses de la otra provincia ausente en la votación.

Sr. Juárez Peñalva. — No se trata de otra provincia: es la Universidad de Tucumán.

Sr. Verdaguer. — Para el caso que planteo, es lo mismo. Se trata de tres sectores que dentro de la institución deben armonizarse: provincia de Catamarca, Universidad de Tucumán y la Nación.

En nuestro proyecto de ley resolvemos ese aspecto. Al discutir el proyecto en particular aportaré las iniciativas que en él existen para tratar, como bien dijo el señor diputado Pozzio, de encontrar el instrumento que satisfaga a todo el país.

Además, tal como está redactado el proyecto en discusión, el directorio corre el riesgo permanente de remoción y cesantía de carácter político. Oportunamente propondremos un remedio.

Dentro de esta misma cuestión y en el aspecto técnico quedan absolutamente fuera de todo control serio y eficaz varios aspectos fundamentales.

¿Quién establece, controla y garantiza la ley de pureza de los minerales que se extraigan e industrialicen? El directorio: si es que él mis-

mo así lo propone. ¿Quién controla el rendimiento estimativo por tonelada? El directorio: si llega a crear un organismo a tal efecto. ¿Quién establece y controla sobre el terreno los distintos porcentajes de concentración de mineral, sea que se hallen o no ya ubicados en placeres auríferos, en criaderos o en yacimientos? El directorio. ¿Quién controla, en fin, la producción y reserva de los minerales, especialmente el oro y plata ya industrializados? ¿Quién atestigua el valor de los mismos? ¿Quién vela para que los dispositivos tomados al efecto en el depósito para su control sean absolutamente inviolables? El directorio.

Es decir que de acuerdo con las previsiones de la ley todo queda en manos de un reducidísimo número de funcionarios que, suponiéndolos seleccionados, patriotas y honestos a carta cabal, han de realizar una titánica tarea de dirección, administración, orientación técnicoeconómica e industrial y control de la empresa en sus más mínimos detalles, y, además, autocontroles en todos sus actos.

Sostenemos que de ninguna manera es conveniente poner tanta responsabilidad en tan pocas manos. Es por eso que más adelante señalaremos los recaudos necesarios para subsanar tanta acumulación de responsabilidades, proponiendo la creación de otros controles, tales como la comisión bicameral de control y estímulo, los veedores de las partes interesadas como delegados permanentes y los auditores permanentes y extraordinarios con plenos poderes, tanto los que menciona la ley, intrascendentes, como los que nosotros en pro del éxito total de la empresa tendremos que exigir a fin de que esas investigaciones estén permanentemente en manos del tribunal de cuentas.

Dejo así establecidas, brevemente, nuestras objeciones en cuanto a las más importantes fallas de que a nuestro criterio adolece este aspecto de los controles.

Consideraremos ahora las críticas relativas a la producción en su faz industrial.

Dos son sus fallas más importantes. Primero, lo exiguo del capital proyectado para YMAD y lo reducido que ha de resultar para la misma el préstamo previsto. Con un capital inicial de 20 millones y un préstamo de 150 millones ninguna empresa minera podría emprender una obra de la magnitud que representa la explotación de un territorio de 360 kilómetros cuadrados, excepcionalmente rico, poblado de variadas cantidades y calidades de minerales, cada uno de los cuales requiere procedimientos y equipos de extracción e industrialización de distinto tipo, como bien se señaló en el proceso de extracción de manganeso.

Medítese en el sentido de que los metales preciosos como el oro, por ejemplo, no se encuentran en conglomerado del mismo meta. Salvo en yacimientos excepcionalmente enriquecidos, se

encuentran diseminados en las rocas compuestas principalmente por cuarzo, mica y feldespato.

Pensemos que el metal se concentra en una proporción de ocho gramos por tonelada, lo que en términos mineros es considerado un buen porcentaje, y que, no obstante, en algunas bonanzas de ciertos filones enriquecidos, se han obtenido proporciones que superan en mucho a esos ocho gramos, como ha ocurrido en algunos casos en que se han encontrado vetas o filones con 130 gramos de oro por tonelada, y otros mayores inclusive en profundidad. Ahí es donde se ha demostrado el genio de Peirano cuando discutió con la arcaica idea de que Farallón Negro no servía porque lo que se exploraba en la superficie era incomercial, y él encontró que con la perforaciones, como se ha dicho aquí, perforaciones que llegan a los 200 metros, había concentraciones de extraordinario valor que en algunos casos daban 340 gramos de oro por tonelada. No obstante, el promedio general de los yacimientos de Agua de Dionisio puede calcularse aproximadamente en unos 12 gramos por tonelada. Repetimos que los representantes de ciertas empresas consideran que 8 gramos es ya un promedio excepcional.

Debe tenerse también presente que la riqueza del mineral no está solamente en la superficie, ya que, como hemos expresado, los yacimientos de la superficie son antieconómicos. Por el contrario, las grandes vetas, los buenos criaderos, se encuentran en las profundidades. Algunos pozos perforados hasta los 200 metros han permitido comprobar que la intensidad y concentración del valor aumenta en relación con la profundidad.

Para ubicarnos entonces en el esfuerzo que deberá realizarse a fin de obtener una buena producción e industrialización, debemos analizar previamente el método más aceptable hasta el presente, que es de la cianuración. Este método consiste en tratar el mineral, previamente reducido a polvo junto con la roca en que está contenido, con cianuros metálicos, especialmente con cianuro de sodio, que actúa como solubilizador del oro y de la plata. Se continúa después con otro proceso a base de polvo de cinc, que también separa los dos metales preciosos.

Fácil resulta, pues, imaginar la enorme cantidad de equipos que se necesitan para perforar pozos y remover minerales que, en un solo yacimiento, se extienden a lo largo de 15 kilómetros, con un ancho de un kilómetro y una profundidad de 200 metros. Luego hay que repetir los cateos en los otros yacimientos y, después de haber comprobado si el rendimiento del mineral permite una comercialización e industrialización que satisfaga el levantamiento de una planta, habrá que analizar la conveniencia o no de explotar esos yacimientos.

Lo importante es que, en conjunto, hay que remover una extensión de 360 kilómetros cua-

drados. Para lo que se necesitan gran cantidad de excavadoras, moledoras, transportadoras «sin fin» y la gran planta quimicoindustrializada además de las correspondientes plantas de fundición.

Debe preocuparnos en ese sentido el poder de elaboración de la planta de concentración y beneficio. La media sanción del Senado nos habla de una planta de concentración y beneficio con capacidad mínima de 250 toneladas diarias de mineral. De acuerdo con el porcentaje medio establecido en cuanto a la concentración de oro por tonelada de mineral —algunos dicen que el porcentaje es de 10 gramos por tonelada aunque nosotros entendemos que es de 12, pero eso no hace a la cuestión—, con un equipo que permite manipular 250 toneladas diarias de mineral sólo podrá obtenerse 3 kilos de oro por día. Esa producción no justifica la creación de un organismo de esta naturaleza, y los esfuerzos resultarán a todas luces estériles.

En definitiva, desde el punto de vista industrial será menester, si deseamos emprender esta obra con la intensidad, seriedad y cariño que ella requiere, otorgarle a Aguas de Dionisio nuestro más amplio apoyo en materia de capitales, equipos y personal técnico patriota y eficiente, ya que hacer lo contrario, significará —lo sostengo, y el tiempo nos dará la razón si sale esta empresa con el capital proyectado— la ruina de la entidad. En la discusión en particular ofreceremos otra alternativa.

Otro de los inconvenientes principales que encontramos en este proyecto tiene relación con las finanzas. En materia de empréstitos sobre el crédito de la Nación, todos los diputados debemos ser excesivamente exigentes, ya que tal función debe corresponder única y exclusivamente al Honorable Congreso. Yo no puedo aceptar el artículo 16, que autoriza al YMAD a solicitar préstamos bancarios a entidades oficiales, mixtas o privadas y recurrir a cualquiera otra forma de crédito o financiación.

El artículo 16 es, a mi juicio, contrario al espíritu y a la letra del artículo 67, inciso 3º de la Constitución Nacional, que dispone claramente que corresponde al Congreso de la Nación contraer empréstitos en dinero y sobre el crédito de la Nación. En la discusión en particular vamos a presentar dos métodos que aseguren el buen funcionamiento de las finanzas del YMAD y el religioso respeto de la letra y del espíritu de nuestra Constitución.

El cuarto y último aspecto que criticamos se refiere a la faz comercial. Aquí señalamos con mayor insistencia graves fallas de diverso orden. En primer término, corresponde considerar que el Estado nacional entregará al YMAD, según el proyecto, la totalidad de su capital y el crédito suplementario —fíjense bien— sin antes haberse elaborado un plan estimativo de las necesidades técnicas, económicas, financieras y

comerciales. La más mínima empresa privada requiere, antes de confirmar a su directorio, un plan previo de lo que va a realizar: qué equipo se necesita, quién lo va a manejar, con qué condiciones; es decir, una estimación conjunta del resultado financiero, económico y productivo.

Lo procedente sería entregar previamente una parte del capital; exigir al directorio un plan general y comercial de la misma ley. Luego, aprobado el plan, el Poder Ejecutivo constituiría total y definitivamente la empresa.

¿Qué garantías existen si así no se procede? ¿Qué garantías tenemos de que no se insuma el crédito total, que se entrega en exploraciones de orden económico y financiero, en investigaciones de si la empresa va a andar bien o no? ¿Qué se consigue si YMAD elabora su plan económico-financiero, año tras año, y no producimos nada y, en cambio, perdemos el capital y el crédito?

Si grave puede ser su comienzo mucho más grave será su fin. En efecto, ¿quién controla a YMAD en sus manejos posteriores de producción de oro? ¿Quién establece los valores? ¿Qué disposición regula la vigilancia de la concurrencia del oro en el mercado libre? ¿Con quién se negociará el oro?

Hemos visto que el Poder Ejecutivo de la dictadura tuvo que tomar medidas de contralor, incautarse, apoderarse de empresas para evitar esos movimientos que nosotros prevemos determinará esta ley. Por eso cabe preguntarse: ¿en qué mercado se ha de colocar el oro de YMAD? ¿En el mercado nacional, en el negro, en el internacional? ¿En el área del dólar, de la libra o irá a parar detrás de la cortina de hierro? ¿Quién regula las cantidades permisibles de exportación? ¿Qué recaudos se toman en esta ley para impedir que las negociaciones al margen del Estado y de su órgano especializado, que es el Banco Central, modifiquen la estructura del régimen bancario con la afluencia del oro? ¿Qué garantías nos da la ley para evitar que la concurrencia de oro en el mercado interno cree el caos y la caída de nuestro signo monetario? ¿Quién nos garantiza que alguien, con fines políticos —sin referirnos al presente—, que tomara en sus manos la dirección de YMAD, considerando que es algo sin ninguna importancia, pudiera, inclusive, por la naturaleza de lo que puede extraer, apoderarse del oro con el cual podrían comprarse, como hizo la dictadura, empresas, radios, televisión e incluso algunos profesionales indignos de la política, que todos despreciamos, al servicio del capitalismo imperialista internacional?

La naturaleza misma de los productos que se han de obtener, de poco volumen, extraordinario valor y fácil movilidad, ¿no nos exige acaso tomar severas precauciones para impedir que

un organismo tan importante y delicado pudiera caer no sólo en manos políticas, sino en las de gente que quiera enriquecerse e inclusive crear el caos y la anarquía en el país? ¿No será, pues, necesario extremar nuestro celo? ¿No es acaso el oro respaldo de nuestra moneda? ¿No lo es para los países que se jactan de su poderío económico, industrial, agrícola y ganadero, como Estados Unidos, que se preocupa por tener sus arcas llenas de oro, mientras nosotros decimos que no nos sirve, haciendo que cada dólar que sale del país esté respaldado por oro depositado en los Estados Unidos? Eso mismo es lo que ocurrió con Francia, con Inglaterra y con todos los países que tienen una moneda respetable y fuerte. ¡Y nosotros queremos para nuestro país una moneda respetable y fuerte, con la necesaria garantía!

Es menester vigilar el sistema de control, manejo y negociación del oro? ¿Quién tiene en nuestro país derecho a manejar a su antojo el patrimonio nacional? ¡Nadie, absolutamente nadie! Entonces pregunto, no con sentido de crítica, ni con suspicacia, quién fue el que aconsejó en la comisión del Senado eliminar totalmente del decreto 270 el artículo 17, que disponía: «Toda la producción de oro que se obtenga en la explotación minera deberá ser entregada al Banco Central de la República Argentina, el que pagará por ella el equivalente en pesos moneda nacional, conforme a su cotización en el mercado nacional en el día de la entrega. Los demás productos que se extraigan de las minas serán vendidos directamente por la institución que se crea por este decreto ley, a cuyo fin fijará los precios y los recursos financieros que fueran necesarios.»

Yo quiero creer que este artículo pasó desapercibido a la comisión, y que no tuvo otro propósito, que dejar en manos del directorio la resolución acerca de cómo se dispondría del oro.

Por esta y por otras razones que luego analizaremos, nos oponemos a estos aspectos comerciales. Nosotros queremos llevar a cabo los objetivos fundamentales que ha de tener este organismo, o sea ayudar a Catamarca y a la Universidad Nacional de Tucumán. Pero también queremos que, sin perjudicar a nadie y tal cual propongo en mi proyecto, podamos con el sistema que luego demostraré en la discusión en particular, que al mismo tiempo recibiendo su dinero Catamarca y recibiendo su dinero la Universidad Nacional de Tucumán y también todas las universidades del país, con el simple procedimiento de la regulación del uso del oro por el Banco Central, nosotros podamos también ayudar a YPF, a nuestra industria privada por la obtención de divisas extranjeras y afianzar nuestras reservas de oro, elevar el valor de nuestra moneda y asegurar el desarrollo armónico de la economía de nuestro país.

Señor presidente y señores diputados: es por esas cuatro causas fundamentales que nuestra bancada insiste en la necesidad de pasar a estudio, por lo menos, con esa última instancia que me daba el señor diputado Zubiaurre, de entrar a analizar con todo respeto y en profundidad, sin ninguna posición electoral, en un breve cuarto intermedio, la posibilidad de formular un despacho que elimine todos los inconvenientes de esta ley, para encontrar así la forma de solucionar este complejo problema dictando una ley seria y responsable, que sea la expresión patriótica de esta Honorable Cámara.

Ruego a la Honorable Cámara que atienda este pedido que, repito, no es político sino sinceramente patriótico. Si así se hiciera, la patria quedará agradecida. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Correa. — Por lo avanzado de la hora, no voy a hacer uso de la palabra. En la discusión en particular, haré las observaciones que considere pertinentes.

Sr. Presidente (Zanni). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Santoni. — Quiero, simplemente, hacer algunas aclaraciones, haciendo referencia a algunas cifras que el diputado que habla ha podido recoger de algunos miembros de la Dirección Nacional de Minería.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Federico F. Monjardín.

Sr. Santoni. — Sin dejar de reconocer lo fabuloso de las posibilidades que ofrece la mina de Farallón Negro, quiero simplemente llamar a la reflexión a los señores diputados y a la ciudadanía en general, sobre determinados aspectos de esta cuestión.

El ente que se crea por la ley, que estará integrado por los representantes de la provincia de Catamarca, de la Universidad Nacional de Tucumán y del gobierno nacional, deberá realizar una labor ímproba, de grandes realizaciones, que involucra incluso el sacrificio personal, para poder llegar a concretar, en una realización plausible, de acuerdo a lo que todos esperamos, la hermosa posibilidad que ofrece la mina de Farallón Negro.

Según algunos estudios practicados, previo a la etapa de la plena explotación del yacimiento, se necesitará realizar un plan de labor de dieciocho meses de exploración para lograr aumentar la reserva cubicada que actualmente se estima en ciento cincuenta mil toneladas de mineral, hasta llegar a las quinientas mil toneladas. De manera que se justifique la inversión enorme que significará la instalación de una planta que posibilite la elaboración de trescientas tone-

ladas diarias de mineral. Esa planta, de acuerdo a estos cálculos, necesitará una inversión prevista de setecientos mil dólares, más unos setenta millones de pesos moneda nacional, y ese plan produciría unas 8.200 toneladas de manganeso metálico y 700 kilogramos de oro anualmente.

Quiero también significar que las inversiones realizadas por la Universidad Nacional de Tucumán hasta el presente ascienden a 8 millones de pesos y que ya se han acordado otros 10 millones para la etapa de dieciocho meses de exploración que he mencionado. Con esto se demuestra que no podemos dejar volar la fantasía en torno a las posibilidades de las inmensas reservas que pueda tener el yacimiento. Primero y principalmente debemos ubicar esas reservas que van a ser sometidas a la explotación. Eso significa un despliegue de grandes trabajos y sacrificios y la consiguiente inversión de grandes sumas de dinero.

Para terminar, dejo establecido que con la manera de integrar el directorio del ente, queda completamente a salvo el contralor, por cuanto las partes interesadas van a estar representadas y van a estar encargadas de la administración y el contralor de gastos, inversiones e ingresos que se produzcan como consecuencia de la explotación.

Por lo tanto, estimo que no cabe aceptar ninguna de las modificaciones que acaba de proponer el señor diputado Verdaguer.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Es una pena que no se acepte el temperamento propuesto, aunque sólo fuera de un breve cuarto intermedio para tratar la cuestión. Tendremos, pues, que señalar en la discusión en particular las lagunas y las graves fallas a que hemos aludido.

Queremos que quede en el ánimo de todos los señores diputados que nosotros anhelamos que Farallón Negro, Agua de Dionisio, sea una institución al servicio del país, y que nunca —no me refiero a la actualidad— pueda convertirse en lo que algunas empresas consideran vital para ellas, en una caja secreta, en una caja negra al servicio de los intereses contrarios al país.

En particular señalaremos cada uno de los aspectos.

Por ello reitero mi pedido, haciendo mía la moción del señor diputado Zubiaurre de que pasemos a cuarto intermedio para encontrar los puntos de coincidencia que den al país la ley que espera.

Sr. Peralta. — En nombre del bloque radical intransigente reitero nuestra oposición a la moción del señor diputado Verdaguer, por cuanto tengo entendido que hace un momento fue rechazada.

Sr. Zubiaurre. — Quiero dejar constancia de que no se votó; yo retiré la moción.

Sr. Verdaguer. — Como el señor diputado anticipa que va a haber oposición, nada conseguiremos con insistir en la moción. Por lo tanto, la retiro.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar en general el despacho de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda.

—Resulta afirmativa de 89 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración en particular el artículo 1º.

Sr. Peralta. — Hago indicación de que artículo que no se observe se dé por aprobado.

Sr. Presidente (Monjardín). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se procederá en la forma indicada por el señor diputado por Catamarca.

—Se aprueban los artículos 1º, 2º y 3º.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 4º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Este artículo habla de una zona de 343 kilómetros, pero en las reservas existentes en Catamarca ha quedado establecido que las pertenencias cubren un territorio de 360 kilómetros cuadrados. Dada la importancia que esta diferencia tiene, en una zona donde el simple Farallón Negro es de 15 kilómetros, cabe formular ciertas preguntas: ¿qué motivos ha habido para restar esos kilómetros cuadrados de diferencia? ¿Ha sido con el objeto de facilitar la demarcación, según he leído en alguna publicación? ¿Quién aconsejó a la comisión del Senado reducir esa zona?

Este simple detalle origina, a mi juicio, la necesidad de ordenar una investigación al respecto.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — La delimitación de la zona minera que establece el artículo 4º del proyecto ha sido tomada de la del decreto de reserva nacional número 8.635/53, y no del artículo 1º del decreto 270, porque se ha considerado que la primera es más exacta que la segunda.

Sr. Verdaguer. — Pero también es más chica. Debe tenerse en cuenta que si se dejan de lado esos kilómetros, esa superficie no entrará en la reserva que establece la ley e irá a manos privadas. Creo que ése no es el deseo de la provincia de Catamarca.

Sr. Prece. — ¿Qué es lo que propone en concreto el señor diputado?

Sr. Verdaguer. — Propongo que se agreguen todas las pertenencias técnicas establecidas por el Código de Minería.

No veo qué inconveniente puede haber de que se establezca una mayor amplitud frente a la posibilidad de que 16 kilómetros que vamos a dejar de reivindicar para YMAD puedan ir a manos privadas.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Santoni. — La comisión no acepta la indicación del señor diputado por la Capital, porque la superficie que figura en el artículo 4º ha sido determinada con la intervención de las partes interesadas y fijada con sentido eminentemente técnico.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 4º del despacho.

— Resulta afirmativa de 75 votos; votan 96 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 5º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — El decreto 270 establece que el usufructo tampoco puede ser eliminado. Por lo tanto, nosotros queremos que no solamente el derecho de propiedad, sino también el derecho de usufructo quede resguardado en el artículo 5º. A ese fin, hago indicación de que se adopte el texto de mi proyecto.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — El artículo 5º del proyecto en consideración substituye el artículo 4º del decreto 270, que dice: «Yacimientos Generales de la Universidad Nacional de Tucumán no podrá transferir a terceros la propiedad ni el usufructo de todos los productos de las minas de la explotación que concede la provincia de Catamarca».

Lo que se ha querido, al redactar el artículo 5º en esta forma, es evitar que mediante el contrato de avío, o por cualquier otro procedimiento similar, la mina en sí o sus productos vayan a parar a manos de capitales privados, particularmente extranjeros, eventualidad a la que siempre se ha opuesto la provincia de Catamarca.

Por estas razones solicito que el artículo 5º quede como está redactado.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — La Comisión de Presupuesto se opone a la modificación proyectada.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Santoni. — Por las razones expuestas por el señor diputado por Catamarca, la Comisión de Industria se opone a cualquier modificación al artículo 5º.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Tessio. — En la discusión en general me referí a las derivaciones que podía tener este

asunto, de gran trascendencia para los argentinos: la intromisión de una compañía que está en acecho.

Los señores diputados saben que una compañía del imperialismo extranjero está o ha estado en alguna forma en todo el proceso de desinteligencias habidas entre la Universidad Nacional de Tucumán y la provincia de Catamarca.

Pero ahonda más mi inquietud la circunstancia de que al discutirse el artículo 5º, se dijo en el Honorable Senado: «El artículo 5º establece como condición para el ente que no podrá transferir por ningún concepto los derechos que por la presente ley se le otorgan, ni los que derivan de la concesión minera a que se refiere el artículo 4º, total o parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni a empresas mixtas nacionales o provinciales.» Pero, a renglón seguido, dijo el senador García: «Sin embargo, como no todo puede llevarse a cabo directamente, quizá pueda convenir, desde el punto de vista económico y técnico, que no sea la misma entidad la que realice tareas accesorias, que en determinado momento pueden resultar más costosas y menos eficientes que las que pudieran brindar empresas nacionales o extranjeras, como simple locación de servicios o de obra».

Este es el problema. La locación de servicios o de obra, en esta materia sobre todo, constituye la forma de penetración por parte de las empresas extranjeras.

Creo que si se quiere mantener este artículo redactado en la forma como expresara el señor diputado por Tucumán, habría que introducirle un agregado impidiendo que sean empresas extranjeras las que vayan a servir este tipo de contrato de locación de obra o de servicios.

Este ente autárquico que tiene la posibilidad económica, porque el Estado nacional lo apoya en forma decisiva con el aporte que hace y con el crédito del Banco Industrial, puede y debe realizar directamente las obras necesarias para obtener el provecho que nosotros deseamos, pero de ningún modo debe consentirse que sea una empresa extranjera, que ya he citado, que tiene evidente interés en esa mina y que si no puede conseguir la concesión va a tratar de lograr de algún modo el contrato de locación de obra y de servicios.

Ese es el problema. Por eso decía yo que era menester cerrar las puertas al imperialismo. Esta es una forma patriótica de realizar un empeño argentino, y yo pido a los señores diputados que se sensibilicen ante este problema de penetración extranjera, que en estos días ha tomado verdadero auge en el país.

Sr. Uzal. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Tessio. — Sí, señor diputado.

Sr. Uzal. — Sin entrar en las suspicacias, yo le diría al señor diputado que la letra de este artículo es, a mi juicio, suficientemente clara. En él se establece que no se podrá transferir por ningún concepto los derechos que se otorgan por la ley ni los que se derivan de la concesión minera a que se refiere el artículo cuarto, «total ni parcialmente, a personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, ni empresas mixtas, nacionales o provinciales».

De manera que, sin entrar en suspicacias ni pensar en la congruencia de una línea política servida a lo largo de toda una vida, o no servida, según quienes sean, yo digo que con la disposición prevista está bien resguardada la soberanía del país.

Sr. Tessio. — Yo no sé si el señor diputado cree que son suficientes los ejemplos de una vida puesta al servicio de las cosas nacionales. Yo prefiero que en materia de legislación se determine con claridad...

Sr. Uzal. — Está bien especificado, señor diputado.

Sr. Tessio. — No está tan claro, cuando el miembro informante de la comisión respectiva del Senado...

Sr. Carrera. — Eso es otra cosa.

Sr. Tessio. — ...dijo expresamente que pueden concederse locaciones de obras y de servicios a empresas extranjeras.

Sr. Uzal. — ¿Eso qué tiene que ver?

Sr. Tessio. — Ese es el procedimiento de la penetración imperialista.

Sr. Uzal. — En la forma como está previsto en la ley, no, señor diputado.

Sr. Tessio. — Cuando no se puede conseguir lo más, se trata de conseguir lo menos. Esta es la forma cómo se introduce el imperialismo en esta materia, como en otras materias que va a tratar el Congreso de la Nación.

Nosotros pretendemos que en esta magnífica expresión de la riqueza minera del país se cercenen las posibilidades de locación de obras y de servicios a empresas extranjeras. Este es mi punto de vista, y no sé si correrá la misma suerte que la proposición del señor diputado Verdaguer. Sin embargo, creo que puede cerrarse de este modo la brecha existente.

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Qué propone el señor diputado por Santa Fe?

Sr. Tessio. — Yo propongo que se establezca que tampoco puede contratarse con empresas extranjeras la locación de obras o de servicios para la explotación de la mina.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pozzio. — Tengo sobre mi banca un trabajo publicado en la revista «La Ley», con fecha 9 de mayo de 1958, que deben haber recibido también los señores diputados, donde con cla-

ridad y precisión se establece el verdadero concepto de una concesión minera.

Por las explicaciones dadas por el señor miembro informante de la Comisión en cuanto al sentido de este artículo 5º es decir, que el término concesión va expresando todo aquello que se refiere a la determinación del Código de Minería, que viene como accesorio a este concepto de la concesión, no sólo se descarta la posibilidad de todo aquello que pueda ser accesorio en cuanto al avío o al usufructo, sino también está dentro de la prohibición que se establece en el artículo. Creo que ese es el sentido de la comisión, de acuerdo con las expresiones vertidas y así debe tenerse como interpretación del artículo.

En tal sentido voy a propiciar y sostener el artículo.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Domingorena. — Me doy por satisfecho con las palabras del señor diputado Pozzio.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Correa. — Ratifico lo afirmado por el señor diputado Pozzio. El artículo 4º del decreto ley 270 establecía que no podía transferirse a terceros la propiedad y usufructo; en cambio el artículo 5º del despacho habla en general de derechos, término más amplio que involucra a esos dos tipos de derecho real.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 5º del despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa de 79 votos, votan 96 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 6º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — El artículo 6º establece la forma en que se va a constituir el directorio. Habla de un directorio integrado por cuatro vocales, dos por la provincia de Catamarca, dos por la Universidad Nacional de Tucumán y un presidente designado por el Poder Ejecutivo de la Nación, y establece que el quórum será de tres miembros.

Quiero señalar a la Honorable Cámara la conveniencia de que si bien puede aceptarse el quórum de tres miembros, ello debe ser siempre que estén representados los tres organismos que entran a constituir esa institución: el Poder Ejecutivo nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán.

Es por eso que, si la comisión acepta el criterio de que en el quórum de tres estén representados los tres organismos a que me he referido, presentaré un artículo relacionado con este aspecto. Por lo tanto, me permito solicitar de la comisión que nos diga si acepta en principio mi proposición.

Sr. Prece. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Kronhaus. — Señor presidente: además de la modificación que ha sugerido el señor diputado Verdaguer, voy a proponer otra con respecto a este artículo. El segundo párrafo del artículo 6º dice que los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y serán reelegibles e inamovibles, sin perjuicio de remoción por haber caído en algunas de las inhabilidades establecidas en el artículo 9º, o por inconducta, negligencia en el desempeño de su cargo o mala administración. Y a continuación establece el proceso obligatorio para poder sancionar a esos miembros.

Por su parte, el artículo 7º, que se relaciona con este mismo aspecto, establece que si se denunciare a tres o más de los miembros del directorio como incursos en algunas de las causas previstas en el artículo 6º, el Poder Ejecutivo de la Nación podrá disponer la intervención del directorio, y previa confirmación de la denuncia, observando todas las garantías de la ley, el interventor declarará la caducidad en sus funciones de los afectados.

Además, el último párrafo del artículo 9º establece que los miembros del directorio que con posterioridad a su nombramiento cayeren en algunos de los impedimentos mencionados en los tres incisos del mismo artículo, cesarán en sus funciones y serán reemplazados de inmediato.

Es decir, que no se establece la verdadera garantía de inamovilidad, ya que existen múltiples causales que pueden determinar la cesantía de los miembros del directorio. A los efectos de evitar esa incongruencia y dejar como causas de remoción las que establece la ley, propongo a la comisión modificar la segunda parte del artículo 6º suprimiendo las palabras «e inamovibles, sin perjuicio de remoción», y poner después de las palabras «serán reelegibles» una cláusula al siguiente tenor: «Podrán ser removidos únicamente por haber caído...», y si que el artículo.

Vale decir, que este párrafo del artículo 6º quedaría redactado de la siguiente manera: «Los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y serán reelegibles. Podrán ser removidos únicamente por haber caído en algunas de las inhabilidades...» Me parece que gramatical y jurídicamente la redacción es más correcta.

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Prece. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Mercado. — Dada la gran importancia económica que podría tener la nueva empresa, el preponderante papel de la Nación en el orga-

nismo y el régimen de control, un tanto deficiente, establecido, sugeriré un agregado al final del primer párrafo. A semejanza de lo que se hace con otras empresas del Estado, convendría, en resguardo de los intereses de la Nación y para darle al Parlamento la participación que legítimamente debe tener en organismos de la jerarquía del que se va a crear, y así lo propongo, que el presidente del directorio sea designado por el Poder Ejecutivo de la Nación con acuerdo del Senado.

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Prece. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 6º del despacho.

—Resulta afirmativa de 74 votos; votan 96 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 7º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 8º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — En reemplazo de ese artículo 8º, propongo el siguiente: «Para poder ser designado miembro del directorio se requerirá ser ciudadano argentino mayor de treinta años de edad o tener quince años de ciudadanía en ejercicio en caso de ser naturalizado, y tener especial versación en el aspecto técnicoeconómico de la explotación minera. Además, en el acta que se labre con motivo de la incorporación de los miembros del directorio, el gerente o superintendente, deberá dejarse expresa constancia de que éstos asumen su responsabilidad personal y solidaria por todo acto llevado a cabo con su consentimiento y que sean contrarios a los intereses del organismo en beneficio propio o de terceros o que contravengan esta ley, su reglamentación y reglamentaciones internas, y, en general, por todo acto que no se ajuste a esta ley. En este mismo acto deberán efectuar declaración jurada de su patrimonio.»

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Santoni. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 8º del despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa de 75 votos; votan 95 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 9º.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Aunque sé que, incluso, posiblemente en los aspectos de orden comercial, que son gravísimos, tampoco la comisión va a

aceptar nuestros razonamientos, voy a presentar, de todas maneras, nuestras proposiciones, para que quede constancia ante la historia de que se acepten aquí, a libro cerrado, venidas de algún otro lado, porque de ninguna manera nosotros podemos admitir que ninguna de las proposiciones que estamos formulando en este momento...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monjardín). — La Presidencia entiende que las palabras que acaba de pronunciar el señor diputado por la Capital no pueden ser el fiel reflejo de su pensamiento. Le ruego, entonces, al señor diputado por la Capital, que tenga a bien retirar esos términos.

Sr. Verdaguer. — Eliminaremos la palabra objetada.

Pero es lamentable que frente a sugerencias de orden patriótico que se realizan aquí esta tarde, es evidente que no se quiere contrariar los pensamientos del Poder Ejecutivo. Es evidente que en esta situación alguien quiere transformar la institución YMAD en la caja secreta de los fondos negros del Poder Ejecutivo. Lo denuncié concretamente como ...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monjardín). — Al señor diputado Verdaguer le consta, como a toda la Cámara, el profundo respeto que el que habla tiene para la expresión de todos los señores diputados. Vuelvo a reiterar que tengo la certidumbre, porque conozco al señor diputado Verdaguer, de que en este instante acaba de manifestar cosas que no piensa, empleando palabras que han ido más allá de su pensamiento. Le ruego, con el respeto personal y político que le debo, que retire las expresiones antiparlamentarias que acaba de pronunciar.

Sr. Verdaguer. — Respondiendo a la magnífica forma en que el señor presidente dirige los debates, y en respeto al cuerpo, voy a retirar la palabra objetada que puede afectar a los señores diputados. Las demás no las retiro de ninguna manera...

Sr. Domingorena. — Pruebe entonces sus afirmaciones.

Sr. Verdaguer. — ...y no lo hago porque pareciera que en lugar de estar en el Parlamento, estuviéramos en el Luna Park, por los silbidos e interrupciones con que se acosa a los legisladores cuando hablan.

Sr. Presidente (Monjardín). — Ruego al señor diputado que se serene. Tengo la seguridad de que cuando el señor diputado lea las palabras que ha pronunciado no las reconocerá como suyas. Ha hecho imputaciones gravísimas. Ruego nuevamente al señor diputado que retire esos términos.

Sr. Verdaguer. — Entregar el petróleo y entregar DINIE y entregar CADE serían actitudes que el pueblo castigará...

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Monjardín). — Con todo pesar, la Presidencia se ve en la obligación de llamar al orden al señor diputado.

Sr. Verdaguer. — Es un honor que se me llame al orden por esta causa.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — El artículo 99 se refiere a las personas...

Sr. Beneventano. — Señor presidente: si el señor diputado por la Capital no retira sus expresiones, tiene que probar todo lo que ha afirmado.

Sr. Presidente (Monjardín). — La Presidencia ha considerado terminada la incidencia; por eso concedió la palabra al señor diputado por Catamarca.

Sr. Rodríguez Díaz. — No puede darse por terminada la incidencia en esta forma.

Sr. Presidente (Monjardín). — La Presidencia ha cumplido con su deber y solicita de la Honorable Cámara que cumpla el suyo. Ha invitado reiteradamente al señor diputado por la Capital a retirar sus palabras...

Sr. García Flores. — Pero no las ha retirado.

Sr. Pozzio. — La Presidencia ha llamado al orden al señor diputado Verdaguer.

Sr. Rosenkrantz. — El señor presidente ha dado por terminada la incidencia porque no son serias las palabras del señor diputado por la Capital. Es la solución correcta en este asunto.

Sr. Verdaguer. — Pido la palabra.

Sr. Montes. — ¿Para qué? ¿Para hacer nuevas afirmaciones que nunca podrá probar?

Sr. Presidente (Monjardín). — Ruego a los señores diputados...

—Hablan a la vez e interrumpen al señor presidente varios señores diputados. El señor presidente se levanta del sitial, y ocupa nuevamente la Presidencia después de breves instantes.

Sr. Presidente (Monjardín). — El diputado que desempeña la Presidencia de la Honorable Cámara respeta a todos los señores diputados. Estaba hablando, y lo han interrumpido en sus palabras numerosos señores diputados. Entiendo que eso constituye un olvido de normas de cortesía, que personalmente no tolero. Por eso me he levantado del sitial.

He llamado cordialmente a la serenidad al señor diputado Verdaguer; pero no obstante mi reiterado, cortés y cordial pedido, el señor diputado por la Capital no accedió a las indicaciones que le fueron dirigidas. Con el pesar consi-

guiente, haciéndome mucha violencia moral —desearía no haber tenido que hacerlo— me he visto obligado a llamarlo al orden.

Si la Honorable Cámara no resolviere dar otro trámite a esta incidencia, en el ejercicio del deber que me incumbe dispondré que se testen del acta las expresiones vertidas cuando sean antiparlamentarias y violatorias del artículo 153 del reglamento.

Con esto ha quedado terminado el incidente, y por tanto no corresponde reanudarlo.

12

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Cortés. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (Monjardín). — Previamente al señor diputado han solicitado el uso de la palabra los señores diputados Peralta, Juárez Peñalva y Pozzio.

Sr. Cortés. — Yo solicito la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Peralta. — No tengo inconveniente en ceder el uso de la palabra al señor diputado por Mendoza.

Sr. Presidente (Monjardín). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Cortés. — Creo que en esta Cámara sólo podemos legislar en un ambiente de respeto mutuo, que no sólo debe ser para nosotros, sino para exaltar la propia Cámara de Diputados de la Nación, uno de los grandes pilares de la democracia.

En la medida en que nosotros perdemos el tino o actuemos sin la comprensión de lo que significa este recinto dentro del fenómeno de la democracia, haremos unos y otros el tremendo daño de estar desatando a las fuerzas totalitarias, que a veces llegan muy cerca de este Congreso deseando ver cómo cae el sistema que debe regir en el país de acuerdo con la Constitución.

Lo menos que cabe a un diputado cuando trasciende los límites de lo parlamentario, e insiste en un vocabulario ajeno al que debe usarse en este recinto, es retirar todas sus palabras. Así lo expresa el reglamento; y si sólo retira algunas y deja tal vez las más graves, no podríamos seguir legislando como si nada hubiera ocurrido. En esta emergencia lo menos que debemos hacer es plantear una cuestión de privilegio por las palabras vertidas por el señor diputado Verdaguer, para que pasen sus expresiones a la comisión correspondiente, la que juzgará si es que ha llegado el momento de aplicar el artículo constitucional pertinente.

Nosotros establecemos con nuestro amplio sentido de la libertad de exposición, un gran respeto a lo que significan las normas parla-

mentarias y la esencia misma de nuestra vida democrática.

Pedimos que se nos trate respetuosamente, porque lo contrario no significa otra cosa que la expresión totalitaria, que agrede a quien otorga la más amplia libertad.

Por eso insisto en que los términos antiparlamentarios vertidos en el recinto pasen a la comisión respectiva para que sean juzgados.

Sr. Presidente (Monjardín). — Corresponde que la Cámara manifieste con su voto si la cuestión de privilegio que acaba de plantear el señor diputado por Mendoza tiene carácter preferente. De resolver lo contrario, pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Se va a votar.

—Resulta negativa de 72 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — Pasará la cuestión planteada, a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

13

YACIMIENTOS MINERALES DE FARALLON NEGRO

Sr. Presidente (Monjardín). — Continúa la consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria en el proyecto de ley, en revisión, sobre yacimientos minerales de Farallón Negro (1).

Está en consideración el artículo 9º.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — El artículo 9º del proyecto se refiere a los casos de inhabilidad para formar parte del directorio. Así dice que «no podrán ser miembros del directorio: a) los que ejerzan cualquiera otra función o empleo en el orden nacional, provincial o municipal, con excepción de las de la docencia; b) los que se hallen en estado de quiebra o concurso civil, y los que hayan sido condenados por delitos comunes; c) los que tengan o hayan tenido, dentro de los últimos cinco años anteriores a su designación, relaciones de dependencia o de intereses con la exploración, explotación, industrialización y comercialización privada de minerales de oro, plata y manganeso, excepto en sociedades cooperativas o de economía mixta, integradas exclusivamente por el Estado y usuarios».

Me voy a referir al pensamiento del señor diputado Verdaguer, y lo haré con todo respeto. El señor diputado Verdaguer ha presentado un proyecto de ley siguiendo un procedimiento poco común: tomó como base el proyecto del

(1) Véase el despacho en la página 5488.

Poder Ejecutivo y se permitió intercalar todo cuanto le vino a la mente, en ese proyecto que critica en forma tan severa.

Si yo tuviera que definirme entre el trabajo realizado a medianoche por el señor diputado Verdaguer y el madurado proyecto del Poder Ejecutivo, en cuya preparación intervinieron hombres de la Universidad Nacional de Tucumán, de la provincia de Catamarca y técnicos de la Secretaría de Industria y Minería, que cuenta además con el despacho de las comisiones de Industria, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, forzosamente tendría que inclinarme por el proyecto del Poder Ejecutivo.

Ya he expresado quiénes no pueden ser miembros del directorio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 99. Al respecto, el señor diputado Verdaguer, en esas incursiones que hizo por el proyecto del Poder Ejecutivo, intercalando lo que le vino a la mente, propone, en un artículo 10, que no pueden formar parte del directorio los que tengan o hayan tenido relación de dependencia con intereses directos o indirectos, y con personas o empresas del país o del extranjero que se dediquen a la explotación, explotación, industrialización, comercio o transporte de minerales o cualquier otra actividad afín con la minería.

Sr. Carrera. — Lo sacará del cementerio.

Sr. Peralta. — Quiere decir, que si un ingeniero se asocia con otra persona en la compra de un camión para el transporte de minerales de cualquier categoría, ese técnico ya no podrá ingresar en el directorio. Y por eso yo digo que el único que está interfiriendo y...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Peralta. — ... es el diputado Verdaguer, quien no debe olvidar lo que significaría la caducidad de esta concesión y el fracaso del ente, en cuanto a que las compañías extranjeras tenga posibilidad de entrar a explotar nuestras riquezas... (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Monjardín). — Señor diputado por Catamarca: un agravio no se repara con otro agravio. La Presidencia ha solicitado al señor diputado por la Capital que retirara términos que él empleó. De la misma manera ruego al señor diputado que retire la expresión vertida.

Sr. Peralta. — Con mucho gusto la retiro, porque no está en mi ánimo agraviar a ningún colega.

Considero que debemos ubicarnos en el sentido que se ha querido dar a este artículo. Lo que se ha buscado es que los miembros que integran el directorio de esta empresa no estén vinculados a intereses de otras empresas particulares o extranjeras; pero no se ha llegado al extremo de imposibilitar que un técnico, que

tanta falta hace en nuestro país, venga a colaborar en esta gran tarea. Por eso, este inciso se ajusta a una gran verdad, al decir que no pueden formar parte del directorio los que tengan o hayan tenido, dentro de los cinco últimos años anteriores a su designación, relaciones de dependencia o de intereses con la exploración, explotación, industrialización y comercialización privada de minerales que explota el yacimiento minero, es decir oro, plata y manganeso.

Por las razones expuestas, voy a solicitar que se apruebe el artículo, tal cual está redactado. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Quiero expresar que, antes de proponer un artículo en reemplazo del que se discute, lo único que he hecho —aunque se trata de un asunto que ya pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales— es criticar, quizá con mucha severidad, una conducción política. En lo que hace a los fueros del Parlamento, la única palabra que yo entendía como que agravaba los fueros parlamentarios es la palabra que he retirado.

Sr. Rosenkrantz. — Es un asunto terminado, señor presidente.

Sr. Verdaguer. — Quiero darle a ella el sentido de que no he querido en forma alguna decir que los miembros del Parlamento argentino están cometiendo una traición en el asunto del petróleo. El asunto no ha tenido entrada todavía en la Cámara, y tampoco tenemos los contratos, y alrededor de él confío en el patriotismo de muchos señores diputados para que no permitan que se cumpla ese cometido.

Pasaré ahora a contestar amablemente, casi cariñosamente, las palabras del señor diputado por Catamarca.

Sr. Monte. — Hay cariños que matan. (*Risas.*)

Sr. Verdaguer. — El señor diputado se ha referido a mi persona, al calificar el proyecto que he presentado como el producto de un trabajo de trasnochada. Creo, señor presidente, que aunque tuviéramos que trabajar día y noche lo debemos hacer cuando se trata del interés del país. Lo único que yo impido con el inciso que he propuesto es la integración del directorio por un técnico extranjero. Lo único que hacemos es establecer que los técnicos extranjeros no deben ir a la dirección máxima ni a la conducción económica de la empresa; pero si esos técnicos hacen falta en los yacimientos, pueden ser utilizados sus servicios, sin integrar el directorio. De modo, señor presidente, que yo no pongo inconvenientes en que todos los extranjeros que quieran venir al país a trabajar se pongan a disposición del directorio argentino que manejará la empresa. Tan es así que en el mismo artículo décimo de mi proyecto establezco en el inciso d) con el propósito de que el directorio sea netamente argentino que no podrán ser miembros

del directorio los ciudadanos nativos que no hayan cumplido con sus obligaciones militares.

Sr. Rosenkrantz. — ¿Y si tiene un defecto físico? (Risas.)

Sr. Verdaguer. — No se ría el señor diputado. El que infringe las leyes militares no puede integrar una empresa de esa naturaleza.

Sr. Rosenkrantz. — ¿Y si es un hijo de madre viuda?

Sr. Verdaguer. — Yo he dicho es que no es apto si ha transgredido la ley militar. Por supuesto que si tiene un defecto físico o es hijo de madre viuda no ha transgredido la ley, ya que la misma lo exime.

Sr. Manes. — ¿Y si tiene pie plano? (Risas.)

Sr. Verdaguer. — Lo grave es el caso de los que tienen la mente plana al servicio del imperialismo. Eso es lo que me preocupa. No quiero que en el directorio haya ningún miembro con mente plana al servicio del imperialismo.

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Acepta la comisión la proposición del señor diputado por la Capital?

Sr. Prece. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 99 del despacho.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Con respecto al artículo 10, al que propondríamos reemplazar por un artículo que contemple minuciosamente todos los aspectos atinentes a las obligaciones del directorio, sólo me permitiré proponer previamente el reemplazo del inciso h), que se refiere a la relación entre el directorio y el Tribunal de Cuentas de la Nación.

Dicho inciso en la media ley establece entre las atribuciones del directorio la de «elevar al Tribunal de Cuentas de la Nación una rendición de cuentas consistente en un balance mensual de fondos y al finalizar cada ejercicio, un balance del activo y el pasivo y un estado general de ganancias y pérdidas».

Propongo en su reemplazo la siguiente redacción: «Elevar al Poder Ejecutivo para su aprobación por el Tribunal de Cuentas de la Nación, el plan de cuentas (no un simple análisis) y las bases para la formación de los balances (la ley no establece en qué forma se van a hacer los balances, cómo se van a realizar las reservas, ni determina ninguna disposición de orden contable administrativo) que debe confeccionar de conformidad con la presente ley a los efectos de facilitar en cualquier momento una adecuada determinación de la situación económico-financiera y patrimonial del organismo, así como también para el control de la producción y el control de sus costos. Elevará

además al Poder Ejecutivo y directamente al Tribunal de Cuentas con igual propósito, una rendición de cuentas consistente en un balance completo mensual de comprobación y saldos» y al finalizar cada ejercicio un balance del activo y del pasivo y un estado general de ganancias y pérdidas, inventario y memoria.

Entiendo que de esa manera se logrará una perfecta coordinación contable.

Si la comisión acepta, podríamos propiciar algunos otros agregados.

Sr. Prece. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Mercado. — El inciso a) del artículo 10 dispone, entre las facultades y atribuciones del directorio, la de realizar en los términos del artículo 19 el estudio, exploración, cateo, explotación y comercialización de todos los minerales existentes, etcétera. Creo que el inciso resultaría más claro si se intercalara la palabra «industrialización» entre los términos «explotación» y «comercialización». Entiendo que hay un proceso de industrialización, que es anterior a la comercialización.

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Acepta la comisión el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital?

Sr. Prece. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiaurre. — Señor presidente: declaro que no aspiro lograr con las palabras que voy a pronunciar que se modifique el criterio de la comisión, en el sentido de no aceptar ninguna clase de modificaciones.

El inciso k) determina que es facultad del directorio crear las reservas necesarias para ampliar la exploración y explotación de los yacimientos. Pregunto a la comisión si una facultad de esta naturaleza corresponde a una entidad sui generis, como se ha dicho aquí, o a un ente autárquico, como yo sostengo es el que crea por esta ley. Me parece que la facultad de crear reservas está ligada a la autonomía de los estados provinciales.

Como pienso que esta cláusula pudo haberse deslizado impensadamente, deseo saber de la comisión qué razones hay para mantenerlo o si habrá que suprimirlo.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — Los que hemos intervenido en la redacción de este proyecto, tanto de la Universidad de Tucumán como de la provincia de Catamarca, hemos tomado el inciso k) del decreto 270.

Las reservas previstas en este inciso es para ampliar la exploración y explotación de los yacimientos. Se han fijado así, por cuanto son indispensables en la primera etapa de la marcha del ente, porque en ese período es necesario

prever su desarrollo. Además, en este caso hay que tener en cuenta que se dictará el estatuto orgánico relativo a este ente.

Se ha buscado dar la mayor agilidad a esta empresa para que en ese aspecto actúe dentro de las normas administrativas, en lo posible como una empresa privada.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiaurre. — No me satisface la explicación dada por el señor miembro informante.

En virtud de otra disposición de esta misma ley, entiendo que las reservas únicamente pueden ser determinadas por el Estado provincial o nacional. Tengo en cuenta para ello el artículo 23 de este mismo proyecto que establece: «En tanto no se verifique la definitiva concesión de los yacimientos a favor de YMAD, el plazo de la reserva a que se refiere el decreto ley 17.346/57, deberá considerarse prorrogado». Vale decir que la reserva creada con anterioridad para un caso determinado por una ley o decreto ley, es anulada, concedida o prorrogada por otra ley.

Repito que me guía el propósito de dejar establecido los errores que contiene este proyecto de ley, a efectos de que si no hay otra manera de subsanarlos, nos aboquemos a su consideración en otra oportunidad.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Schweizer. — Es evidente que lo expuesto por el señor diputado plantea un interrogante que no puede quedar sin respuesta.

Estamos frente a lo que en doctrina se llama conflicto aparente de leyes. El artículo 23 dice: «En tanto no se verifique la definitiva concesión de los yacimientos a favor de YMAD, el plazo de la reserva a que se refiere el decreto ley 17.346/57, deberá considerarse prorrogado.» Empieza a operar la obligación del inciso k) del artículo 10 en el momento que deje de actuar la disposición pertinente del decreto citado.

Sr. Zubiaurre. — Para que no desarrolle toda su teoría, porque puede ser peligroso, quiero advertir que en el mensaje con que acompañó el proyecto, dice el Poder Ejecutivo: «No obstante ello, cumpla en señalar a vuestra honorabilidad una circunstancia que torna angustiosa la necesidad y urgencia invocadas: el próximo vencimiento de la reserva de la zona, establecido para el día 31 de diciembre próximo por el decreto ley 17.346/57.» Es evidente que las reservas sólo las pueden establecer leyes y no una resolución de una entidad que no tiene, naturalmente, imperio para ello.

Reitero que no alteraré el criterio impuesto a la discusión por el bloque de la mayoría. Debemos hacer las observaciones para salvar la responsabilidad que incumbe a los hombres de esta bancada.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pozzio. — Dije al comienzo de mi exposición que poníamos la mejor buena voluntad a efectos de que las aclaraciones o las interpretaciones sirvieran para el uso futuro de la ley.

El señor miembro informante hacía referencia al origen del artículo. Pero indudablemente, omitió decir cuál era ese artículo del decreto número 270/58.

Debemos partir de dos cosas ciertas que son éstas. En primer lugar, el inciso k) se refiere pura y exclusivamente a los yacimientos tratados en esta ley. En segundo lugar, también en el contexto de la ley se establece la obligatoriedad de dictar un reglamento para configurar todas aquellas situaciones que hagan al juego de esta ley.

Ese antecedente es el artículo 99, inciso j), del decreto 270, que sabemos creaba un ente distinto al que se está estructurando en esta ley, pues era la Universidad de Tucumán que a su vez creaba al ente. El citado inciso j) dice así: «Crear las reservas necesarias para ampliar la exploración y explotación de los yacimientos...» Es decir, la totalidad del inciso k) a que me estoy refiriendo. Pero a continuación agregaba: «...las que, previa conformidad del delegado de la provincia de Catamarca, deberán ser sometidas al consejo superior de la Universidad Nacional de Tucumán para su aprobación».

Es decir que, en cierto modo, daba una delegación, la que debería ser sometida a la decisión del órgano superintendente que en este caso era la Universidad de Tucumán.

Entiendo que ese ha sido el pensamiento de la comisión al traer este artículo. Se hace una delegación en ese directorio a los efectos de poder ampliar las áreas para la exploración de los yacimientos, pero si fuera necesario por el órgano competente habrá de requerir la autorización del caso a fin de que pueda encuadrarse dentro de las disposiciones legales. Creo que ese es el pensamiento de la comisión y en ese sentido debe entenderse el inciso.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Ante todo, quisiera pedir a la comisión que explicara por qué no se fijan normas precisas con respecto a la comercialización del oro.

Entre tanto, voy a proponer dos incisos más a este artículo. Uno de ellos dice así: «El directorio realizará la comercialización del oro y plata que extraiga e industrialice YMAD exclusivamente por intermedio del Banco Central de la República. A tal fin toda la producción de oro y plata deberá ser entregada al Banco Central, el que pagará por ella el equivalente en pesos moneda nacional conforme a su cotización en el mercado nacional en el día de su recepción. En

cuanto al manganeso y demás minerales pertenecientes a minas de primera categoría, sólo podrá comerciarlos en el país con las industrias usuarias, no pudiendo efectuarse ventas a terceros intermediarios. Las ventas al exterior se realizarán con la fiscalización del Banco Central de la República —eso para el manganeso— previa estimación del consumo del país en operaciones directas de YMAD con las firmas extranjeras interesadas y a los precios internacionales que el Banco Central considere equitativos.»

El otro inciso regula el movimiento del oro y de la plata posteriormente y dice así: «En cuanto al oro y la plata, el Banco Central de la República, una vez realizada la reserva necesaria para el uso interno de la industria del país, destinará un 50 por ciento del saldo —que le haya entregado YMAD— para la negociación de divisas extranjeras, que pondrá posteriormente a disposición de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y de la industria privada ya establecida en el país para ampliar, mejorar o renovar sus equipos industriales. El cincuenta por ciento restante lo atesorará como reserva monetaria a los efectos de valorizar el peso moneda nacional. Con tal propósito, el Banco Central podrá construir en la provincia de Catamarca, dentro o fuera de la jurisdicción de la zona de YMAD, depósitos con todas las seguridades adecuadas para recibir el oro o la plata en barras para su posterior traslado a su sede central.»

Como puede ver la comisión, el propósito de esos dos incisos es establecer con toda precisión y seguridad el manejo del oro una vez industrializado por YMAD, con el criterio de que, con el mismo mineral, podamos atender las exigencias de YPF, de la industria privada del país, valorizar el peso moneda nacional y satisfacer las esperanzas de las universidades de Tucumán y el pueblo de Catamarca. Ruego a la comisión que medite sobre la conveniencia de incorporar esos dos incisos, que transformarán casi automáticamente este organismo en un instrumento definitivamente al servicio de los altos intereses del país.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — Quiero hacer una aclaración porque no he sido suficientemente claro en la explicación que he dado hace un momento.

El inciso k) no se refiere a reservas mineras. Las reservas mineras sólo pueden establecerse por ley. En este caso el ente crea reservas económicas para realizar un vasto plan de exploración y explotación.

El inciso i) del decreto 270, refiriéndose a las facultades del directorio, dice que tiene atribuciones para fijar las retribuciones extraordinarias, que deben darse a los funcionarios, empleados y obreros, en razón de la eficacia del trabajo, de acuerdo con la reglamentación que

al efecto se dicte y dentro de un 5 por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.

El inciso k) del proyecto que tratamos ha sido tomado del decreto 270 y se refiere expresamente a reservas económicas que se crearán siempre y cuando estén de acuerdo los representantes de Catamarca y de la Universidad de Tucumán.

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Acepta la Comisión los agregados propuestos por el señor diputado por la Capital?

Sr. Prece. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 10 del despacho.

—Resulta afirmativa de 80 votos; votan 96 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 11.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 12.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Propongo el siguiente texto, en reemplazo del artículo 12 del despacho: «El Poder Ejecutivo de la Nación, la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán, el Banco Central de la República y el Tribunal de Cuentas de la Nación podrán designar uno o más delegados permanentes, cuyas atribuciones serán las siguientes: a) Examinar los libros y documentos de la institución y verificar el estado de caja y la existencia de títulos y valores de toda especie; b) Fiscalizar la ejecución y el cumplimiento del plan de acción a que se refiere el inciso f) del artículo 10; c) —inciso nuevo— Fiscalizar la reserva de minerales antes, durante y después de su extracción y de su industrialización.»

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Acepta la comisión el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital?

Sr. Prece. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 12 del despacho.

—Resulta afirmativa de 79 votos; votan 96 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 13.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pozzio. — Quiero que el señor miembro informante me aclare si el pensamiento de la comisión coincide con la interpretación que doy a la parte final del artículo 13, donde hace referencia a que la vinculación de la entidad con el Poder Ejecutivo será regida por las normas del derecho público.

Dice el artículo textualmente: «En todo lo que atañe a sus relaciones con el Poder Ejecutivo nacional, actuará por intermedio de la Secretaría de Industria y Minería del Ministerio de Economía, siéndole en ese aspecto aplicables las normas de derecho público.»

Esas normas son las que surgen del texto legal que consideramos, concepto amplísimo y en consecuencia creo que el espíritu de la comisión al redactar este artículo es el que surge del origen de la disposición que está en el decreto ley 14.957/46, luego ratificado por ley del Congreso, en el que se establece que la Dirección Nacional de Industrias del Estado tiene con el Poder Ejecutivo relaciones de carácter jerárquico administrativo.

Lo mismo ocurre con el decreto 15.027/56, que es el que da el estatuto orgánico a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, donde expresamente se hace referencia a la relación jerárquica, pura y exclusivamente en cuanto al derecho público.

Desearía que el señor miembro informante de la comisión me dijera si el sentido que tiene la última parte del artículo 13 del proyecto que consideramos es de que no comprende a todas las normas del derecho público, sino a las que surgen de esta misma ley.

Sr. Prece. — Tiene el sentido que interpreta el señor diputado Pozzio.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 13 del despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa de 82 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 14.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Propongo la eliminación de las palabras «compras y», porque al decir que YMAD efectuará sus contrataciones, se está empleando un término que abarca compras, ventas, etcétera.

Además, en la parte final de este artículo, donde dice «Mientras tanto, regirán las previstas a este respecto para Yacimientos Petrolíferos Fiscales», propongo que se agregue: «en lo que no esté expresamente modificado en la presente ley o reglamentos posteriores de la misma».

Sr. Peralta. — La comisión no acepta las modificaciones.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Aguirre. — Voy a sugerir a la comisión una modificación al artículo que estamos considerando. Después de las palabras «concurso privado de precios», agregar «no pudiendo en ningún caso exceder de treinta días —a partir de la fecha de apertura— la adjudicación de la contratación».

Lo hago, señor presidente, basado en la experiencia de que en las empresas del Estado la consideración de las licitaciones no se hace por lo general dentro de los 30 días, sino que se demora muchos meses, y cuando se adjudica la contratación, el adjudicatario no puede entregar los materiales porque la inflación ha hecho que el precio que ha cotizado no le permite comprar los materiales y entregarlos. Por eso sugiero a la comisión, en el deseo de colaborar, se establezca lo que he propuesto, a fin de que se consideren dentro de los 30 días todas las licitaciones y pueda este organismo desenvolverse con más agilidad.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Prece. — La proposición del señor diputado en defensa de los intereses de los que se presenten a las licitaciones, tendrá que ser contemplada en la reglamentación de la ley. Por lo tanto, la comisión no acepta la modificación propuesta.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Marini. — Con la esperanza de que el señor diputado por Santa Fe cambie su criterio, que parece ser inflexible, voy a proponer un agregado al artículo que consideramos, que se refiere a las licitaciones públicas y privadas a que ha aludido el señor diputado López Aguirre.

En la última parte del artículo dice: «Mientras tanto, regirán las previstas a este respecto para Yacimientos Petrolíferos Fiscales.» Yo voy a proponer el siguiente agregado: «con excepción de las tenidas en cuenta para firmar los contratos con Panamerican y el Banco Loeb, que no pueden ser invocadas como precedentes».

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — En el caso previsto por el artículo, rigen las disposiciones del estatuto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en forma transitoria. De acuerdo con la ley 13.653, sobre régimen legal de funcionamiento de empresas del Estado, el directorio de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio tiene que redactar su estatuto orgánico, para ser elevado posteriormente al Poder Ejecutivo, quien deberá aceptarlo o modificarlo. En ese caso, corresponderá que se tengan en cuenta las sugerencias que han sido propuestas.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. López Aguirre. — Señor presidente: bajo ningún aspecto puede considerarse que mi sugerencia es en favor de los licitantes, como lo expresara el señor diputado Prece. Es todo lo contrario: es en defensa de YMAD. A los licitantes no les conviene entregar sus productos o contrataciones después de seis meses, porque tendrían que hacerlo el precio cotizado en aque-

lla oportunidad. En cambio, pueden venderlo en el mercado al nuevo precio, debido a la inflación.

Acepto la sugestión del señor diputado Peralta de que en la reglamentación puede contemplarse esta cuestión, pero conozco perfectamente que una de las dificultades más grandes por que atraviesan las empresas del Estado es la demora en adjudicar las contrataciones necesarias para su desenvolvimiento; cuando se adjudica, los licitantes no entregan porque han incluido la cláusula de que el precio sólo se mantiene por pocos días. En consecuencia, las empresas del Estado no cuentan con los materiales y no pueden desarrollar su actividad.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 14.

— Resulta afirmativa de 79 votos; votan 95 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 15.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiaurre. — Voy a pedir a la comisión que aclare el alcance del artículo 15, que en su primer párrafo establece lo siguiente: «Al constituirse YMAD, el Estado nacional le aportará de rentas generales, como capital del mismo, la suma de veinte millones de pesos moneda nacional.»

Deseo saber si esa suma que entregará el Estado nacional a la entidad, es uno de los aportes de capital, o ese aporte constituye el capital inicial del ente estatal.

Observo que en la ley que estamos sancionando, hasta ahora YMAD no tiene capital. Habría, entonces, que dejar establecido que esos veinte millones constituyen el capital de YMAD.

Sr. Prece. — Es el aporte de capital inicial que hace la Nación.

Sr. Zubiaurre. — ¿Y cuál es el aporte de la universidad? ¿O esa suma tiene por objeto pagar las inversiones hechas por la Universidad de Tucumán?

Sr. Peralta. — El problema es que la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán no están en condiciones de financiar la empresa. La Nación interviene, como he explicado en la discusión en general, con un aporte de 20 millones y, además, con un préstamo sin interés de 150 millones de pesos.

Sr. Zubiaurre. — La verdad es que la ley no establece en ninguna parte cuál es el capital del ente que crea.

No insistiré en proposiciones modificatorias y, simplemente, señalaré las deficiencias para que se tengan en cuenta oportunamente, a fin de ser subsanadas.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Propongo el siguiente texto para el artículo 15: «Al constituirse YMAD, el Estado nacional le aportará de rentas generales, como anticipo del capital del mismo, la suma de diez millones de pesos moneda nacional (adviento que yo propicio mayor capital para lograr el desenvolvimiento de la empresa). Inmediatamente de recibidos esos diez millones, el directorio preparará en un plazo no mayor de 60 días un primer plan técnicoeconómicofinanciero de la institución, basado en la posibilidad de poner en funcionamiento a la brevedad posible un plan de elaboración y beneficio de los minerales, con una capacidad mínima de mil toneladas diarias. Durante ese período el directorio sólo tomará el personal técnicoadministrativo estrictamente indispensable a ese efecto. Una vez aprobado por el Poder Ejecutivo dicho plan, el Estado nacional aportará de rentas generales un segundo aporte de 40 millones para completar el capital de YMAD— con lo que quedaría satisfecha la inquietud de mi compañero de representación, y el capital ascendería de esta manera a 50 millones.

»Además, se otorgará simultáneamente, en ese acto, a YMAD la suma de 300 millones de pesos en préstamo, sin interés, reembolsables en diez cuotas anuales iguales, a contar del quinto año de su constitución.»

El objeto de esta proposición es dar una norma que permita un desenvolvimiento adecuado de la empresa, anticipándole lo necesario para constituirse y realizar un amplio estudio, concluido el cual podrá saberse positivamente qué equipos y cantidad de técnicos necesita, así como el sistema económico y administrativo más conveniente para que la empresa pueda llevar a cabo los fines propuestos.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Correa. — Señor presidente: como representante de la provincia de Catamarca, socio en el ente autárquico, debo agradecer la generosidad del señor diputado Verdaguer; pero quiero señalar, ratificando una vez más las expresiones del señor diputado Peralta, que el proyecto de ley que considera la Honorable Cámara no es una obra improvisada, toda vez que sus cláusulas se ajustan a un mecanismo y sentido de unidad imprescindibles en todas las leyes, de conformidad con un buen tecnicismo legal.

Deseamos dejar aclarado que el capital del ente autárquico, fijado en 20 millones de pesos, no es una suma tomada al azar, sino que responde a un estudio técnico y serio para hacer posible la explotación.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Entiendo, señor presidente, que con el capital que se entrega a YMAD y con el empréstito que se prevé, escasamente va a poder desarrollar la empresa la planta piloto,

que se estima elaborará 250 toneladas diarias de material.

Como hemos dicho anteriormente, esa planta sólo va a permitir la elaboración de un máximo de tres kilos diarios de oro. Sería escásimo, entonces, el valor bruto del oro que se obtenga para pagar los grandes gastos administrativos, técnicos y financieros de la empresa. Entendemos, pues, que la empresa no va a poder manejarse con el capital que se le asigna, y el tiempo va a darme la razón.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — A esta altura del debate, señor presidente, puedo decir sin temor a equivocarme que las apreciaciones que hace el señor diputado Verdaguer tienen mucho de improvisación.

Sr. Verdaguer. — No diga eso el señor diputado. Hemos intervenido con mucha seriedad en este debate.

Sr. Peralta. — Este proyecto ha sido estudiado minuciosamente, y voy a demostrar que efectivamente es así.

En un informe elevado por el ingeniero Alberto Monchablon al Poder Ejecutivo, expresa que es necesario hacer las siguientes inversiones: compresores, 100.000 dólares; moto compresores, 10.000 dólares; guinche extractor completo, 130.000 dólares; equipo básico de concentración, 360.000 dólares; martillos neumáticos, 100.000 dólares; en total, 700.000 dólares. Además es necesario para la instalación y montaje de la planta de laboratorio, 9.000.000 de pesos; fuerza motriz en la mina, 8.500.000; fuerza motriz en la planta de concentración, 10.500.000; talleres mecánicos, 2.000.000 de pesos. Esto ha servido de base para establecer el monto de lo que estipula el artículo. Ya ve como todo tiene una base sólida.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Santoni. — El artículo 15 expresa claramente la constitución del capital que lo aportará esencialmente el Estado nacional.

Por otra parte, por el artículo 10 se autoriza a crear las reservas necesarias para ampliar la exploración y explotación de los yacimientos. Esas reservas se tomarán indudablemente de las utilidades que vaya produciendo la empresa. Por lo tanto creo que el artículo 15 es absolutamente claro. En consecuencia, la comisión no va a aceptar ninguna modificación sobre este artículo.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Si no se acepta el mayor capital que se propone para el mejor desarrollo de la empresa, que al menos la comisión analice la conveniencia y acepte que previamente se entregue una parte del capital, luego se prepare el plan económico para el desarrollo de la empresa, y después de aprobado por el Poder Eje-

cutivo, entregue rentas generales la totalidad del crédito y complete el capital.

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Prece. — La comisión no acepta.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 15 del despacho.

— Resulta afirmativa de 83 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 16.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Propongo dividir este artículo en dos partes. La primera parte sería el artículo 16 del despacho reemplazando el inciso a) por el siguiente: «a) Solicitar préstamos bancarios a entidades bancarias oficiales exclusivamente».

Y la segunda parte diría: «El directorio de YMAD no podrá contratar empréstitos de dinero, sobre el crédito de sus yacimientos con entidades mixtas privadas, nacional o extranjero, sino mediante ley sancionada expresamente para cada caso por el Honorable Congreso de la Nación» (como lo dispone el artículo 67, inciso 3º de la Constitución Nacional).

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — Evidentemente, el sentido que tiene el proyecto que tratamos y que envió el Poder Ejecutivo está en total discordancia con los planteos que hace el señor diputado Verdaguer. A esta altura del debate la Cámara ignora que, según el proyecto del señor diputado Verdaguer, además de dirigir esta empresa un directorio, también hay una comisión bicameral de contralor y estímulo, integrada por diputados y senadores de la Nación, que deben reunirse diez días en la Capital Federal y otros diez días en la provincia de Catamarca. En el proyecto del Poder Ejecutivo se ha buscado crear un organismo que tenga agilidad y que pueda actuar como una empresa privada.

Sr. Verdaguer. — Que nadie se entere de lo que pasa...

Sr. Peralta. — Acá el señor diputado Verdaguer, que se siente molesto por mis apreciaciones, establece en el artículo 15 de su proyecto de ley que Yacimientos Mineros de Aguas del Dionisio no puede contraer empréstitos si no es con el consentimiento del Congreso de la Nación. Así que yo voy a solicitar a la Honorable Cámara que se apruebe este artículo en la forma como está redactado, para evitar que se trabe la acción de la empresa.

Sr. Santoni. — La comisión estima totalmente inadmisibles las modificaciones propuestas por el señor diputado Verdaguer.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiaurre. — Aunque parezca raro, y a raíz de las expresiones vertidas recientemente por el señor diputado Peralta, este diputado de la oposición va a salir en defensa del Poder Ejecutivo. La verdad es que el proyecto, como ha sido pública y notoriamente confesado, es un connubio —dicho sin mala intención— tucumano catamarqueño y no del Poder Ejecutivo. Seguramente lo deben haber hecho a la sombra de algún naranjo y pensando en aquello «que todos toman naranjada y el pobre naranjo, nada».

Sr. Juárez Peñalva. — Por eso tiene el sabor dulce y agradable de las naranjadas tucumanas.

Sr. Zubiaurre. — Pero no se ha tenido en cuenta al Estado nacional que es, en esta ley, el naranjo del cuento.

Yo pediría a la comisión, que dice que éste es un estudio serio, orgánico y medular, me explicara por qué este ente —YMAD— puede recibir contribuciones exclusivamente del Estado nacional y no de particulares o estados provinciales.

Sr. Breyter. — Por razones de federalismo.

Sr. Zubiaurre. — ¿Qué tiene que ver el federalismo con las contribuciones? Es, evidentemente, una omisión. Yo no sé si va a aceptar la comisión una modificación con el fin de que pueda aceptar contribuciones de otros orígenes lícitos, pero dejo así establecida, una vez más, otra de las tantas deficiencias que a mi juicio está ofreciendo este proyecto que estamos tratando en forma tan singular que no deja margen para introducirle modificaciones adecuadas y realmente justificadas.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Santoni. — Por este artículo 16 se acuerdan facultades al directorio para solicitar préstamos bancarios a entidades oficiales mixtas o privadas, o recurrir a cualquier otra forma de crédito o financiación, pero de ninguna manera se admite que se reciban contribuciones con carácter de aporte de capital a esas instituciones particulares, ya que públicas son la provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán y el gobierno de la Nación.

Por esas razones, la comisión no acepta las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 16.

—Resulta afirmativa de 83 votos; votan 96 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 17.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 18.

Sr. Verdaguer. — He pedido la palabra, señor presidente, para referirme al artículo 17.

Sr. Presidente (Monjardín). — Ya ha sido aprobado, señor diputado.

Sr. Verdaguer. — Solicito que se reconsidere.

Sr. Presidente (Monjardín). — La verdad es que el presidente miró al señor diputado presumiendo que solicitaría la palabra; pero como no advirtió que lo hiciera, se dio por aprobado el artículo 17.

Reglamentariamente corresponde votar la moción de reconsideración.

Sr. Verdaguer. — Así lo he solicitado.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar la moción de que se reconsidere el artículo 17.

—Resulta negativa de 73 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 18.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiaurre. — Yo no quiero de ninguna manera molestar a los señores diputados de la mayoría, pero, a la manera de tábano, sigo formulando las observaciones que merece el texto de la ley.

En el artículo 18 del proyecto encuentro una contradicción con relación a lo establecido en el inciso j) del artículo 10, ya sancionado, por el que se destina un 5 por ciento de las utilidades «líquidas y realizadas» para retribución extraordinaria a los funcionarios, empleados y obreros. Por su parte, este artículo 18 establece que las «utilidades líquidas y realizadas» que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma: el 60 por ciento para la provincia de Catamarca, y el 40 por ciento para la Universidad de Tucumán.

Yo pregunto: el 5 por ciento para funcionarios, empleados y obreros, ¿dónde está? En ambos textos se habla de «utilidades líquidas y realizadas»: el 60 por ciento para Catamarca, el 40 por ciento para Tucumán; ¿y el 5 por ciento?

Sr. Marini. — Evidentemente, correspondería hacer un agregado.

Sr. Zubiaurre. — De acuerdo con el texto del proyecto, habría que distribuir el 105 por ciento.

He aquí otra pequeña diferencia que conviene dejar anotada. Yo no sé si se admitirá la aclaración o se dejará el artículo tal cual, significando una expresión de anhelos de que en la reglamentación de la ley se tenga en cuenta esta otra deficiencia para tratar de subsanarla, aunque sea transitoriamente. Luego en la ley que trataremos oportunamente introduciremos la modificación correspondiente.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Domingorena. — Evidentemente, el 100 por ciento a que se hace referencia en el artículo 18 es lo que queda luego —así lo hace pensar toda lógica interpretativa— de haber sido descontado el 5 por ciento para otros efectos. No habría, pues, un 105 por ciento, como se ha dicho un poco jocosamente, sino que, producido el descuento del 5 por ciento, se ha de repartir el 100 por ciento restante.

Sr. Pozzio. — Es el mismo caso de la ley de accidentes del trabajo, donde deducido varios índices queda un porcentaje dado.

Sr. Zubiaurre. — Yo me he limitado a señalar y a observar.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Propongo la siguiente redacción para este artículo: «De las utilidades que arrojen los balances, luego de restablecer las reservas legales, las reservas especiales, para el cumplimiento en término de los compromisos contraídos con el Estado nacional, según las condiciones establecidas en esta ley y demás reservas establecidas o que puedan establecerse en el futuro si sus estatutos, para el acrecentamiento de su capital y normal desarrollo se harán de las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances, la siguiente distribución: (lo demás igual que la ley)

Sr. Santoni. — La comisión no acepta la proposición del señor diputado por la Capital.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 18 del despacho.

—Resulta afirmativa de 79 votos, votan 95 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 19.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Propongo el siguiente texto para el artículo 19: «YMAD deberá: a) Instalar y poner en funcionamiento la planta de concentración y beneficio, cuya capacidad mínima será de 1000 toneladas diarias de mineral en un plazo máximo de 3 años a partir de la constitución de la institución, y realizar el desarrollo de una adecuada exploración e industrialización; b) Mantener un ritmo de producción mínima de acuerdo con la capacidad de la planta; c) Realizar dentro del área de su dominio intensos trabajos de exploración y cateo de todos los minerales de primera categoría que pudieran hallarse en ese territorio, especialmente la búsqueda de minerales radiactivos e hidrocarburos.»

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — Quisiera que el señor diputado Verdaguer explicase por qué propicia una capacidad mínima de mil toneladas diarias. Deseo que el señor diputado nos diga cuál es la razón

científica o el criterio técnico que ha tenido para establecer esa cifra.

Sr. Verdaguer. — Aunque no he tenido la suerte de que la comisión haya contestado ninguna de mis preguntas, voy a contestar al señor diputado con mucho gusto.

Hemos consultado a un núcleo de científicos y técnicos, del mismo modo que lo pudo hacer la comisión del Senado. Quienes nos asesoraron son doctores en ciencias económicas, geólogos, químicos, miembros del Tribunal de Cuentas de la Nación y altos funcionarios del Estado en todos los ramos de la administración. Esto me permite afirmar que las proposiciones que hacemos son consecuencia de estudios serios y profundos, de los que no está ausente un alto sentido patriótico.

Cuando la Universidad Nacional de Tucumán pedía la concesión, ofrecía realizar con 160 millones de pesos una planta de elaboración y beneficio de 500 toneladas, en tanto que ahora con un capital mayor la ley sólo prevé una planta de 250 toneladas.

Yo quisiera que el señor diputado por Catamarca consultara con empresas mineras extranjeras para ver si alguna vendría al país a desarrollar una industria minera para obtener sólo tres kilogramos diarios de oro, que es lo que se logrará con una planta de 250 toneladas. Con el propósito de que la industrialización sea más amplia, y se puedan obtener por lo menos doce kilos diarios de oro, y el equivalente en pesos moneda nacional en manganeso, que duplicará el valor del oro, es necesario una planta de mayor capacidad.

Al respecto debo decir que todos —el gobierno de Catamarca, la Universidad de Tucumán, la comisión y yo— hemos omitido señalar hasta ahora que el manganeso que se obtenga por los procedimientos que convenga de acuerdo a los consejos que dan organismos de las Naciones Unidas, tendrá mucho mayor valor que el oro, pero requerirá también otros procesos de elaboración que no están contemplados en el equipo que propone el despacho de la comisión.

La única manera de que esta empresa sea útil al país, y no nos veamos en el futuro abocados a la necesidad de ampliar sus plantas, es darle todo el apoyo que necesita, buscando en permanente desarrollo por el cumplimiento de las características económicas que corresponde a institución de tal magnitud.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Domingorena. — El señor diputado Verdaguer ha incurrido en un lamentable error al hacer el análisis de este artículo, porque ha tomado la capacidad de 250 toneladas diarias como si fuera capacidad tope de producción, sin reparar que se dice que no podrá ser infe-

rior a 250 toneladas diarias. Esto significa que puede llegar —de más está decirlo— a 1.000 toneladas por día.

Como establece un mínimo, sin que deba tomarse como tope máximo de la capacidad de elaboración de la planta, entiendo que no hay nada en discusión.

Sr. Verdaguer. — Yo pido mil toneladas mínimas por día.

El directorio de YMAD, con el capital que señala el proyecto, no podrá comprar un equipo para elaborar más de 250 toneladas. Entiendo que por eso la comisión del Senado redujo la planta de explotación del tonelaje fijado con un préstamo de 160 millones de pesos, a 500 toneladas con un préstamo mayor. Con el capital votado YMAD no podrá por ahora poner en funcionamiento una planta y equipo correspondiente para beneficio de 1.000 toneladas diarias.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Peralta. — Señor presidente: este artículo también ha sido estudiado por técnicos que han hecho apreciaciones en el mismo terreno donde se encuentra el yacimiento.

He dicho al comenzar mi informe que este yacimiento tiene importancia, no porque ahora se lo haya descubierto sino porque le dio valor el método científico de la cianuración, que ha aparecido en la industria metalúrgica. He explicado detalladamente, al hacer mi informe en general, el procedimiento al cual se debe someter al mineral para separar el oro, la plata y el manganeso. Evidentemente, lo ideal sería que diariamente se trabaje en muchas más toneladas de las previstas, pero hay que ajustarse a una realidad.

De acuerdo al informe técnico que tengo en mi poder, no hay en la zona agua suficiente como para establecer una planta que tenga una capacidad superior. Además, por el artículo no se establece que se deban trabajar 250 toneladas diarias. Lo que se estipula es una base mínima y puedo asegurar a los señores diputados que no se van a trabajar 250 toneladas, sino posiblemente 500 toneladas diarias. Pero si se elevase la cuota mínima establecida podríamos crear una situación difícil al ente, porque podría darse el caso de la caducidad al no poder cumplir con lo previsto.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Se tiene el criterio, y de ahí posiblemente partan algunos errores de interpretación de las posibilidades económicas de la empresa, de hablar de una planta mínima, pero si se adquiere un equipo para 250 toneladas, eso no puede modificarse sino con otro equipo. Si una empresa privada quisiera llevar a efecto la explotación intensiva, o si estuviéramos en un

país altamente industrializado, o el nuestro lo fuere, no sólo cabría la planta de elaboración y beneficio para 250 toneladas, sino una planta de elaboración y beneficio de mayor capacidad para cada uno de los yacimientos que existan en la zona. Agua de Dionisio comprende a Farallón Negro, Macho Muerto, Los Viscos y otros yacimientos, que distan algunos kilómetros de distancia entre sí. Tanto es así que a esas zonas geológicas se las conoce por su distribución centrooeste. Quiere decir que cabe realizar una explotación intensiva, y la única que puede resultar beneficiosa para el país y para una empresa que se quiera constituir para siempre y no para un día es la desarrollada con el máximo posible de producción para que los gastos exagerados que pueda crear una burocracia no insuman todo el beneficio que pueda dar el yacimiento.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiaurre. — Comparto en su totalidad el pensamiento expuesto por el señor diputado Verdaguer en cuanto al propósito de lograr una mayor producción, pero lo cierto es que el artículo 19 es previsor y está coordinado, en cierta forma, con el artículo posterior para evitar, precisamente, que un mínimo muy elevado pueda dar lugar a que juegue el artículo 281 del Código de Minería, que importaría la caducidad de la concesión.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 19.

— Resulta afirmativa de 77 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 20.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Verdaguer. — Propongo como agregado al artículo 20 una serie de incisos referentes al contralor de la posibilidad de disolución de la empresa.

«A los efectos que determina este artículo YMAD será controlada por una comisión bicameral de contralor y estímulo, compuesta por un presidente y ocho vocales, los que serán designados por el Honorable Congreso de la Nación, entre miembros pertenecientes a ambas cámaras. A tal fin el Honorable Senado de la Nación designará a tres señores senadores, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la minoría; la Honorable Cámara de Diputados de la Nación designará seis señores diputados, correspondiendo tres a la mayoría, dos a la primera minoría y uno a la segunda minoría.

En el caso de no existir en alguno de los cuerpos minoría, todos sus miembros serán designados por la mayoría. En el caso de no existir segunda minoría, el señor diputado co-

responsable a ésta será designado por la primera minoría. Cada año la comisión bicameral designará un presidente y un secretario, cargos que serán desempeñados por un senador y un diputado.»

Otro inciso: «Las sesiones de la comisión bicameral de control se efectuarán toda vez que los miembros lo consideren, en la Capital Federal.» Digo «toda vez», no diez días en un lado y diez en otro, como se quiso interpretar para ridiculizar mi proposición. «...efectuándolas en el lugar, día y hora que se fije en la primera sesión constitutiva, a realizarse dentro de los treinta días de promulgada la presente ley. Las sesiones en la provincia tendrán una duración máxima de diez días, pudiendo continuar las mismas en caso necesario, en la Capital Federal. Las sesiones en provincia serán únicamente trimestrales. Las resoluciones de la comisión se tomarán por simple mayoría de votos. El presidente tendrá doble voto en caso de empate. El quórum para deliberar válidamente será de cinco miembros».

Otro inciso: «La Comisión Bicameral podrá investigar todos los aspectos técnicos, administrativos, económicos, financieros y de todo orden, especialmente: a) El cumplimiento de lo establecido en esta ley, en el estatuto orgánico y en el reglamento interno de YMAD; b) Relaciones entre YMAD y el Banco Central de la República; c) Designar peritos para establecer el valor de las reservas no explotadas, valor de las reservas industrializadas, títulos de ley del mineral de criaderos, vetas, yacimientos, placeres auríferos o contralor posterior de pureza de los minerales extraídos e industrializados por YMAD; d) Control de los créditos especialmente en lo establecido en el artículo 15; e) Resolver en los casos de cesantías o inhabilidades de los miembros del directorio; f) Oír como tribunal de apelación todas las reclamaciones que por cesantías plantee el personal de toda categoría de YMAD; g) Control de la producción h) Control del destino dado por el Banco Central al oro y la plata de acuerdo con lo establecido; i) Analizar los balances, inventarios y memoria e informar anualmente al Honorable Congreso de la Nación sobre la marcha de YMAD.

Otro inciso: «El Poder Ejecutivo de la Nación, la provincia de Catamarca, la Universidad de Tucumán, el Banco Central de la República y el Tribunal de Cuentas podrán designar uno o más delegados permanentes, cuyas atribuciones serán las siguientes: a) Examinar los libros y documentos de la institución y verificar el estado de caja y la existencia de títulos y valores de toda especie; b) Fiscalizar la ejecución y el cumplimiento del plan de acción; c) Fiscalizar las reservas de mineral an-

tes, durante y después de su extracción e industrialización.»

Otro inciso sería el siguiente: «El Tribunal de Cuentas de la Nación podrá además destacar uno o más auditores al especial efecto de a) Verificar la correcta aplicación del plan de cuentas, la veracidad, exactitud y simultaneidad de las registraciones y la oportuna presentación de los estados periódicos; b) Analizar los actos acordados por el directorio para comprobar si se ajustan a las disposiciones legales o reglamentarias que correspondan y si se encuadran dentro de los planes de acción y presupuestos de explotación autorizados. Los auditores propiciarán ante el tribunal de cuentas a que él mismo resuelva, conforme con las atribuciones que le acuerda el artículo 85 de la ley de contabilidad, las observaciones que consideren procedentes respecto de todo acto o procedimiento que se oponga a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, sin que en ningún caso las observaciones formuladas tengan efecto suspensivo; c) realizar todo otro trámite o investigación que a juicio del tribunal de cuentas de la Nación resulte necesario.»

Otro inciso sería el que sigue: «Tanto los miembros de la Comisión Bicameral como los delegados y auditores serán retribuidos por la parte a que representan y ejercerán sus funciones de modo que no entorpezcan la marcha regular de la institución. Las autoridades de YMAD dispondrán, a pedido de la Comisión Bicameral, de los delegados y auditores, las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de sus funciones. En todos los casos los delegados y auditores dejarán constancia de sus observaciones en el libro de actas, elevando a la vez copia de las mismas a la Comisión Bicameral de Control y Estímulo.»

Sr. Presidente (Monjardín). — ¿Acepta la comisión el agregado propuesto por el señor diputado por la Capital?

Sr. Prece. — Señor presidente: la comisión no puede aceptar el extenso agregado propuesto por el señor diputado Verdaguer. El agregado que se propone es más largo que todo el proyecto del ley.

Sr. Marín. — La extensión del agregado no puede tenerse en cuenta para determinar su aceptación por parte de la comisión.

Ese no es un argumento serio.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pozzio. — Señor presidente: creo que este artículo en verdad tiene mucha seriedad y en ese sentido lo vamos a encarar. Por este motivo solicito que el señor miembro informante de la comisión establezca con toda precisión cuál es el sentido de este artículo, en su primera parte, para cohesionarlo con lo establecido en el artículo 22.

Dice así: «Y MAD no podrá ser declarada en quiebra. El Poder Ejecutivo nacional podrá resolver la disolución y liquidación de la empresa por haberse declarado la caducidad de la concesión.» Y sigue el artículo.

El artículo 22 dispone: «En cualquier caso de caducidad de la concesión, los yacimientos quedarán reservados para el Estado por el término de un año.»

El artículo 20 se aparta de los principios del derecho común e incluso de los principios de otras leyes similares que indudablemente han sido el origen de esta disposición.

Deseo que la comisión aclare si entiende que el único caso de cesación de la sociedad es el de la caducidad de la concesión. Digo esto sin entrar a la discusión de si la revocación es cosa distinta de la caducidad o está dentro de este término amplio admitido por ciertos autores del derecho administrativo.

Tiene esto importancia porque el primer apartado se refiere a disposiciones que figuraban en la ley de sociedades mixtas, en cuanto esta clase de sociedades no podían ser declaradas en quiebra. El artículo 11 de la ley de creación de estas sociedades estatuye: «Las sociedades de economía mixta regidas por esta ley no podrán ser declaradas en quiebra, pero podrán ser disueltas en las circunstancias previstas por los artículos 369, 370 y 371 del Código de Comercio y de acuerdo con el régimen que expresamente se disponga para esa eventualidad».

Es decir, señor presidente, que la pregunta tiende a establecer si efectivamente el caso de caducidad es el único en que la sociedad perdería su existencia. Porque de lo contrario tendríamos que establecer que las causales indicadas en el Código de Comercio que se aplican en el derecho privado, de acuerdo con la redacción del artículo, también juegan como causales de disolución de la sociedad.

En definitiva, deseo que el miembro informante me aclare si la caducidad es la única causa de cesación de este ente que se crea.

Para el más completo enfoque de esta cuestión, voy a referirme a tres artículos del Código de Comercio.

El artículo 369 expresa: «Luego que los directores o administradores se cercioren de que el capital social ha sufrido una pérdida del 50 por ciento...»

El artículo 370 dice: «Las sociedades anónimas sólo pueden disolverse: 1º Por la expiración del término de su duración, o por haberse acabado la empresa que fue objeto especial de su formación; 2º Por quiebra; 3º Por liquidación, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior; 4º Por la demostración de que la compañía no puede llenar el fin para el que fue creada.»

Artículo 371: «Disuelta la sociedad, será liquidada por los directores o administradores, si no se dispone otra cosa por los estatutos.»

Es decir, que son situaciones distintas la liquidación y la disolución, que parecerían estar equiparadas en esta disposición legal.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Aquino. — En el curso del debate se han hecho observaciones por parte de algunos señores diputados, no obstante que el proyecto fue estudiado por distintas comisiones y ha contado con despacho unánime de algunas de ellas.

El proyecto guarda perfecta coherencia y, por otra parte, recoge la experiencia de la legislación universal.

El señor diputado Pozzio sabe perfectamente, por su versación jurídica, que la literatura jurídica universal, fundamentalmente a través de los tratadistas italianos y franceses, ha establecido que todos aquellos entes en los cuales participe el Estado no pueden ser llevados a quiebra. Un interés público cubre el fin de la sociedad. Así se ha comprobado en los casos de las sociedades de economía mixta formadas en Francia para su evolución en las colonias. A la misma conclusión llegan los tratadistas italianos. De modo que, buscando la esencia jurídica de esta construcción, no se ha podido hallar otra justificación que el propio prestigio del Estado, que de alguna manera se vería comprometido de llevarse a estos entes a un tipo de liquidación con quiebra.

Sr. Pozzio. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Aquino. — Sí, señor diputado.

Sr. Pozzio. — Yo no me refiero al caso especial de la quiebra, que advertí que estaba en otra disposición, sino a las causas de disolución y caducidad, y pregunto si esa caducidad es la única causal de disolución de la sociedad o si existen las otras que leí del Código de Comercio.

Sr. Aquino. — El artículo 19 recientemente votado expresa en su última parte que el incumplimiento de las condiciones enumeradas en el artículo dará lugar a la aplicación de lo establecido por el artículo 281 del Código de Minería, es decir, que en ese caso procede la disolución de la sociedad.

Sr. Verdaguer. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Aquino. — Sí, señor diputado.

Sr. Verdaguer. — Justamente ese artículo 19 debe ser revisado, dado que impone una causal de disolución o de pérdida de la concesión por una obligación que nosotros le estamos creando, de levantar una determinada planta de labor. En realidad, nosotros debiéramos haber dicho en ese artículo 19 que «esta exigencia de labor no obliga a Y MAD con respecto a las disposiciones de caducidad que establece el Cód-

digo de Minería, y que esa caducidad sólo podrá producirse en el caso de incumplimiento estricto de las normas que establece el Código de Minería», que son simples y elementales y que no le obligan a realizar todo lo que en esta ley le imponemos. Es decir, que nosotros, en lugar de facilitarle la tarea, le ponemos condiciones que pueden motivar la caducidad de la concesión en caso de incumplimiento, lo que el propio código no le exige.

Sr. Aquino. — Yo entiendo —a título de contribución aclaratoria— que en el caso de que este ente se encontrase en una situación de cesación de pagos, de imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones, podrían arbitrarse distintos recursos, podría contribuir con mayor suma el Estado nacional. Es una hipótesis eventual que podría ocurrir, y precisamente a ese objeto obedece la cláusula de no ser llevado a quiebra.

Esa es la interpretación que yo creo que surge con claridad de este artículo.

Sr. Pozzio. — Es decir, que la caducidad es la única causal.

Sr. Marini. — Eso es lo que tiene que quedar aclarado a través de este debate.

Sr. Breyter. — En el debate del Senado quedó también perfectamente aclarado.

Sr. Pozzio. — Es decir, que las establecidas en la última parte del artículo 19 y en este artículo 20 son las causales a que hace referencia el artículo 22, esto es, caducidad. No hay aplicación de las otras disposiciones del Código de Comercio.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 20.

—Resulta afirmativa de 82 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Monjardín). — En consideración el artículo 21.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiaurre. — Señor presidente: en este artículo se establecen facultades que yo estimo inconstitucionales y peligrosas, porque avanzan sobre las potestades provinciales al disponerse que los bienes y las actividades de YMAD quedan exentos de toda clase de gravámenes, impuestos y tasas de carácter nacional, provincial y municipal. Entiendo que, por una ley nacional de este tipo, no podemos eximir del pago de impuestos, que no corresponde a las atribuciones específicas e institucionales del Poder Legislativo.

Sr. Presidente (Monjardín). — Se va a votar el artículo 21.

—Resulta afirmativa de 85 votos; votan 98 señores diputados.

—Se aprueban los artículos 22, 23 y 24.

Sr. Zubiaurre. — Pido la palabra para proponer un artículo nuevo.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiaurre. — A los efectos de cubrir deficiencias inmediatas de la ley, incluso algunas que ya han sido debatidas en esta sesión, considero que debe hacerse una remisión expresa a las disposiciones de la ley 13.653, para todo lo que no esté previsto en este proyecto que consideramos. De esa manera se facilitará el desenvolvimiento y la acción del ente que se crea.

Hago moción de que se agregue un artículo nuevo con el sentido que he dejado expuesto.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pozzio. — En el artículo 13 del proyecto existe ya una remisión, para cada clase de relaciones del YMAD, a las disposiciones de las leyes que puedan aplicarse supletoriamente, entre las cuales evidentemente podría estar incluida la ley a que hace referencia el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zubiaurre. — De acuerdo con la aclaración formulada por mi compañero de sector, el señor diputado Pozzio, y entendiendo que sus palabras servirán para determinar el alcance de la aplicación a darse a la ley en un momento determinado, así como que ellas son la expresión del deseo de la Cámara de que se tengan en consideración las disposiciones de la ley 13.653, voy a retirar la proposición que había formulado.

Sr. Presidente (Monjardín). — El artículo 25 es de forma.

Queda sancionado el proyecto de ley (1).

14

INDICACION

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Gómez Machado. — Tengo sobre mi banca la versión taquigráfica de las palabras vertidas por el señor diputado Verdaguer esta noche en la Cámara.

La gravedad de los términos vertidos, cualquiera sea la responsabilidad política o personal de quien las ha expresado, hace que este cuerpo tenga que pronunciarse al respecto. Por esta razón solicito que se dé traslado de esas expresiones a la Comisión de Asuntos Constitucionales, pidiendo pronto despacho sobre esta cuestión.

Sr. Presidente (Monjardín). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.